

DESARROLLO RURAL BAJO FUEGO CRUZADO: EL ROL DE LAS ORGANIZACIONES DE APOYO A BASES (OAB) EN SITUACIONES DE VIOLENCIA POLÍTICA EN EL PERÚ

Michael L. Smith*



Ronderos de Cerro de Pasco, 1990. Victor Ch. Vargas, TAFOS

* Coedición en inglés: International Development Research Centre (IDRC, Ottawa, Canadá) e Instituto de Estudios Peruanos (IEP, Lima, Perú), 1992. Traducción de Ricardo Alvarado Portalino.

POSTDATA

Este estudio fue preparado originalmente en 1990, cuando el conflicto armado en el Perú empeoraba y hundía más al país en el torbellino de la violencia y la descomposición institucional. Fue publicado como una monografía por el IDRC en 1991 y, como un pequeño libro en español, por el Instituto de Estudios Peruanos. Ambos están ahora fuera de circulación, así que voy a publicarlos en Internet.

Pueden encontrar más materiales en el [Archivo Sendero](#), publicado en 1992 bajo los auspicios de la [Federación de Científicos Americanos](#) (FAS) en Washington, DC, Estados Unidos. Ellos han hecho seguimiento a la influencia de Sendero Luminoso y a la captura de su líder, Abimael Guzmán. Puede que también quieran ver mi [informe de noticias](#) del mismo período. Pueden encontrar una mirada sobre las amplias implicaciones de la crisis peruana en un [ensayo](#) que escribí en 1985.

Los tres años que empleé en el estudio de la violencia política en el Perú fueron, intelectualmente, el período más desafiante de mi vida. He viajado por todo el país y pasé semanas en comunidades remotas, guiado por líderes locales. También tuve la libertad de pasar largas horas reflexionando sobre mis experiencias, mis apuntes de entrevistas, leyendo literatura especializada y compartiendo mis ideas con personas que estaban mucho más informadas sobre el Perú que yo. Aún hoy, me parece que esa experiencia ha dejado mucho material aún por explotar. Estoy buscando el lugar adecuado para reunirlos.

INTRODUCCIÓN

Las Organizaciones de Apoyo a Bases (OAB) o Centros de Promoción del Desarrollo han desempeñado un papel crucial en el desarrollo rural del Perú. Su impacto va mucho más allá de la cantidad de fondos invertidos en el campo; ellas han servido como laboratorios sociales en los esfuerzos por romper los cuellos de botella del desarrollo en los Andes peruanos. Frecuentemente han sido una red segura y un catalizador de las organizaciones de base y las comunidades locales. Al reunir fuerzas y recursos, los grupos sociales emergentes han dejado su huella como protagonistas en el escenario regional y nacional, desde que en 1980 una creciente ola de violencia política se ha extendido por todo el país. A finales de la década, el conflicto ha costado cerca de 20.000 vidas y miles de millones de dólares en daños y perjuicios. La dinámica social y política desencadenada por esta tendencia ha puesto en duda la viabilidad de las instituciones civiles y del gobierno democrático. Asimismo, ha bloqueado las perspectivas de desarrollo en las zonas rurales del país. Naturalmente, esta violencia afecta a los centros, junto con la sociedad peruana y las comunidades que son objetivo de sus programas. De hecho, a veces las OAB se han convertido en blancos para las fuerzas beligerantes.

El incremento de la violencia a fines de 1988 puso a las OAB y otras instituciones frente a un hecho perturbador: la violencia iba a ser una sombra constante en su trabajo. Este descubrimiento fue desconcertante, y la plena toma de conciencia respecto de sus consecuencias plena acaba de empezar. La amenaza de la violencia política afecta a los centros de varias maneras: pone en peligro los centros como instituciones, reduciendo su capacidad para llevar a cabo sus programas. La violencia plantea un serio obstáculo para el desarrollo mismo, en medio de la peor crisis del Perú en este siglo.

En el plano personal, la violencia cuestiona el trabajo privado de desarrollo como opción para canalizar –en acciones prácticas y organizativas– las preocupaciones individuales por el bienestar de sectores desfavorecidos, como opción profesional y como forma de vida. El Perú no es el único país que

tiene una guerra no convencional o conflicto de baja intensidad en su territorio. Sin embargo, las OAB peruanas y los consultores extranjeros no hemos encontrado ninguna documentación sobre el rol de las agencias de desarrollo en situaciones de violencia política. Tal vez existan evaluaciones sobre las OAB y centros que hayan permanecido como documentos internos, debido a su carácter sensible.

Este trabajo se propone hacer frente a este vacío, contribuyendo a una evaluación de las OAB, sus socios locales, los organismos de financiación y otras partes interesadas, y cómo pueden cumplir con sus funciones. Debido a que el Perú está en extrema coacción social, política y económica, ofrece la oportunidad de examinar sus prácticas en la concepción, planificación y aplicación de los programas de acción para el desarrollo rural. Esta situación exige un replanteamiento de muchos supuestos que los funcionarios y los expertos dan por sentados. También es mi opinión que gran parte de este cuestionamiento puede ser aplicable a los programas de desarrollo en general. Este informe no tiene por objeto examinar temas específicos de los programas de desarrollo rural o de sus prácticas. Esa tarea está más allá de la capacidad del autor. Mi objetivo es investigar a las OAB en el contexto de la violencia política. Sin embargo, podemos comentar algunos aspectos que tengan incidencia directa sobre el informe. Dividí el informe en cinco secciones:

1. Discusión general sobre las OAB peruanas en los últimos dos decenios, con énfasis en cómo la violencia política ha afectado su trabajo. Discutiré, sin ser exhaustivo, los incidentes graves relacionados con las OAB y los grupos beligerantes. Cuando sea pertinente, también hablaré sobre otros programas de desarrollo.
2. Descripción de las facciones en guerra en el Perú y cómo éstas perciben a las OAB.
3. Estudios de caso: Ayacucho y Puno.
4. Análisis de las OAB en ámbitos locales y las fuerzas sociales y políticas que se desarrollan a su alrededor.
5. Conclusiones.

Además, el texto contiene una serie de observaciones **remarcadas**. Me parece más importante destacarlas en el contexto en lugar de extraerlas en las conclusiones. Debido a la longitud del texto y al tratamiento de los temas, los estudios de casos y la discusión general tienden a perderse. Los objetivos son tres. Este ensayo apunta a proporcionar una sistematización del material sobre las OAB y la violencia política, con información suficiente para ayudar a las agencias donantes y a las OAB a comprender la situación interna y tomar decisiones más informadas acerca de la financiación y ejecución de proyectos en el Perú. En segundo lugar, elaborar conclusiones preliminares sobre la situación, entendiendo que son provisionales y tienden a la simplificación. En tercer lugar, esbozar una serie de elementos que podrían ser aplicables a otras sociedades que se enfrentan a conflictos armados. Sin embargo, no es la intención de este trabajo convertirse en un manual para operar en zonas de violencia política. Las condiciones locales y nacionales son muy variables.

Metodología

El International Development Research Centre of Canada, a través de su oficina regional de América Latina y el Caribe, proporcionó fondos para investigar y escribir sobre las organizaciones de apoyo a bases. Esta oportunidad me permitió pagar una deuda de gratitud con las OAB y los centros en el Perú, que me han dado perspectiva, informaciones de primera mano y estímulos durante los últimos 12 años en el Perú. También abrieron una serie de líneas de investigación que voy a tratar de seguir en el futuro.

El cuerpo de este documento proviene de entrevistas con miembros del personal de los centros que trabajan en zonas rurales. He consultado la bibliografía sobre el desarrollo rural y la violencia subversiva en el Perú. Existe un creciente cuerpo de trabajo, aunque disperso y poco conocido, que hizo más fácil esta investigación.

En investigaciones anteriores, me pareció importante tener una orientación geográfica en los estudios de caso. He realizado trabajo de campo en Puno-Cusco (junio 1989) y Cajamarca (julio-agosto 1989). Como había

visitado aquellos sitios anteriormente, el trabajo de campo fue especialmente propicio para conducirme a las zonas cruciales de análisis. Esboqué material de origen en Ayacucho en tres viajes a la ciudad, previos al trabajo de consultoría.

El análisis más amplio de los grupos beligerantes peruanos fue posible gracias a una beca de investigación y escritura del Programa para la Paz y la Cooperación Internacional de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur. La investigación se llevó a cabo entre mediados de 1987 y mediados de 1989. Esta investigación me proveyó experiencia de campo en Ayacucho, Cajamarca, Puno y Cusco.

Agradecimientos

Quiero dar las gracias a Marcial Rubio, Elmer Galván y Luis Román por haber sufrido durante la lectura de un borrador preliminar y confuso de este informe. Las horas que pasamos hablando de mis errores y malentendidos me ayudaron a clarificar los conceptos claves. Ellos ampliaron mi perspectiva en un momento crucial de la investigación, dándome comentarios sobre su experiencia profesional en el desarrollo rural. Ellos convirtieron el informe en un producto más profesional. Naturalmente, hay errores o malentendidos que permanecen en mi cabeza dura y en la desconcertante complejidad de la realidad peruana, el desarrollo rural y la violencia política.

También me gustaría dar las gracias a Manuel Iguíñez, Ricardo Vega, Tiziano Zanelli, Steven Judd, Alfredo Stecher, Enrique Moya, Vera Gianotten y Ton DeWit por su perspectiva sobre los retos del desarrollo rural en el Perú. Muchas otras fuentes, que incluyen los interlocutores locales de los programas de promoción, se mantendrán sin nombrar por razones de seguridad.

SECCIÓN 1: LAS ORGANIZACIONES DE APOYO A BASES EN EL PERÚ

Hoy, hay cerca de 400 centros de promoción en el Perú. El peso institucional y presencia nacional de estos centros tiene pocos símiles en América Latina. Sólo en Chile, Bolivia y Brasil las organizaciones de apoyo a bases juegan un papel destacado.

Los centros pueden variar ampliamente en su rango de organización y permanencia. Algunos centros son pequeñas y efímeras entidades que un individuo o grupo crea para un programa específico de financiación y termina cuando éste se agota. Otros son instituciones permanentes, con objetivos a largo plazo y medios de generación de recursos. Los centros también pueden tener vínculos institucionales con entidades eclesiásticas, agencias internacionales privadas de desarrollo o independientes, que buscan su propia financiación.

Las actividades pueden ir desde centros de investigación académica pura a la instalación de infraestructura comunitaria. Las organizaciones de apoyo a bases se concentran en proveer programas y servicios en barrios populares, comunidades rurales o sectores específicos de la población urbana (mujeres, vendedores ambulantes, industrias artesanales, gobiernos municipales distritales y provinciales). Las OAB, por lo general, trabajan en un territorio geográfico limitado –un barrio pobre, comunidad campesina o valle-, identifican a los grupos desfavorecidos y ayudan a elaborar estrategias de supervivencia. Algunas OAB han enfocado su trabajo en ayudar a organizaciones más amplias (federaciones sindicales, organizaciones campesinas y otras similares, conocidas en el Perú como gremios) para fortalecer sus posiciones ante un Estado con fuertes rasgos autoritarios. Otros centros se enfocan en actividades específicas: derechos humanos, comunicación, educación o salud. Varios de los más grandes centros combinan todos estos aspectos en sus programas.

En general, las OAB tratan de llegar a los grupos desfavorecidos de bajos ingresos, con diferentes grados de organización. Sin embargo, estos grupos no representan a “los más pobres de los pobres” del Perú. Han adquirido recursos y organización para mejorar sus propias condiciones. Las OAB intentan ayudarlos en el mejor uso de estas ventajas. Estos grupos se llaman a menudo “beneficiarios”, un término desafortunado. Ellos hacen un aporte de tiempo y esfuerzos que superan la inversión monetaria de los organismos donantes y los centros. En el presente informe, nos referiremos a ellos como socios locales.

Las OAB más fuertes pueden influir en la política regional o nacional mediante el diálogo con funcionarios gubernamentales, instituciones y grupos locales. El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) en Piura y el Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas en Cusco, son ejemplos de la influencia regional. DESCO-Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP), el Centro de Investigación, Educación y Desarrollo (CIED), el Centro de Información y Desarrollo Integral de Autogestión (CIDIAG) y la Fundación para el Desarrollo Nacional (FDN) son ejemplos de instituciones con sede en Lima que han adquirido peso e influencia nacional (Carroll et al 1989).

El financiamiento de las actividades de las OAB proviene de fuentes internacionales, principalmente organismos donantes europeos y norteamericanos. La mayoría de financiamientos es de 1-3 años. Algunas fuentes proporcionan financiación a largo plazo. Alrededor de 50 organismos internacionales proveían US\$ 6-8 millones al año en financiamientos en 1984 (Padrón 1988, 30). En 1987, esta cifra se elevó a US\$ 24,4 millones, de acuerdo con el Instituto de Planificación Nacional. Esto representó el 15% de la cooperación técnica internacional al Perú ese mismo año (Boutrou 1989, 14).

El crecimiento de las OAB como una fuerza institucional nacional, con sus propios intereses y objetivos, se debe al desarrollo peculiar del Perú en los últimos tres decenios. En 1968, las Fuerzas Armadas, al mando del general Juan Velasco Alvarado, derrocaron al gobierno del presidente Fernando

Belaúnde. Durante los siguientes 12 años, el régimen militar moldeó las primeras experiencias de las OAB, su personal y grupos. El régimen de Velasco rompió muchos estereotipos acerca de los regímenes militares de América Latina. Llevó a cabo una serie de importantes reformas, siendo la más importante una Reforma Agraria de largo alcance. En 1975, el régimen militar, entonces al mando del general Francisco Morales Bermúdez, comenzó a retractarse de sus posiciones más radicales. También desmanteló o redujo las entidades públicas orientadas a las reformas sociales y económicas. Después de una masiva huelga en julio de 1977, en protesta por los aumentos de precios y otras medidas económicas, los militares comenzaron un proceso político para entregar el poder a un gobierno civil.

Antes de 1977, había probablemente no más de 30-40 centros (Padrón 1988, 46). Tres años más tarde, un grupo fundó la Asociación Nacional de Centros (ANC), como órgano de coordinación.

Hubo varios factores que influyeron en el crecimiento de las OAB durante este período inicial. En primer lugar, la jerarquía de la Iglesia Católica comenzó a actuar sobre la base de las innovaciones doctrinales establecidos en el Concilio Vaticano II en 1962-1965 y en la Conferencia de Medellín (Colombia) de 1968, para poner sus ritos y prácticas en sintonía con los tiempos. Esto también significaba que la Iglesia ya no era un pilar seguro del statu quo. De hecho, la Iglesia Católica desempeñó un papel destacado en la creación de una tradición de programas independientes de desarrollo, incluso en la década de 1950 (Padrón 1988, 46). La Teología de la Liberación y las enseñanzas de Paulo Freire incrementaron los esfuerzos de educación popular. En segundo lugar, las universidades nacionales establecieron programas de “proyección social” para la aplicación práctica de las experiencias de aprendizaje. Estos contactos cambiaron gradualmente, de esfuerzos para hacer presente a la universidad en la comunidad a un objetivo permanente de promoción. Cuando las universidades perdieron fondos públicos, muchos grupos o personas encontraron la manera de continuar su trabajo. En tercer lugar, la Cooperación Popular bajo el gobierno de Belaúnde y el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) bajo Velasco dieron experiencia práctica al trabajo de desarrollo. Las reformas del régimen de

Velasco crearon o unieron nuevas organizaciones de base, como grupos de desarrollo barriales, comunidades campesinas, cooperativas, ligas agrarias y comunidades laborales (un esquema para compartir beneficios y cogestionar la industria, la minería y otras empresas). Estos tres factores centrales dieron a los centros una característica generacional, así como una experiencia política, ideológica y social común (Carroll et al, 1990). También imprimieron un carácter general de izquierda a las OAB y centros. Este sentimiento eventualmente maduró hasta convertirse en un apoyo tácito o explícito a Izquierda Unida (IU), coalición de izquierda fundada en septiembre de 1980.

Las OAB y otros centros, a su vez, influyeron en la formación de la izquierda marxista nacionalista. Muchos de sus integrantes desempeñaron un rol clave en la superación de la reticencia inicial de la izquierda para aceptar los programas de desarrollo a pequeña escala como algo más que parches reformistas del sistema capitalista. Se abrió el camino para proporcionar soluciones concretas y pragmáticas a los problemas locales, generando mayor respeto por las organizaciones de base y fuentes de empleo para los militantes de izquierda.

Durante este mismo período, esta generación de grupos e individuos política y socialmente motivados se encontró con otro fenómeno social. Durante los años '60 y '70, florecieron en el Perú organizaciones de base de muchos tipos. Aunque algunas organizaciones, como las comunidades campesinas, habían existido durante siglos, otras surgieron en las nuevas zonas urbano- marginales, muchas como respuestas concretas a las necesidades de sus habitantes. A fines de 1970, la categoría "barriada" –barrio de bajos recursos iniciado como apropiación de tierras por ocupantes ilegales, con frecuencia migrantes sin hogar- tomó su lugar junto a los grupos sociales más tradicionales, como los campesinos, estudiantes y obreros. Por ejemplo, los comedores populares, clubes de madres y gremios de vendedores ambulantes no existían antes de 1975. Fue una oportunidad que abrió terreno virgen al trabajo de desarrollo urbano y rural. Las organizaciones de base crecieron más rápida y ampliamente que la capacidad de las OAB para reunirse con ellas (Velarde 1988, 194).

Las OAB se convirtieron en una nueva manera de vincular preocupaciones políticas y metodológicas a las comunidades locales, organizaciones y el movimiento popular del Perú. Los activistas políticos salieron de sus escondites y asumieron funciones públicas en los centros, vinculándose con el ala progresista de la Iglesia Católica, con nuevos y superiores niveles de organización, partidos políticos y grupos sociales emergentes. Con el tiempo, darían lugar a un esfuerzo por repensar el país y su futuro.

La apertura democrática

En 1980, el Perú volvió a tener un gobierno civil. El presidente Fernando Belaúnde y Acción Popular (AP), con su socio menor, el Partido Popular Cristiano (PPC), cambiaron la política del gobierno hacia una política económica liberal, más orientada al mercado. Sin embargo, el gobierno aún mantenía un enfoque populista en muchos temas. Tres grandes cambios sociales y políticos marcaron este período. En primer lugar, se inició la violencia subversiva en Ayacucho, desconcertando al gobierno de Belaúnde. En segundo lugar, en 1982, las federaciones agrarias llevaron a cabo una huelga nacional de protesta contra las políticas del gobierno de Belaúnde respecto a la propiedad de la tierra, los precios de los productos alimenticios y los créditos agrícolas, por primera vez en la historia del Perú. En 1983, la crisis de la deuda latinoamericana sacudió al Perú, lanzando la política económica del gobierno a la inconsistencia. Estos tres factores llevaron a un dramático declive del crecimiento económico y los niveles de vida. En este contexto, las OAB podían ser absorbidas por situaciones cada vez más conflictivas, especialmente dados los compromisos implícitos y explícitos de sus programas.

El primer ataque contra una OAB se llevó a cabo en Puno. En agosto de 1981, un grupo de 40 hombres enmascarados atacó la sede del Instituto de Educación Rural (IER) "Palermo", ubicado en una granja experimental fuera de la ciudad de Juli. Después de aterrorizar a cinco religiosas y un sacerdote, el grupo rompió ventanas, lanzó una bomba de fabricación casera en la

residencia, y saqueó las oficinas del Instituto. Un mes más tarde, una bomba explotó en la sede de la Prelatura de Juli, hogar del prelado Maryknoll Albert Koenigsknecht. Cerca de la puerta de las oficinas de la Prelatura, la Policía encontró una carta amenazando con asesinar a todo el personal misionero de la Prelatura, si éste no renunciaba a su trabajo y abandonaba el área inmediatamente. Las comunidades campesinas y organizaciones de toda el área expresaron su indignación a través de comunicados y anuncios de radio.

Los líderes de la iglesia local tuvieron dificultades para convencer a los forasteros de que los ataques provenían de un grupo llamado Sendero Luminoso. Al parecer, Sendero había conseguido el apoyo de un grupo escindido de maoístas locales para crear sus primeras células. Sin embargo, una explicación alternativa era que los grupos locales de poder, profundamente hostiles a la iglesia progresista de Puno, estaban tras algunas de las acciones de acoso. Los obispos del sur andino dijeron que estas élites del poder rural utilizaban con frecuencia la excusa de la violencia subversiva para tomar represalias contra los grupos favorables a las reformas en la región. Las autoridades de la Iglesia ahora se inclinan hacia la opción de Sendero. Sea como fuere, el trabajo proactivo de desarrollo había suscitado una respuesta violenta (Judd 1987, 167-9).

Sin embargo, durante el período de Belaúnde, la actividad subversiva se concentraba en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, una región de pobreza secular y relativo aislamiento. A mediados de 1982, el centro de extensión agrícola de Allpachaka, dirigido por la Universidad de Huamanga, sufrió un ataque de Sendero Luminoso. El incidente provocó el primer retiro de las OAB, de la parte más lejana del campo ayacuchano. (Ver *Sección 3: Estudios de caso*, para una exposición más detallada de este incidente).

En enero de 1983, el presidente Belaúnde autorizó a las Fuerzas Armadas a tomar el control de Ayacucho. Esta escalada de la lucha contrainsurgente introdujo un elemento semiautónomo en la compleja constelación de fuerzas que compiten por el control en la zona de conflicto de la sierra central. Sin embargo, nunca el gobierno de Belaúnde dio a las Fuerzas

Armadas un mandato claro para llevar a cabo sus deberes, un proyecto preciso de política contrainsurgente o recursos para alcanzar sus objetivos.

Este período también abrió una experiencia común entre los centros que operaban en zonas de conflicto: las fuerzas de seguridad con frecuencia veían a su personal como forasteros, provocadores políticos y, en el peor de los casos, probables cabecillas de las actividades subversivas.

En mayo de 1983, tropas encapuchadas del Ejército irrumpieron en la casa de Jaime Urrutia, profesor universitario y director del Instituto de Estudios Rurales “José María Arguedas” en Ayacucho, y lo detuvieron durante 14 días. Lo retuvieron en la base militar Los Cabitos, y más tarde lo trasladaron a la estación de la Policía de Investigaciones. El Ejército trabajó bajo el supuesto de que la insurrección senderista estaba demasiado bien hecha para ser una inspiración de la población local. Tenía que haber participación extranjera. Urrutia había levantado sospechas porque extranjeros, principalmente periodistas, iban con frecuencia a visitar su casa a horas intempestivas. Los militares lo torturaron durante su interrogatorio. Debido a la respuesta inmediata de los periodistas extranjeros, la Universidad de Huamanga y de organizaciones de derechos humanos de Lima, las fuerzas de seguridad liberaron a Urrutia sin mayores explicaciones sobre la detención.

Un incidente similar tuvo lugar en la provincia de Andahuaylas, Apurímac. El Centro de Investigación y Capacitación Campesina (CICCA) tenía 4 empleados que fueron detenidos y torturados durante tres días. El Ejército y la Policía estaban convencidos de que CICCA era cómplice de Sendero en la zona, especialmente a través de sus actividades de asistencia jurídica y capacitación a los campesinos. Después de la liberación de los trabajadores, CICCA se retiró de la provincia tras el incidente.

En junio y julio de 1983, Belaúnde acusó a “instituciones científicas o humanitarias con nombres pomposos” de servir como conductos para financiar a Sendero Luminoso y otros grupos subversivos. También eran responsables de la propagación de ideologías extranjeras (DESCO 1989, 401-403). La Policía Fiscal examinó los libros de varios centros de investigación. El gobierno nunca presentó pruebas que respaldaran esas acusaciones. El Ministerio del

Interior también solicitaba frecuentemente a los directores de la OAB aclarar sus actividades.

Hacia el final del período de Belaúnde, un incidente grave involucrando al Centro de Investigación y Promoción Amazónica (CIPA) tuvo lugar en Lagunas, Yurimaguas (Loreto). En junio de 1985, una célula senderista inició operaciones de guerrilla. La Policía acabó con la columna rápidamente. Las autoridades acusaron a tres miembros del personal de CIPA de ser autores intelectuales de la guerrilla. El CIPA había trasladado recientemente al grupo de trabajo desde la región del río Tambo en Junín, donde se habían sentido presionados por la creciente presencia de Sendero Luminoso y las fuerzas de seguridad. Un miembro del personal de CIPA era Daniel Rodríguez, hijo del general del Ejército Leónidas Rodríguez, que había ordenado a las tropas aplastar un motín policial en Lima, en febrero de 1974. La Policía guardaba rencor especial contra él. Los tres empleados fueron sometidos a abusos físicos y psicológicos, y torturados. CIPA inició una campaña para salvar a sus trabajadores de los prolongados procedimientos judiciales. Por último, los cargos fueron desestimados. No se formularon cargos contra los policías que cometieron abusos y torturas.

Hacia el final del gobierno de Belaúnde, Sendero Luminoso comenzó a expandir sus actividades guerrilleras fuera de Ayacucho. Partes de Cerro de Pasco y Huánuco quedaron bajo control militar de emergencia.

Tal vez, el acontecimiento más importante para las OAB durante el período de Belaúnde fue la apertura de las nuevas instituciones democráticas. Los gobiernos municipales distritales y provinciales, libremente elegidos, crearon nuevos espacios de cooperación entre las fuerzas políticas emergentes y los centros. En 1980, y más aún en 1983, las OAB establecieron acuerdos con los gobiernos locales, principalmente los encabezados por alcaldes de Izquierda Unida, para proporcionar asesoramiento y programas de supervivencia a grupos de base, como clubes de madres, comedores populares y vendedores ambulantes. Miembros del personal de las OAB fueron elegidos como concejales y actuaron como asesores en los gobiernos municipales de IU.

El anochecer del populismo

En 1985, el presidente Alan García y la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) ganaron las elecciones generales. El panorama político general se balanceó hacia la izquierda. El electorado peruano dio un 70% de sus votos al APRA e IU. García hizo propuestas a la intelectualidad peruana, recibiendo el apoyo tácito de varios centros y cooperación explícita de miembros individuales. La administración pública también atrajo a los profesionales de la OAB para ayudar a diseñar y poner en marcha un nuevo conjunto de políticas y programas.

El agresivo enfoque populista de García durante sus primeros tres años planteó graves problemas a muchos centros, porque el presidente puso en marcha propuestas que estaban fuera del libreto de las OAB. Desbalanceó a muchos centros e incluso a la misma Izquierda Unida. Esquemas micro-regionales de desarrollo, créditos agrarios y programas de insumos y equipos agrícolas baratos, programas de empleo temporal para obras comunales, se encontraban entre las ideas incorporadas al repertorio del gobierno. Otras propuestas, como la salud pública, nunca pasaron de la etapa de planificación. En cierto sentido, muchas OAB habían basado sus programas de desarrollo a pequeña escala en una deficiencia perenne del Estado peruano, asumiendo las responsabilidades que, en condiciones normales, correspondían a las actividades del gobierno. Si el Estado recuperaba la viabilidad (como parecía posible inicialmente, en 1986-1987), entonces las OAB serían superfluas.

Sin embargo, el gobierno de García sufría de una personalidad de Jekyll y Hyde. Mientras García y sus colaboradores más cercanos estaban dentro del espectro político compartido con las OAB, los liderazgos del APRA (como partido y a nivel local) eran más conservadores, lo que llevó a conflictos con los centros. El APRA quería la lealtad indiscutible de las organizaciones de base. Sus intenciones y apetitos corporativistas requerían un reajuste de las organizaciones de base con el Estado a nivel local, condensado en el rol del partido. Las autoridades locales y funcionarios del partido con frecuencia condicionaban los programas de ayuda al servilismo político. En mayo de 1986,

el aprista Rómulo León Alegría Adjunto acusó a 75 centros de investigación y promoción de ser frentes de instigación a la lucha armada, aunque dirigió la mayoría de ataques contra el Partido Unificado Mariateguista (PUM), el ala radical de IU (DESCO 1989, 460-461). El Congreso inició una investigación, pero nunca elaboró conclusiones. Estas acusaciones se produjeron en un periodo muy preocupante en Puno, cuando los campesinos, con el respaldo de la Iglesia Católica del sur andino, los partidos de IU y varios centros, se apoderaban de tierras de cooperativas agrarias ineficientes.

En 1988, el ANC contaba 360 centros en el país, de los cuales 103 eran integrantes de la organización. Había 6 Asambleas Regionales, pero pocas de ellas se reunían periódicamente (ANC 1988, 4).

En setiembre de 1988, el gobierno de García ya no era capaz de sostener su riesgosa política de subvenciones indiscriminadas, clientelismo y gasto deficitario. La nueva política económica condujo a la recesión y la hiperinflación. La inflación pasó de 63% en 1986 y 114% en 1987 a 1.722% en 1988 y 2.775% en 1989. Esto introdujo enormes distorsiones de precios en la economía, especialmente en los intercambios entre los productores (urbanos y rurales) y los consumidores.

Huelgas regionales de protesta, organizadas principalmente por agricultores y campesinos, mostraron un aumento de la inconformidad en el campo. Huelgas agrarias de hasta un mes de duración sacudieron Puno, Cusco, Pucallpa, Huaraz y San Martín. Las OAB a menudo se vieron envueltas en sus reivindicaciones, como asesoras de las federaciones campesinas, como intermediarias ante el gobierno y como canales de comunicación, ya que varios centros tenían programas de radio. El gobierno con frecuencia consideró a los centros más francos y orientados a la acción como instigadores de los conflictos.

En febrero de 1989, la policía allanó las oficinas del Instituto de Investigación y Apoyo al Desarrollo de Ucayali (IIADO), causando daños y perjuicios. La Federación Agraria y políticos de Lima habían utilizado sus oficinas como sede de huelga. El centro se excedió en su compromiso con los

campesinos, ya que perdió el control de su intervención en la huelga y no trazó una línea clara entre el apoyo y el activismo, dijeron los expertos en desarrollo.

Entre otros problemas, el Estado tenía fondos mínimos para la inversión. En algunos sectores, como el Cusco, los centros probablemente manejaban más fondos que el gobierno (Haudry 1990, 253). La inestabilidad política del gobierno aprista añadió un factor de perturbación a las OAB que trataban de trabajar en coordinación con el Estado. Los cambios constantes de funcionarios, la disminución de recursos, los vetos políticos y las rivalidades políticas pusieron al gobierno al borde de la inercia. También había señales de corrupción generalizada, de lo más alto a lo más bajo del gobierno. Mediante la sensibilización y el fortalecimiento de las organizaciones de base, las OAB parecían estar incitándolas a oponerse al gobierno y haciéndolas más críticas. Los programas de las OAB también constituían un punto de comparación respecto de las deficiencias de los programas estatales (Carroll et al, 1989).

El Estado retiró su presencia, por no tener prácticamente fondos de inversión o de operación, así como por la amenaza de la violencia subversiva. Los programas bilaterales y multinacionales se batieron en retirada de muchas áreas. Por ejemplo, en la zona amazónica de Pucallpa, cinco programas bilaterales suspendieron o retiraron sus programas en 1989. Este retiro significó que las OAB peruanas se quedaron solas para hacer frente a la amenaza.

El desarrollo rural como objetivo militar

La conmoción económica también inició una gran escalada de la violencia política. Comenzó a forzar a las OAB y a otros programas de desarrollo a retirarse del campo. La presencia de Sendero se abalanzó sobre la columna vertebral de los Andes, desde el eje norte de Huamachuco-Cajabamba (La Libertad y Cajamarca) a las provincias altas de Cusco. En Puno, Sendero ya había intervenido en un conflicto entre campesinos y cooperativas (ver la *Sección 3* para una exposición más detallada sobre Puno). Sendero también se trasladó a la región amazónica, principalmente en el valle

del Alto Huallaga, asociándose con la dinámica social desencadenada por el narcotráfico de cocaína. Otro grupo subversivo, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, también inició acciones guerrilleras.

Tal vez, el retroceso más notable de la autoridad estatal, las fuerzas de seguridad y los centros tuvo lugar en Junín a principios de 1989. Los centros regionales pensaban que no había necesidad de preocuparse. Argumentaron que la zona era diferente de los campesinos de subsistencia de la zona de emergencia de Ayacucho. Era una “economía de punto”. Citaban a los campesinos conocedores del mercado como ejemplos de una confluencia saludable de las corrientes raciales de indios, mestizos y criollos. Los campesinos tenían una larga historia de resistencia cultural y lucha por recuperar sus tierras, lo que requiere una fuerte organización comunal e intercomunal. Las empresas asociativas de la zona eran prósperas, y con frecuencia eran citadas como ejemplos de cómo la Reforma Agraria de los militares habría tenido éxito si se hubieran dado las condiciones adecuadas (Manrique 1989, Sánchez 1989).

Debido a que el departamento de Junín se encuentra ubicado junto a Huancavelica y Ayacucho, Sendero Luminoso tuvo presencia en la zona, pero la mayoría de los lugareños explicaban esto como un desbordamiento de la zona de emergencia y la necesidad de pasar por la zona para desplazarse más al norte. Muchos miembros del personal de las OAB creían que Sendero no atacaría sus proyectos y programas, ya que estaban del lado “correcto”, trabajando para mejorar las condiciones de vida y el rendimiento de las cosechas de los campesinos.

Ya había indicios de que Sendero Luminoso iba a intensificar su presencia. Los centros también comenzaron a recibir advertencias y amenazas para permanecer fuera de zonas específicas de la sierra. En junio de 1988, Sendero mató a dos miembros del personal de un subcontratista de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (AID). Uno de ellos era un ciudadano estadounidense (Caretas, 20 de junio, 1988). Los centros racionalizaron este ataque por la asociación con los EE.UU. y por las prácticas específicas del equipo de trabajo. En agosto de 1988, Sendero Luminoso atacó

y destruyó un programa en Jarpa, en la sierra de Huancayo, dirigido por sacerdotes jesuitas. Los centros restaron importancia al incidente, ya que el programa Jarpa estaba localizado en un punto estratégico de la alta meseta. Otro centro perdió un vehículo porque Sendero lo robó para usarlo como un coche bomba. Una complicación adicional era que muchos centros de Junín se habían escindido de un centro más grande, dejando desconfianza latente entre los centros, falta de voluntad para compartir información y resistencia a ceder terreno ante centros rivales.

A fines de noviembre de 1988, la escalada de las actividades y tácticas de Sendero Luminoso obligaron al gobierno a poner la zona en estado de emergencia y enviar tropas del Ejército. Incluso eso no presionó a los centros a actuar. Sin embargo, en enero de 1989, cuando Sendero secuestró y asesinó a Manuel Soto, del Centro de Investigación y Educación Popular Campesina (CICEP) y Víctor Lozano, líder campesino de Canicapo, la percepción cambió de inmediato. Soto integraba la junta de la ANC. Soto y la Federación Campesina local habían encabezado una propuesta política para redistribuir la tierra monopolizada por las empresas asociativas de la zona. La iniciativa de reestructuración tenía el respaldo del PUM, tratando de aplicar una estrategia que había tenido éxito en Puno. A mediados del año, de los 14 centros de la zona, sólo quedaban 4.

Un centro de investigación de Lima resumió la crítica contra las OAB de Junín que siguió a este período: “Las OAB, que juegan un papel importante en el apoyo y promoción popular, mostraron descoordinación, celos interinstitucionales y falta de perspectivas nuevas y claras en su trabajo en las zonas de emergencia o violencia política, donde necesariamente deben cambiar sus roles de comportamiento y acción” (Democracia y Socialismo 1989, 24).

Sendero no sólo atacaba objetivos militares y políticos. Estaba disputando el control de la región con el MRTA. Hubo varios enfrentamientos armados entre columnas, así como las luchas en la universidad. La confrontación estaba presente en otras áreas (Alto Huallaga y Lima).

Por otra parte, había sonado la alarma para otras OAB. En diciembre de 1988, Sendero mató a dos miembros extranjeros del personal y a un trabajador peruano del Centro Internacional de Cooperación para El Desarrollo Agrícola (CICDA), un centro francés de promoción del desarrollo que operaba en Perú bajo las normas de la cooperación técnica internacional. El incidente tuvo lugar en Haqira, departamento de Apurímac. Además de los tres trabajadores de CICDA, otros dos civiles murieron en el incidente, y otras 50 personas fueron asesinadas en la zona al cabo de un mes. Estos fueron tenientes gobernadores, dirigentes campesinos y abigeos. Sendero los degolló.

Los líderes de la columna senderista hablaron contra los centros, como “lacayos del imperialismo yanqui y del socialimperialismo”. La razón de los asesinatos fue que Sendero había entrado en su Tercera Etapa, lo que significaba que la asistencia externa se vería obligada a salir del campo. El CICDA nunca había recibido amenazas para dejar la comunidad u otras advertencias. A los tres miembros del personal no se les ofreció siquiera la farsa de un “juicio popular”. Los senderistas, dijo que las organizaciones campesinas que no se alinearan con SL también serían víctimas de represalias. El lenguaje no era ideológico y el dirigente trató de hablar a la mentalidad campesina.

Un funcionario del CICDA dijo que hubo tres razones principales para el ataque contra su personal. La institución era muy visible, pero aislada, en una zona que tenía un valor estratégico para Sendero. En segundo lugar, dos de los trabajadores de campo eran franceses. En tercer lugar, se sumaron a la propuesta de organizar rondas campesinas. Este último punto fue “la gota que colmó el vaso”. “Era una alternativa que se enfrentaba directamente con la propuesta de Sendero Luminoso para la zona”.

CICDA decidió cancelar sus operaciones en los Andes del sur, incluyendo programas bien establecidos en La Unión y las provincias de Condesuyo (Arequipa), Chumbivilcas (Cusco) y un nuevo programa en Espinar (Cusco), así como Haqira. Se transfirieron todos los programas posibles a socios locales y otros centros de la región. Su personal cayó de 40-50 a 5, todos con base en Lima.

En respuesta a la amenaza creciente contra los esfuerzos multilaterales, bilaterales y locales de desarrollo en las zonas de conflicto, el gobierno de García no mostró siquiera la más mínima cortesía, y mucho menos el deseo de esbozar directrices o estrategias. Eso mostró a las misiones extranjeras y a sus gobiernos que no estaba preocupado por los riesgos del personal de campo extranjero o la viabilidad de los programas de desarrollo.

En mayo de 1989, Sendero atacó las instalaciones del Instituto de Educación Rural Waqrani, un centro conducido por la Iglesia Católica en Puno (Ver *Sección 3: Estudios de caso*, para una exposición más detallada). Dos meses después, otra columna senderista atacó y saqueó las instalaciones del Instituto de Desarrollo del Medio Ambiente (IDMA) en Ambo, Huánuco, quemando tractores e instalaciones y dejando el mensaje de que la maquinaria pesada no podría utilizarse en el futuro. Al cabo de dos meses, IDMA rediseñó su programa, retirando sus actividades en las zonas altas, y alojando a su personal en un pueblo cercano, pero continuó su presencia en la zona.

En Lima y otras grandes ciudades, los centros que trabajaban con programas urbanos se encontraron con el mismo problema. A mediados de 1989, El Diario publicó una serie de artículos atacando a los centros, su personal y socios locales, con nombres y apellidos.

A fines de 1989 y principios de 1990, las campañas electorales municipales, regionales, las elecciones legislativas y presidenciales llevaron a la mayoría de OAB a reducir sus actividades y mantener un perfil bajo. En junio de 1990, sin embargo, el Centro de Desarrollo y Participación (CEDEP) perdió dos miembros de su personal, un consultor y un ganadero local, asesinados en Puno. Habían ido a la provincia de Melgar a comprar rebaños de alpacas para un programa en el departamento de Ancash. El incidente parece ser un caso de “lugar equivocado en el momento equivocado”, cruzándose con una columna senderista cerca de la ciudad de Ñuñoa. CEDEP no tiene operaciones en Puno, por lo que es poco probable que Sendero haya tenido como objetivo a los miembros del personal de CEDEP.

Durante tres años consecutivos (1987, 1988 y 1989), el Perú tuvo el privilegio de encabezar la lista de países en los que han sido denunciadas

desapariciones forzadas. En 1990, 300 personas desaparecieron. En marzo de 1990, organizaciones de derechos humanos fueron atacadas por escuadrones paramilitares. Amnistía Internacional y la Comisión Andina de Juristas fueron afectadas. La Cruz Roja Internacional, que proporciona asistencia de socorro en zonas de emergencia, a los migrantes forzados debido a los conflictos internos y en las cárceles, también fue atacada con bombas. A la Cruz Roja Internacional se le ha negado el permiso de trabajar en Ayacucho en varias ocasiones.

Estas tendencias sacudieron a los centros del Perú hasta su núcleo. Los esfuerzos para unir fuerzas habían sido esporádicos. La ANC creció considerablemente, en parte como mediadora con el gobierno para calmar los malentendidos y disputas sobre el papel de las OAB. En agosto de 1989, un grupo de 21 organizaciones además de la ANC crearon InterCentros para unir recursos y talentos en el tratamiento de temas específicos, entre ellos, la violencia política. Una de las desventajas de la ANC es que para ella es difícil esbozar una política común para enfrentar la crisis, debido a su carácter democrático. Cada centro, sin importar su tamaño, importancia, tipo de programas, lugar o tendencia política, tiene voz y voto en el funcionamiento de la ANC. Su fuerza está en su representatividad de una amplia muestra de los centros. InterCentros se basa en el tamaño de sus asociados, que están entre la élite de los centros de investigación independientes, centros universitarios y organizaciones de apoyo a bases. Su objetivo es obtener impactos en la política estatal.

Los líderes de las OAB dicen que en 1989 hay cada vez más informes sobre que los organismos donantes comienzan a reducir o detener su apoyo a las OAB peruanas, debido a la agitación política y la dificultad del seguimiento a los programas.

A fines del período de García, el clima político había cambiado dramáticamente. El novelista Mario Vargas Llosa surgió como candidato presidencial de centroderecha. Una alianza forjada entre el Movimiento Libertad, AP y el PPC parecía tener el triunfo asegurado en las elecciones generales. Vargas Llosa prometió una “revolución de la modernización”,

basada en políticas económicas orientadas al mercado, reducción drástica de la burocracia y la intervención estatal en la economía y un enfoque más receptivo frente a la inversión extranjera y la comunidad financiera internacional.

Sin embargo, la agresiva –y, en ocasiones, arrogante- campaña de Vargas Llosa y sus aliados condujo a una reacción de los votantes, combinada con una sanción a todos los partidos políticos. El APRA se había reducido a sus seguidores más acérrimos, un 20% del electorado. IU se había dividido en dos bloques, una facción radical con el antiguo nombre y una alianza más moderada unida en torno a la candidatura presidencial de Alfonso Barrantes (Izquierda Socialista). Esta división tuvo un impacto sobre los centros de promoción, porque las OAB habían trabajado con la mística de IU. El beneficiario de este cambio político fue un candidato presidencial comodín, Alberto Fujimori, y su movimiento Cambio 90. En la segunda vuelta presidencial con Vargas Llosa a principios de junio, Fujimori ganó.

Esta sorpresa política fue el signo más visible de una ruptura de las fórmulas predecibles para el Perú. La existencia de 5 gobiernos regionales (en enero de 1990) y la creación de 7 más tras las elecciones regionales de abril de 1990 abren posibilidades para nuevos tipos de cooperación entre los centros y los gobiernos locales, así como un potencial para el caos administrativo y la quiebra de los servicios.

Resumiendo tres décadas

Debemos tener en cuenta varias tendencias entre las OAB durante las últimas dos décadas. En general, el personal de los centros apoya a la izquierda, pero no a un partido en particular. Puesto que excesivos lineamientos partidarios podrían crear conflictos internos, los centros crearon un ethos en el que la causa común era la izquierda e Izquierda Unida, pero no

un partido. Sin embargo, este ethos se vio afectado por la carrera a las elecciones generales de 1990 y la tentación de utilizar recursos para favorecer a uno u otro bando en la lucha por el poder dentro de IU. La división entre IU e Izquierda Socialista dejó a los centros en la estacada, porque ellos tienen la huella de la división política latente en su interior.

Sin embargo, también cabe señalar que el aumento de la violencia política ha borrado gran parte de las rivalidades menores entre los centros y su personal. La amenaza externa de Sendero Luminoso ha hecho posible una coordinación, centralización de información y análisis conjunto que habría sido inconcebible hace 10 años.

El aparente monopolio de la izquierda en las OAB y otros centros no era tan completo como a veces parece. Las organizaciones de base no se preocuparon por las diferencias ideológicas o programáticas entre los grupos de izquierda y buscaron otra opción política, votando por Alberto Fujimori y Cambio 90. Aparte de los programas respaldados por la Iglesia Católica, las iglesias protestantes y evangélicas, hay un pequeño grupo, cada vez mayor, de centros asociados a la centroderecha. El Instituto Libertad y Democracia, Hábitat Perú Siglo XXI, la Fundación Ulloa, Acción Comunitaria del Perú y ADIM nacieron en la década de 1980. Están generalmente vinculados al financiamiento estadounidense, como la Agencia para el Desarrollo Internacional, PACT, Acción-AITEC y la Fundación Interamericana (Carroll et al, 1990). Esta tendencia surgió del reconocimiento de que la centroderecha necesitaba recuperar un espacio intelectual que había sido monopolio virtual de la intelectualidad de izquierda. El esfuerzo fue un éxito. Donde los grupos de centroderecha se han estancado es en el trabajo con organizaciones de base. Durante la segunda vuelta entre Vargas Llosa y Fujimori, el intento del FREDEMO para proyectar un programa social en zonas marginales apareció como cojo y oportunista. Una excepción es Violeta Correa, esposa del ex presidente Fernando Belaúnde, quien trabaja con los comedores populares de las barriadas, continuando con un programa que comenzó como una consecuencia de su papel como Primera Dama. Otra ramificación interesante es que varios de estos centros han comenzado a trabajar con financiación de corporaciones peruanas, fundaciones y donaciones privadas, abriendo así para

algunos centros la posibilidad de reducir la dependencia del financiamiento externo.

Quizá más importante que las ramificaciones políticas de los centros haya sido su evolución como instituciones de pleno derecho, independientes de sus socios locales, de los organismos donantes y los partidos. Las propuestas originales de un cambio radical de la sociedad peruana –con evidentes connotaciones políticas y opciones partidarias implícitas- han dado paso a posiciones más conocedoras de las complejidades de administración y ejecución de programas. Este es un signo de madurez, pero también tiene el riesgo de perder los verdaderos objetivos de los programas. La auto-perpetuación de las instituciones puede tener prioridad sobre el desarrollo efectivo de las organizaciones de base.

Durante el período de transición previo a la entrega del poder a Fujimori, el personal de muchos centros contribuyó a redondear las políticas y programas de Fujimori. Tal vez por primera vez, el gobierno electo se dio cuenta de que había centros de experiencias, propuestas e ideas a ser utilizadas. Debido a que Fujimori designó a la tecnología como uno de los pilares de su campaña, hay una apertura natural a una mayor colaboración, sobre todo porque los centros con programas especializados han creado redes y comités de coordinación que pueden convertirse en participantes activos en el diálogo entre el gobierno y los intereses sectoriales (micro y pequeñas empresas, agricultores y campesinos). En su primer gabinete, Fujimori nombró a cuatro ministros (Guido Pennano en la Industria, Carlos Amat y León en Agricultura, Fernando Sánchez Albavera en Energía y Minas y Gloria Helfer en Educación) con amplia experiencia de trabajo en centros. Con el drástico programa de ajuste económico realizado por el gobierno de Fujimori, el gobierno convocó a las OAB para ayudar en la preparación de un programa de emergencia social para obtener asistencia de emergencia a los sectores más pobres y garantizar su supervivencia.

Los centros han tenido funciones innovadoras en la modernización del pensamiento sobre el desarrollo. Han desempeñado un papel importante en la elaboración, ensayo y reformulación de nuevas estrategias en el campo y en

las zonas urbanas. Por ejemplo, la reevaluación de las técnicas agrícolas andinas se debe en parte a la crítica de los centros a los procesos agrícolas modernos en los Andes y al rescate y revalorización de los métodos campesinos tradicionales. También han introducido una serie de nuevos criterios, como la ecología, al desarrollo rural.

Otra contribución que no ha recibido atención es el campo de entrenamiento para nuevos talentos. En el último año, en el que algunos organismos donantes extranjeros han cambiado su enfoque de desarrollo rural del Perú a Ecuador y Bolivia, donde la violencia política explícita no es una variable, los organismos donantes han contratado a personal con experiencia en el Perú para manejar y dirigir sus programas. Perú ha sido un recurso de mano de obra para el desarrollo alternativo rural y urbano en zonas marginales.

Durante este último decenio, los centros por lo general han luchado por mantener su trabajo en las zonas de conflicto, tanto como fue posible. Han encontrado los medios para cumplir con su trabajo. Sin embargo, esta resistencia ha significado a menudo cavar tercamente en sus talones y no llevar a cabo una crítica en profundidad de su trabajo y funciones.

La respuesta de las organizaciones de apoyo a bases ha sido variada. Algunas de las OAB más introvertidas se han retirado en estado de shock y confusión. La reacción principal ha sido tomar medidas de precaución y cambiar a una posición defensiva para capear el temporal. Esto encaja más fácilmente en una situación general de incertidumbre y falta de horizontes. Un tercer grupo de centros de toma una posición más agresiva. Afirman que los centros y el resto de la sociedad civil no pueden permanecer pasivos en esta controversia. Los centros deben convencer a sus socios locales de que sus vidas, comunidades, logros y proyectos están en juego, y tienen que lanzarse a una acción más positiva.

Cada uno de estos enfoques tiene sus desventajas y defectos, aunque pueden ser evaluaciones honestas de los recursos del centro, sus compromisos y circunstancias. El cauteloso término medio puede ser más apto para cuestionar el marco del desarrollo rural y el papel de los socios locales. Esto puede llevar a dudas y vacilaciones. La línea más agresiva está más

dispuesta a mantenerse firme, basándose en el compromiso político, pero menos propensa a cuestionar sus métodos.

Como ha señalado Haudry (1990, 254-272), las bases apoyan a organizaciones que no están realmente tratando de “desarrollo”. El desarrollo en su sentido más amplio requiere de políticas gubernamentales estables a largo plazo, de inversión pública y otros factores. Las OAB, e incluso la mayoría los programas del gobierno, son programas de inversión en pequeña escala. Son laboratorios o proyectos piloto para abrir nuevos horizontes al desarrollo de base. Estos experimentos permiten que cualquier institución, pública o privada, nacional o extranjera, esboce empresas más ambiciosas. Por esta razón, es sumamente importante para las OAB dejar huellas allí por donde hayan pasado. La avalancha de violencia amenaza con borrar sus marcas a través de grandes extensiones del Perú.

Los problemas del desarrollo en el Perú no son un nudo tecnológico-productivo. Por el contrario, son de carácter político y social. La cuestión es cómo hacer que vastos sectores de la población sean participantes activos de su destino. La espiral de violencia, desencadenada por Sendero Luminoso, y acelerada por la respuesta ciega de las fuerzas de seguridad peruanas y otras fuerzas, ha realineado el país. Un asesor veterano lo llama el “eje de la guerra”. Hasta que las OAB y la sociedad peruana en su conjunto entiendan que este eje de la guerra requiere una reevaluación crítica de los programas de desarrollo, la democracia, la participación popular y la representación gubernamental, los esfuerzos para aliviar las vastas reservas de la pobreza y la marginación rendirán escasos frutos.

SECCIÓN 2: LAS FACCIÓNES EN GUERRA

En 1980, el Partido Comunista del Perú (PCP), conocido en el resto del mundo como Sendero Luminoso, dio un violento tirón a la raída tela del empobrecido Ayacucho, y la ruptura se sintió en toda la trama y urdimbre del Perú. Aunque la violencia ha sido un factor en los últimos 500 años, vinculado a problemas sociales, económicos, étnicos y estructurales profundamente enraizados, la sociedad peruana ha enfrentado una gran escalada en esta década.

Aunque otros países de América Latina enfrentan amenazas similares a la viabilidad de sus instituciones civiles, el Perú enfrenta una matriz especialmente compleja de adversarios. Esta tendencia también ha introducido una variable errática, impredecible, junto con una ruptura de los canales normales para la resolución de conflictos.

Una medida de hasta qué punto la situación ha degenerado proviene del gobierno de los Estados Unidos. El Departamento de Estado U.S. ha colocado al Perú en la misma categoría de riesgo que El Salvador, Colombia y el Líbano, debido a las actividades terroristas. Aunque existen diferencias sustanciales en la calidad y naturaleza de la violencia política en estos países, esta clasificación se debe a la incidencia o número de actos terroristas. Otros gobiernos extranjeros han llegado a la misma conclusión acerca de la situación del Perú. Para Europa, esta clasificación puede tener un impacto directo sobre la financiación de las OAB, porque muchas agencias donantes han llegado a acuerdos de financiamiento con sus gobiernos nacionales.

En los últimos 40 años, las organizaciones de base, de campesinos y pobres urbanos, han empleado tácticas no sancionadas por la ley e incluso actos de fuerza para lograr sus objetivos. Sin embargo, normalmente evitan la violencia absoluta y sistemática para conseguir sus objetivos. Debido a la naturaleza de este conflicto de baja intensidad y la amenaza de la institucionalización de la violencia como instrumento político, describiremos a

los principales actores, que las organizaciones de base y sus organismos de apoyo deben enfrentar en el campo.

Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso

El partido se fundó en 1970, tras la ruptura del maoísta Partido Comunista del Perú (Bandera Roja). Sin embargo, el núcleo de Sendero Luminoso en realidad existió como Comité Regional del Partido Comunista original, desde 1964. Su principal semillero fue la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y el sistema de escuelas públicas de la zona. El líder y pensador clave detrás de él es Abimael Guzmán, conocido por su nombre de guerra, “Presidente Gonzalo”.

A mediados de la década de 1970, el liderazgo de Sendero Luminoso decidió que había llegado el momento para iniciar un levantamiento armado bajo las líneas esbozadas por Mao Zedong en China. Esta decisión requería del fortalecimiento y perfeccionamiento de una estructura de partido nacional para la tarea. Los Comités Regional Principal (Ayacucho) y de Lima Metropolitana fueron la columna vertebral de la organización; cuatro organizaciones regionales más comenzaron el proceso gradual de construcción de su máquina de guerra.

Debido a que la ideología sancionada por el partido tiene el peso de la Biblia, predetermina la forma en que sus cuadros locales observan e interpretan la realidad. Según la versión de Sendero Luminoso, el Perú es una sociedad semi-feudal y semi-colonial en la que domina una forma de capitalismo burocrático. En términos más comprensibles, el Perú es un país subdesarrollado del Tercer Mundo, en que el poder sigue siendo manejado a través de medios semi-feudales (el control de la tierra como palanca política) y está subordinado a los poderes imperialistas. La economía está dominada por los intermediarios monopolistas y mercantilistas de las potencias mundiales, que utilizan al Estado para agudizar más la explotación de la población. (PCP 1988, II, 4-5)

En el pensamiento de Sendero Luminoso, lo que distingue al Perú es que las condiciones han madurado para poner en marcha la lucha armada, y el factor que ha faltado en los últimos 100 años –una dirección revolucionaria, en la forma del Partido Comunista del Perú- encaja en su lugar.

Sendero tiene una perspectiva utópica de un mundo nuevo a través de la lucha revolucionaria, en un plazo de un par de décadas. En la sociedad que Sendero creará, todas las deficiencias desaparecerían –los niños no morirán de hambre, los hombres no cometerán adulterio o se emborracharán, y las madres no abandonan a sus hijos-. A nivel de base, este tipo de mensaje tiene atractivo e impacto, en comparación con la desintegración de las normas morales y la ética, la corrupción y el caos imperante en muchas partes del Perú. Este mundo futuro ideal, sin embargo, primero debe ser ganado.

¿En términos prácticos, qué significa esto para el desarrollo rural? La ideología maoísta de Sendero, acentuada por el pensamiento de Guzmán, requiere de una prolongada guerra de guerrillas rurales, con el campesinado como base social. Este objetivo exige eliminar la brecha semifeudal de los campesinos. Otro objetivo es el dominio imperialista en el campo (PCP 1988, II, 5-6). En la visión sectaria de Sendero, las organizaciones apoyo a bases representan un intento de las potencias imperialistas (principalmente los gobiernos y organismos donantes europeos y americanos) para fortalecer las cadenas del capitalismo en el Perú rural.

En septiembre de 1989, El Diario, vocero semioficial de Sendero, publicó una condena total a los centros, el trabajo de apoyo y los esfuerzos caritativos, incluyendo a la Iglesia Católica. “El imperialismo y el social-imperialismo, mediante el fomento de sus ‘centros de promoción’, intentan reemplazar las tareas que deberían ser realizadas mediante obras públicas de este Estado. (Esta es) una actitud que responde a uno de los objetivos de la política de contrainsurgencia, mediante el fomento del pacifismo, la conciliación de clases y el trabajo libre (no remunerado), desviando la lucha del pueblo hacia el camino de la idiotez electoral”.

Para los senderistas, la presencia de programas de desarrollo, ya sea a través del gobierno o de organismos no gubernamentales, es un elemento

crucial en la evolución del capitalismo en las zonas rurales. Es el punto en el que los productores rurales quedan atrapados en el mercado. Es preferible para las comunidades rurales retroceder a las condiciones de la Edad de Piedra, antes que iniciar un proceso que conduciría a lazos más fuertes con la sociedad burguesa.

Sin embargo, esta interpretación sistemática de la realidad peruana seguiría siendo un extraño ejercicio de las artes oscuras del materialismo dialéctico de Sendero, si no estuviera combinada con una estrategia militar astutamente diseñada y meticulosamente planeada para tomar el poder. Sendero comienza con una estrategia político-militar flexible, diseñada para trabajar dentro de la compleja situación geográfica, económica y social de los Andes. Se construye cuidadosamente desde los niveles de base, aprovechando al máximo la acumulación de conflictos locales. Sendero explota las tensiones acumuladas en el continuo urbano-rural (como la demanda de servicios y gastos públicos, el mercado capitalista y los conflictos de tierras). Hace un uso sistemático y coherente de la violencia como medio de intimidación y consolidación de una autoridad alternativa. Interrumpe la posibilidad de que otras opciones políticas surjan o echen raíces en el ámbito local. Propone un modelo de sociedad a largo plazo, que pretende integrar a la sociedad a través de la lucha armada. Hace uso de mecanismos pedagógicos efectivos, que ayudan a reproducir sus miembros e ideología en condiciones adversas (Smith 1990).

Específicamente en su organización, Sendero ha concentrado sus recursos en la creación de un aparato militar capaz de sostener una revolución autosuficiente contra el Estado. En primer lugar, se caracteriza por la subordinación mental del partido, sus cuadros y recursos a sus objetivos militares y políticos. Esta militarización ha permitido a Sendero mostrar una relación estrecha y mensurable entre objetivos, acciones y resultados. En segundo lugar, tiene una estructura vertical y autoritaria, y una organización en células que han sido casi imposibles de ser infiltradas o rotas. La dirección del partido es un consejo de guerra estable y permanente, situado en la reserva estratégica. Esto proporciona una planificación a largo plazo “estratégicamente centralizada y tácticamente descentralizada” y una constante evaluación de la

situación. En tercer lugar, rechaza absolutamente a todas las organizaciones que no se subordinan al partido militarizado (Smith 1990). Una consecuencia de la militarización es que “el trabajo del Partido con las masas se lleva a cabo a través del Ejército” (PCP 1988, IV, 1).

A diferencia de la mayoría de los partidos de izquierda, Sendero nunca ha utilizado a los centros como instrumentos de su estrategia política, aunque sus miembros o simpatizantes pueden haber trabajado en ellos por períodos cortos. Esta política puede estar cambiando. Luis Arce Borja, ex director de El Diario, dio una conferencia en Bélgica en 1989, poco después del asesinato de dos voluntarios para el desarrollo franceses en Haqira, Apurímac. Al ser conminado a explicar por qué Sendero asesinó a los voluntarios extranjeros, afirmó que seis organismos donantes trabajan en favor de la administración García, de IU, y de la infiltración ideológica y política. “Si viajas apoyando a García Pérez, su contrainsurgencia y sus planes criminales, por supuesto que te conviertes en un blanco de la revolución, al igual que lo haría un campesino que acerca a las filas del Ejército” (Quehacer N° 59, 30-32).

Senderistas designados, incluyendo a Arce Borja, se acercaron a las agencias donantes europeas. Sus declaraciones revelan que sus solicitudes no habían tenido resultados positivos. También hay informes de algunas provincias rurales sobre nuevos centros de promoción abriendo frentes para la actividad senderista, aunque esto podría ser un mecanismo de defensa de las sociedades provinciales para rechazar a los forasteros desconocidos.

Carlos Iván Degregori, dice que desde que Sendero ha definido al Perú como semi-feudal, se ha encontrado con un fenómeno en los Andes que no encaja en su visión. En su Larga Marcha, Mao no encontró a ingenieros reparando torres de energía, agrónomos haciendo trabajo de extensión y antropólogos asesorando a las federaciones campesinas. “Considero que el grado de violencia que desarrolla SL es tan grande, entre otras causas, porque tiene que adaptar la realidad a la idea y para ello no sólo tiene que detener el tiempo; además tiene que hacerlo retroceder” (Degregori, 1989, 22).

Desde la perspectiva de Sendero, las OAB, organizaciones de base y desarrollo rural, junto con los partidos políticos, confesiones religiosas y el

gobierno burgués decadente, es “una pila de basura heredada tradicionalmente, que debemos despejar poco a poco”, citando a Engels (PCP 1988, V, 5) . Este tipo de instituciones y grupos son productos de desecho de la historia, u obstáculos en el camino de creación revolucionaria.

En el análisis final, todos los proyectos e instituciones no ungidos y subordinados a Sendero finalmente estarán bajo la mira. Con esta larga lista negra, sin embargo, Sendero tiene un atraso de objetivos. La frecuencia con que la guerrilla pone la mira en las OAB y sus socios locales depende mucho de las prioridades y las circunstancias. Sendero Luminoso ha preferido mellar los fundamentos vulnerables de la sociedad peruana, en vez de lanzar un asalto total contra el gobierno. Su objetivo es acabar con el estado y el capitalismo, incluso si eso significa condenar al pueblo a la subsistencia de la Edad de Piedra.

Sendero opera en los Andes, desde la provincia de Huamachuco en el departamento de La Libertad (en el norte), hasta Apurímac, invadiendo las laderas occidentales que rodean Lima. Su polo sur de desarrollo está en Puno, las provincias de Azángaro y Melgar. También opera en amplias zonas de la selva, como el Alto Huallaga y el Huallaga Central, los valles del río Apurímac-Tambo (en los departamentos de Ayacucho y Junín). Sendero sostiene haber extendido sus tentáculos a los 24 departamentos del país.

Sin embargo, Sendero Luminoso no ha tenido éxito en penetrar el norte de la sierra, incluyendo la mayoría de Cajamarca, Piura y Amazonas. También ha fallado varias veces en entrar al Cusco.

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)

El MRTA le debe su espacio político a Sendero. Los tres primeros años de la ofensiva senderista fueron desconcertantes. Sendero demostró que era posible entrar en una guerra de guerrillas contra un gobierno que tenía debilidades inherentes. El prolongado debate dentro de la izquierda marxista respecto a si las condiciones subjetivas y objetivas para la revolución estaban presentes se liquidó. Sendero, a través de sus rudas tácticas militares y su

sectaria ideología, hizo retroceder la frontera de las actividades políticas tolerables. Los dirigentes del MRTA pensaban que Sendero estaba dando mala fama a la revolución armada.

El MRTA unió grupos marxistas disidentes que se mantenían fieles a la premisa de que el cambio social efectivo sólo vendría a través de la violencia armada. Eran facciones que rechazaron el entusiasmo de los principales partidos por la política legítima, incluyendo la participación en las elecciones y el Congreso. De hecho, la chispa inicial se produjo durante las caóticas negociaciones de 1980 para formar una amplia coalición de izquierda, la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI). Las relaciones de la coalición se derrumbaron, pero las semillas y contactos establecidos para la sedición quedaron. Sus acciones iniciales parecían gestos de Robin Hood: distribución de “bienes expropiados” en barrios marginales y robos a bancos. Incluso se disculparon públicamente por haber matado a un policía frente a una embajada.

Cuando el MRTA entró en acción a principios de 1984, estaba, en efecto, preparando el día en que el resto de la izquierda marxista tendría que pasar a la clandestinidad. Era una creencia común en los círculos de la izquierda durante la década de 1980 que Belaúnde no terminaría su mandato, y que un golpe de Estado enviaría a los partidos marxistas de nuevo hacia las actividades clandestinas. El MRTA sería el brazo armado de IU.

El MRTA financia sus operaciones a través de robos de bancos, extorsiones, contribuciones a través de la venta de bonos y otras actividades. MRTA se aplica esta misma práctica a los empresarios y comerciantes. También podría recibir financiación y asistencia desde el extranjero, probablemente Cuba.

La organización cuenta con contactos internacionales que perturban a los militares peruanos. **Encaja en la tradición latinoamericana de la guerrilla romántica, que tiene sus raíces en Cuba, Fidel Castro y el Che Guevara, los Montoneros de la Argentina y los sandinistas.** Algunos miembros fueron a Nicaragua para luchar al lado de los sandinistas en la década de 1970. Durante un tiempo, integraron el Batallón América, con el colombiano M-19 y el

ecuatoriano “Alfaro vive, carajo”. Dos peruanos murieron en combates en Colombia. Tiene contactos con otros grupos insurgentes, como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador. También puede haber recibido armas del extranjero. Sus estrategias y acciones encajan perfectamente en el patrón de los grupos insurgentes de América Latina. Sin embargo, con la caída de las insurrecciones armadas en la región, el MRTA está descubriendo que su modelo a imitar y sus aliados internacionales se están alejando del uso político de la violencia.

El MRTA se ha mantenido al margen de los ataques a las OAB y sus socios locales. Ha enviado cartas y realizado visitas a las OAB solicitando contribuciones para su causa. Líderes del MRTA han trabajado en el pasado en las OAB. Un fundador del MRTA ayudó a establecer un importante centro de Lima, a mediados de la década de 1970. Una minoría de centros pequeños y empleados individuales pueden tener alguna simpatía por el MRTA. Como el MRTA espera un régimen autoritario o militar en el futuro del Perú, no quiere enemistarse con otros potenciales aliados, que deben decidir a las demás fuerzas de izquierda hacia la guerra de guerrillas.

En otras palabras, el MRTA sigue una lógica diferente de la guerra de Sendero Luminoso. Puede utilizar los centros como una cubierta para activistas en una zona, pero los centros no son un medio de penetración. Puede recopilar información a través de sus militantes, pero las OAB no sirven como proveedoras de inteligencia.

La Unidad Democrática Popular (UDP), una coalición de grupos disidentes que operan fuera de la Izquierda Unida, tiene simpatías apenas disimuladas hacia el MRTA. Funciona como su brazo político. UDP ha concentrado sus esfuerzos políticos en federaciones sindicales militantes, como los mineros, y algunas organizaciones campesinas. También participa en la Asamblea Nacional Popular. Una revista semanal, Cambio, sirve como su vocero público.

MRTA inicialmente limitó sus actividades a las zonas urbanas y al bolsón de la costa (Lima, Ica, Chimbote, Trujillo). En noviembre de 1987, el MRTA abrió su primer frente guerrillero a gran escala en el valle Medio del Huallaga.

La ocupación de San José de Sisa se llevó a cabo con gran cobertura de los medios e incluso entrevistas con los comandantes de la columna. Desde entonces, ha expandido sus áreas de operación para el Medio y Bajo Huallaga y los valles inferiores de Mayo, la cuenca del río Ene-Perené y Junín en la sierra central.

Con frecuencia el MRTA ha tratado de presionar al gobierno a aumentar la inversión en sus áreas de base. En 1988, secuestró al presidente de la Corporación de Desarrollo de San Martín para este propósito. En 1985, ofreció un cese del fuego informal a la recién inaugurada administración de García, con la condición de que el nuevo gobierno hiciera acuerdos justos con los sindicatos y aumentara el salario mínimo. También exigió la suspensión de los pagos de la deuda y la expropiación de empresas extranjeras. También ha habido señales de que al menos parte de su organización estaría dispuesta a negociar un acuerdo de paz con el gobierno, si las condiciones adecuadas prevalecen.

Este “enfoque reformista” ha llevado a Sendero a criticar al MRTA, por tratar de parchar las estructuras de explotación que pueden permanecer en pie. Más específicamente, SL no puede aceptar otras organizaciones políticas, armadas o pacíficas, desafiando su hegemonía en las zonas prioritarias. Estas diferencias han llevado a confrontaciones abiertas y enfrentamientos armados. En el Alto Huallaga, Junín y las estribaciones de la selva baja, Sendero y el MRTA compiten por el control del territorio, incluyendo combates abiertos. En el Alto Huallaga, Sendero ha pasado información al Ejército sobre los cuadros del MRTA, sus partidarios y depósitos de suministros. En 1989, los dos bandos se enfrascaron en un tiroteo en el campus de la Universidad de San Marcos.

Sin embargo, en 1989, el MRTA había sufrido grandes pérdidas en su duelo con Sendero, luchando contra las Fuerzas Armadas y la Policía y contra un trabajo de inteligencia más coherente de la policía anti-terrorista. Debido a que se ajustaba a las prácticas de guerrilla típicas de América Latina, era más fácil anticipar sus acciones y movimientos. En enero de 1989, el Ejército y la Policía acabaron con toda una columna de 64 guerrilleros. La Policía capturó al menos a dos miembros de su Consejo de Guerra Nacional, Víctor Polay y

Alberto Gálvez. Estos líderes y otros 46 activistas del MRTA escaparon de la prisión de máxima seguridad de Canto Grande, en junio de 1990.

Otros grupos armados

Con dos grupos armados ya en el campo, siempre es una tentación para otros grupos radicalizados, especialmente las juventudes de los principales partidos de izquierda, el unirse a la refriega. Pukallacta, el Frente Patriótico de Liberación (FPL) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-IV Etapa) han incursionado en la creación de unidades de guerrilla. Hay también muchas células pequeñas que son insignificantes a nivel nacional, pero que pueden tener importancia a nivel de base.

En diferentes momentos en el pasado, algunos grupos dentro de Izquierda Unida comenzaron la preparación para la lucha armada o se limitaron a tomar medidas defensivas en caso de ser blanco de ataques por parte de Sendero, las Fuerzas Armadas, la Policía o escuadrones de la muerte de la derecha. Si un golpe de Estado ocurriera, las facciones más radicalizadas de IU probablemente pasarían a la clandestinidad e iniciarían actividades de guerrilla. Es probable que el ala juvenil del APRA, influida por el pensamiento marxista y la propia historia radical del partido, siga su ejemplo. Fuentes militares dicen que este potencial para una guerra civil al por mayor ha sido un factor de disuasión entre los oficiales descontentos respecto de la tentación de derrocar al gobierno de García.

Fuerzas de Seguridad

Aunque el Ejército peruano tiene una reputación de ser uno de los más progresistas y socialmente heterogéneos de América Latina, no tiene una vocación política clara, aparte de una facción fascista dentro de la Marina. Por otra parte, la experiencia de los últimos seis años de servicio activo en la zona de emergencia ha cambiado actitudes. El cuerpo de oficiales reformistas del régimen de Velasco está dando paso a funcionarios cuyas experiencias

formativas han sido en la lucha contra Sendero “con las manos atadas a la espalda”, como dicen algunos funcionarios.

Las Fuerzas Armadas peruanas eran reticentes a involucrarse en la lucha contra Sendero. Acababan de salir de 12 años de régimen autoritario, que habían dañado la cadena de mando y el equipo de oficiales de talento. Habían perdido el apoyo popular y la autoestima. Estaban mal preparados para una guerra interna, después de haberse concentrado en la década anterior en la compra de armamento sofisticado para defenderse de una hipotética guerra en dos frentes contra Chile y Ecuador. Aunque el Ejército había enfrentado con éxito una insurgencia guerrillera a mediados de la década de 1960, la mayor parte de sus planes de contrainsurgencia eran anticuados, basados en la táctica de la escuela francesa (Argelia e Indochina).

Desde 1983, los militares han jugado un papel de liderazgo en la lucha contra Sendero y, después, contra el MRTA. Sin embargo, ha sido difícil evaluar lo que realmente piensan los militares sobre el conflicto. El Ejército sigue creyendo que la aplicación máxima de potencia de fuego derrotaría a los insurgentes, pero el gobierno no lo permite. Probablemente la mayoría del cuerpo de oficiales apoyaría una estrategia como la del Cono Sur, sin cuestionamientos.



Los militares peruanos vienen a dominar a la sociedad civil. TAFOS/Cusco, 1991.

“Los militares, como Brian Jenkins señala, no creen estar ‘despolitizados, desmovilizados, o fuera de combate’, sino más bien piensan que han sido irracionalmente limitados e injustamente criticados por hacer lo necesario para contener la marea de la insurgencia”. (McCormick 1990, 44, citando una investigación inédita de RAND).

Las fuerzas armadas peruanas disponen de un servicio militar basado en el reclutamiento, aunque los reclutas suelen provenir de las clases bajas. Los jóvenes de clase media y alta fácilmente obtienen exenciones. Esto impone varias limitaciones a las tácticas militares. Los reclutas de la zona de emergencia de Ayacucho no sirven en los batallones que operan en la misma región, por temor a la infiltración. Reclutas costeños y de la selva sirven en la sierra. Esto introduce distinciones étnicas, lingüísticas y culturales en la relación entre las tropas y la población local. Los soldados urbanos menosprecian a los indígenas de la sierra. Están mal preparados para las dificultades de operar en zonas de combate de alta altitud, con líneas de suministro y apoyo logístico pobres e ineficientes. Sin embargo, las tropas en el Huallaga provienen de la misma zona y operan de manera más adecuada.

En la formación del cuerpo de oficiales, hay una clara distinción entre los funcionarios bajo el rango de coronel y los oficiales preparados para ser generales. La instrucción y educación estándar sigue la escuela del mundo en blanco y negro: cristianos contra comunistas, los Estados Unidos contra la Unión Soviética. Para los oficiales con mandos superiores en su futuro, las Fuerzas Armadas ofrecen cursos intensivos en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM). Allí los pocos escogidos reciben un barniz político y una visión más sofisticada del mundo. Esta separación de los procesos de profesionalización explica por qué los oficiales de línea no tienen la capacidad de discernir los matices políticos entre los grupos e instituciones de izquierda.

“Si la experiencia anti-guerrillera del Perú en los últimos ocho años refleja con exactitud los puntos de vista, la doctrina, capacidades y limitaciones que moldean la planificación actual, el Ejército tiene poca preocupación por las dimensiones del problema que enfrenta, poco interés o comprensión de los principios de la contrainsurgencia, medios insuficientes para llevar a cabo una

campaña poco convencional exitosa, y ninguna perspectiva de mejorar su situación material en un futuro previsible. En consecuencia, su rendimiento sufre” (McCormick, 1990: 33).

Policía Nacional

Los 86.000 efectivos de la Policía Nacional han tenido que llevar la peor parte de la contrainsurgencia en las zonas no declaradas en emergencia, y también desempeñan un papel subordinado a las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia. Sufre rivalidades entre los tres ex servicios de policía: la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones del Perú (PIP). El gobierno de García unió a los tres servicios en una fuerza nacional, pero no ha superado los rencores y las divisiones administrativas inherentes a la división.

Hasta fines de los '80, la policía no contaba con unidades especializadas en operaciones de contrainsurgencia. Una unidad infame, conocida por su nombre quechua, “los Sinchis”, no era más que un grupo de graduados recientes del campo de entrenamiento de Mazamari, en la selva central. La táctica de Sendero de asesinar a policías, frecuentemente en su tiempo libre o después de su servicio activo en las zonas de emergencia, ha traído consigo tensiones severas entre oficiales y policías comunes.

El policía de calle y esquina está mal pagado, y gana menos de US\$ 100 al mes. Posee tiene el equivalente a una educación secundaria, más un año de formación. Hasta 1985, la policía recibía sólo 6 meses de formación.

Estados de emergencia

La Constitución del Perú de 1979 permite al Poder Ejecutivo declarar el estado de excepción durante 60 días, renovables a partir de entonces. Se suspenden cuatro garantías constitucionales: el requisito previo de una orden judicial para entrar en un domicilio privado o hacer un arresto, la libertad de circulación dentro del territorio nacional y la libertad de reunión pública. Bajo el estado de emergencia, el Ejecutivo también puede entregar el resguardo del

orden público a las Fuerzas Armadas. De hecho, puede haber un decreto secreto de 1963 que automáticamente entrega el poder a los militares. Si empeora el descontento social, el gobierno también puede declarar el estado de sitio. Ningún gobierno ha invocado esta segunda situación (García Sayán 1987). Sin embargo, una vez que el gobierno declara un estado de emergencia, las fuerzas de seguridad interpretan esta autorización como una suspensión completa de las garantías jurídicas.

La primera vez que el gobierno invocó esta facultad fue en octubre de 1981. Desde 1983, se ha convertido, para todos los aspectos, en un estado permanente en Ayacucho. Tanto Belaúnde como García han puesto a todo el país bajo estado de emergencia en varias ocasiones. A fines de 1989, 8 departamentos estaban bajo estado de emergencia: Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, Cerro de Pasco, Huánuco, San Martín y Ucayali. También hay varias provincias, como Lima Metropolitana y Callao.

Esta medida tiene implicaciones prácticas para las OAB. Debido a que los militares tienen la autoridad de restringir el libre tránsito y las reuniones públicas, el Ejército interpreta esto como un mandato para supervisar a las OAB en zonas de emergencia (así como a los investigadores de derechos humanos y a las organizaciones internacionales de socorro). En Ayacucho, dos OAB tenían suspendidas las autorizaciones para desplazarse al campo, aunque finalmente las recuperaron.

Sin embargo, desde principios de 1989, tropas del Ejército han tomado posiciones y patrullan zonas que no están bajo estado de emergencia. Por ejemplo, en el sur de Cajamarca y Puno, los comandantes dicen tener autoridad para buscar y enfrentar unidades guerrilleras en su área, e incluso seguirlas en otras jurisdicciones militares. Esta tendencia aumentó en la segunda mitad de 1989, ya que las fuerzas armadas debían garantizar las elecciones municipales de noviembre. Esta situación continuó más allá de las elecciones generales de abril y del cambio de gobierno en julio.

La declaración de un estado de excepción produce una subordinación de las instituciones civiles a la autoridad militar. Aunque el sistema judicial y el gobierno supuestamente siguen funcionando, el comandante militar se

convierte en la última instancia que toma decisiones. Debido a que las élites civiles temen por sus propiedades y vidas, buscan la seguridad en el Ejército. Esto obliga a una recomposición del sistema de prestigio y poder, una polarización adicional entre ricos y pobres. Desde la elección de los padrinos hasta los esposos potenciales para las hijas, los militares tienen prioridad.

Cuando hay más actividad económica, la contrainsurgencia se convierte en un contrato comercial con los intereses locales. El comandante ofrece protección a cambio del uso de vehículos, suministros e incluso pago en efectivo. Esta práctica es evidente en Puno, donde las unidades de policía protegen las empresas asociativas que quedan (Pisoconi y Santa Rosa en la provincia de Melgar, Sollocota en Azángaro y Aricoma en Carabaya) (IDL 1990, 50). En la sierra central, el Ejército y la Policía han conseguido establecer relaciones con las empresas mineras. Durante la huelga minera nacional de 1989, la actividad militar estaba destinada a echar atrás a los huelguistas en lugar de combatir a los guerrilleros.

Las fuerzas de seguridad, tanto la Policía como las Fuerzas Armadas, rotan periódicamente. Estos viajes varían de tres meses a un año. Esto significa que rara vez tienen conocimientos profundos de la zona. Consideran a los centros como forasteros, a pesar de que pueden haber estado allí por 20 años. La mayoría de los centros y su personal han interiorizado esta faceta, ya que esperan roces periódicos con las fuerzas de seguridad, como parte de "llegar a conocerse unos a otros".

Los nuevos reclutas sólo quieren cumplir sus dos años en el servicio y después salir. La mayoría de las tropas del ejército provienen de las zonas urbanas costeñas, añadiendo un componente racial y étnico a sus relaciones con los vecinos de la Sierra. Pocos oficiales hablan quechua. "Para los oficiales, es un mundo que no entienden y temen", dice un trabajador de una OAB de Ayacucho. "Es más fácil creer que todos son sospechoso de senderismo que empezar a hacer distinciones".

En períodos de tensión y conflicto, los militares y la policía se apresuran a acusar a las OAB como problemáticas o incluso de ser brazos legales y aparatos logísticos de Sendero. A sus ojos, los proyectos de la OAB (y incluso

los programas bilaterales o multilaterales de desarrollo) son, voluntaria o involuntariamente, agentes del comunismo. Su mejor opción, dicen los militares, sería salir de la zona y despejar el camino para que el Ejército realice el trabajo sucio sin testigos incómodos. **Los militares no pueden entender por qué extranjeros –o forasteros con formación universitaria- querrían trabajar con indios atrasados; por tanto, deben ser comunistas y simpatizantes de Sendero.**

En un cruce entre el señorío feudal y la solidaridad de casta, los comandantes locales tienen margen de maniobra para llevar a cabo la estrategia contrainsurgente. Un oficial militar activo dice: “Las normas de respeto a las autoridades locales y los derechos humanos están en los reglamentos para las operaciones en las zonas de emergencia. Depende del comandante en jefe y su personalidad el hacerlas cumplir”. Mientras no se rompan las normas internas, pueden improvisar, desde la organización de eventos deportivos para la juventud local, hasta dismantelar todas las organizaciones de base que no juren lealtad al ejército. Ha habido sólo unos pocos informes sobre esta faceta. Por lo general, los grupos de derechos humanos son capaces de determinar cuáles son los comandantes de línea dura, porque las denuncias de abusos y desapariciones empiezan a acumularse en una zona específica. A veces, un oficial “bueno” encuentra su camino en los informes de prensa, porque organiza programas de acción comunitaria.

La mayor parte de la corrupción es pequeña, usando la caja chica para compras que son demasiado caras o que nunca se hacen –la corrupción militar a gran escala viene del contrabando y compra de material-. Sin embargo, la cúpula militar teme la influencia corruptora del narcotráfico. El oficial al mando de la zona del Alto Huallaga en 1984-1985, general Carvajal, fue expulsado del servicio debido a cargos relacionados con drogas. A principios de 1990, tres oficiales fueron sometidos a consejo de guerra por tráfico de drogas y el comandante regional del Huallaga fue relevado de sus funciones.

Existe un abuso estructural enclavado entre los soldados y oficiales. Consideran que los “cholos” son ciudadanos de segunda clase, o simpatizantes de la guerrilla, si no combatientes plenos. Otros tipos de abusos, como torturas

o ejecuciones extrajudiciales, requieren de iniciativas especiales, que por lo general dependen del oficial al mando.

Cualquier persona que quiera salir adelante en su carrera no tomará riesgos. Los arriesgados terminan como el “comandante Camión” –un oficial de marina que encabezó la más sangrienta represión, y está en el exilio en Panamá-, sin ninguna posibilidad de devenir en generales o presidentes. Son pocos los que ponen el cuello en el otro lado del espectro contrainsurgente, rompiendo con el molde de línea dura y poco conformista impuesto por el entrenamiento militar. “En este tipo de guerra, basta con no perder para ganar en la carrera militar”, dice un miembro de una OAB que ha observado de cerca a los militares.

El general Alberto Arciniega, comandante del teatro de operaciones del Alto Huallaga en 1989, es una excepción que confirma la regla. Tuvo éxito en la reversión de los avances de Sendero en el valle a través de una agresiva ofensiva militar, una postura abiertamente política y un intento de apoyar a los cocaleros locales. Llevó a cabo esta reversión a costa de violaciones de los derechos humanos en la zona, aunque menos de las que cabría haber esperado debido a la escala de las operaciones. Sin embargo, desde que fue puesto fuera del comendo a fines de 1989, está confinado en un puesto burocrático del Ministerio de Defensa.

Comando Democrático Rodrigo Franco y otros grupos paramilitares

La primera acción del Comando Democrático Rodrigo Franco (CFR), fue el asesinato de Manuel Febres, abogado defensor del líder senderista Osmán Morote, en julio de 1988. El nombre fue tomado de un joven líder aprista, presidente de una empresa estatal, que Sendero Luminoso asesinó en agosto de 1987. Durante el siguiente año, nuevos asesinatos, ataques y amenazas fueron atribuidos al Comando Rodrigo Franco. El CFR ofrece una bandera conveniente para ocultar individuos y grupos descontentos. En Ayacucho, el Ejército lo utilizó como un medio de intimidación contra la población local (Instituto de Defensa Legal 1989).

Sin embargo, ya existía un registro de grupos paramilitares, estrechamente vinculados al APRA. En Puno, las OAB, la Iglesia Católica, los parlamentarios y otras organizaciones recibieron ataques y amenazas en 1986 y 1988. La Policía Nacional, el Ministerio del Interior y la Fiscalía de la Nación han mostrado escaso interés en resolver la mayoría de los delitos relacionados al Comando Rodrigo Franco. Fuentes militares dicen que algunos incidentes muestran que el CRF tiene acceso a la inteligencia de la Policía.

Una investigación del Congreso dio lugar a un informe en minoría que acusa al Comando Rodrigo Franco de tener vínculos directos con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el APRA. También denunció que el Comando Rodrigo Franco fue el responsable del asesinato del diputado IU Eriberto Arroyo y tal vez del diputado del APRA Pablo Li, en abril de 1989. El informe en mayoría hizo caso omiso de la evidencia.

Aunque parezca contradictorio, el APRA sufre de tirones desde dos direcciones. En algunas zonas, incluso el MRTA y Sendero atraen a su ala juvenil. La fórmula paramilitar atrae a sus elementos de mano dura (búfalos y grupos de defensa), influidos fuertemente por 40 años de lucha anticomunista y las tácticas de matón para mantener el control de las organizaciones populares. Una fuente cercana a los militares dice haber identificado 75 grupos armados en el APRA, adjuntos al partido, al gobierno o a entidades públicas, para proporcionar una protección suplementaria.

Los grupos paramilitares constituyen una amenaza potencialmente más peligrosa que Sendero para muchas OAB. Operan en zonas urbanas y tienen como blanco a individuos y organizaciones que pueden aparentar simpatías de izquierda, no necesariamente con los grupos subversivos. Estas incluyen organizaciones de derechos humanos, sindicatos, frentes regionales de defensa y organizaciones de base. Abren una brecha aún más amplia en la aplicación de la ley, dado que fomentan que militares y policías descontentos pasen por alto las deficiencias del sistema de justicia. Sus acciones se dirigen a entregar mensajes a un público más amplio, y los blancos seleccionados sirven a ese propósito tan bien como los verdaderos subversivos.

Delincuencia criminal y narcotráfico

En períodos de agitación social y política, las actividades delictivas suelen aumentar, tanto por la necesidad de sobrevivir como por la ruptura de los estándares éticos y morales, del gobierno eficaz y del cumplimiento de la ley. En algunas partes del país, el bandidaje y robo en carreteras han estallado. Una práctica criminal frecuente es la extorsión, bajo el pretexto de pertenecer a grupos armados, para exigir impuestos de guerra u otros pagos.

El narcotráfico constituye una grave amenaza para el país. El cultivo de la coca ha sido una actividad tradicional de los campesinos andinos por un milenio. Gracias a los esfuerzos de colonización en los años '60 y '70, el gobierno abrió amplias zonas de las estribaciones andinas de la selva. A mediados de la década de 1970, el cultivo de coca para el tráfico ilegal se afianzó y expandió rápidamente. En 1985, el tráfico y sus repercusiones criminales cobraron proporciones epidémicas, aumentadas por la implicación de la mafia colombiana. Durante sus incursiones más profundas sobre el terreno, la mafia colombiana ha desplegado un arsenal y mano de obra muy por encima del gobierno o las fuerzas insurgentes.

El narcotráfico se ha concentrado en el valle del Alto Huallaga, donde las OAB no han estado activas. Sin embargo, es también frecuente en los valles tropicales del Marañón, Apurímac, Urubamba y los ríos Tambopata, así como el Ene, Tambo, Perené, Pichis, Palcazú y los ríos de la Amazonia central. Por lo demás, la resistente planta de la coca se adapta a todas las vertientes orientales tropicales de los Andes y crece también en otros lugares.

Tanto Sendero Luminoso como el MRTA han desarrollado relaciones de trabajo con los productores de cocaína y los intermediarios de la mafia colombiana. El complejo cocalero del valle del Huallaga revela una faceta de las prácticas de Sendero Luminoso. La contradicción principal en las zonas rurales es el conflicto entre productores y compradores. Las mafias colombianas hicieron cumplir sus precios a través de la violencia armada. En el valle del Huallaga, ni el Estado ni un mercado verdaderamente libre puede intervenir para controlar los precios, porque el cultivo y la comercialización de la coca son ilegales y están penalizados. El gobierno y las autoridades de policía

perdieron su legitimidad debido a que son corrompidos con facilidad y están en connivencia con la mafia. Los abusos cometidos por las autoridades –robos y extorsiones- no pueden ser denunciados ante el gobierno porque la mayoría de los cultivadores de coca ejercen una actividad ilegal.

Sendero, que se considera fuera de la ley burguesa, intervino para mediar en esta contradicción entre agricultores y los compradores mediante la aplicación de una violencia superior. Esta autoridad, que combina el monopolio de la violencia y la administración de justicia, también adquiere el derecho de cobrar impuestos por sus servicios. Lo que estamos viendo tienen lugar en el Huallaga es la instalación de un nuevo estado en su forma más primitiva (De Remetería 1989, 372-374).

En 1982-1983, Sendero Luminoso trató de aplicar una función similar mediante el cierre de las ferias dominicales en Ayacucho, bloqueando el acceso a los mercados urbanos. Esta fue una de las razones por las que muchos campesinos perdieron su lealtad a Sendero. Necesitaban el mercado. El recurso fue demasiado extremo. En el Huallaga, Sendero encontró una manera más pragmática, un medio eficaz para poner a los campesinos a su lado.

Tanto Sendero como el MRTA han abierto nuevas áreas para el cultivo de coca, aunque establecen superficies de coca obligatorias para los agricultores y campesinos que no quieren aumentarlas. Este paso puede ser debido al reconocimiento de la guerrilla de que sólo podrán mantener su independencia financiera garantizando que los residentes locales tengan ingresos suficientes para pagar “impuestos de guerra” y otras contribuciones, así como impulsando a la población local fuera del orden legal.

Esta relación con el cultivo de coca y el narcotráfico es tal vez uno de los rasgos más amenazadores de la insurgencia del Perú, debido a su carácter virulento. Es difícil concebir que Sendero se extienda a Bolivia, Ecuador o Venezuela como fenómeno político. La alianza de Sendero y la cocaína, sin embargo, tiene más posibilidades de echar raíces en otros escenarios andinos-tropicales.

SECCIÓN 3: ESTUDIOS DE CASO

Hemos elegido los ataques guerrilleros contra la estación agrícola Allpachaka en Ayacucho (1982) y el programa de desarrollo rural de la IER Waqrani en Puno (1989). Hay paralelos intrigantes entre los dos estudios de caso. Ambos eran símbolos de las demandas regionales por el desarrollo. Ambos contaban con el respaldo de instituciones representativas: en el primer caso, la Universidad de Huamanga y, en el segundo caso, la Iglesia del sur andino. Ambos fueron intentos de producir cambios en las regiones más pobres y aisladas del país. Los dos casos, sin embargo, difieren en el tema crucial de los medios a través de los cuales se propusieron alcanzar sus metas.

También tratamos de mostrar que, a pesar de que la agresión vino de Sendero Luminoso, existió otro lado del conflicto: la hostilidad de las fuerzas de seguridad regionales y los intereses creados que condicionaron los ataques.

Hemos incluido recuentos detallados de los antecedentes, los ataques y las consecuencias, ya que la información de prensa en el momento fue, con frecuencia, escasa e incorrecta. En ese momento, los medios de Lima intencionalmente distorsionaban la información con fines políticos, o simplemente la ignoraban. Estos relatos con frecuencia terminan incorporados a las evaluaciones generales, especialmente cuando los analistas no filtran la información en bruto.

Creemos que quienes se preocupan por la violencia política no deben verla como un fenómeno abstracto. La muerte y la destrucción afectan a comunidades concretas, instituciones y particulares. Las diferentes maneras de responder a la crisis también nos hablan sobre la metodología y la naturaleza institucional de los participantes.

Sin embargo, debemos tener cuidado de buscar explicaciones demasiado sofisticadas para las agresiones de Sendero o los militares. **Algunos de los detalles de este análisis pueden ser meras coincidencias o características superficiales. El riesgo es que el personal de la OAB, los**

organismos donantes y otros puedan utilizar este análisis como una forma de argumentar que Sendero nunca los atacará. Como se ha indicado en otra parte, Sendero necesita pocas justificaciones para atacar a los forasteros o las figuras de poder cuando afirma su preeminencia en una zona.

AYACUCHO: ALLPACHAKA

Vaciando el campo

La estación experimental de Allpachaka fue el primer caso en el que Sendero tomó represalias contra un centro dedicado a la investigación agrícola y el trabajo de extensión. También fue parte de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, estrechamente vinculada a la formación y evolución de Sendero Luminoso. Desde entonces, Sendero ha atacado otros centros universitarios de investigación: el centro de extensión de Chuquibambilla, en la provincia de Melgar, Puno, y las estaciones de La Raya (pertenecientes a las universidades de San Marcos y del Altiplano, en Puno), Sicuani (Cusco), las instalaciones de Investigaciones Tropicales de la Universidad de San Marcos en Pucallpa (Ucayali) y las instalaciones del Centro Internacional de la Papa en Huancayo (Junín). Sendero también ha afectado a otros centros de investigación asociados con universidades de Lima.

Como un destacado científico social peruano que conoció a Guzmán y su respeto por la enseñanza superior en la década de 1960 nos preguntamos ¿por qué un grupo insurgente debe tratar de destruir un conjunto de información valiosa, parte del conocimiento universal, que no tiene colores políticos? ¿Por qué sus acciones también masacran “vacas capitalistas”, destruyen bancos de semillas y queman escuelas construidas durante décadas de trabajo en la meseta barrida por el viento de Allpachaka, y otras zonas remotas?

Este ataque frustró a muchos y condujo un analista extranjero a escribir: “Irónicamente, la granja experimental de la Universidad de Huamanga tiene un buen registro de orientar su investigación hacia las necesidades de los campesinos locales y de ninguna manera trabaja exclusivamente en beneficio

de los propietarios medios, como sucede con otras universidades en el Perú”. (Taylor 1983, 21). Sin embargo, hubo elementos en el programa de Allpachaka y en el contexto más amplio que nos permiten comprender el incidente de manera más adecuada.

La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga creó el centro agrícola de Allpachaka en 1965. Más de 20 hacendados ofrecieron sus fincas a la Universidad, con la esperanza de evitar ser afectados por la Reforma Agraria 1964. (Díaz Martínez, 1985, 35). Durante décadas, el campo ayacuchano había estado en decadencia, con la migración y la caída de la productividad como constantes. La estación experimental pretendía inyectar investigación agrícola, nuevas tecnologías y formas de aplicación y extensión campesina en este entorno. La asistencia y financiamiento provino de la cooperación técnica suiza, el World University Service, el gobierno holandés, la Organización de Estados Americanos y el Instituto Interamericano de Cultivos Andinos.

La granja experimental se ubica a 72 kilómetros al sur de la ciudad de Ayacucho, a una altitud de 3.580-4.200 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con 1.588 hectáreas de tierra. La investigación incluye estudios de suelos, pastos y ganado, cultivos andinos (papa, mashua, oca y olluco) y bancos de semillas. La universidad tenía una segunda granja experimental en Huayapampa, a pocos kilómetros de la ciudad. Un tercer centro, propuesto para las estribaciones de la selva del valle del río Apurímac, nunca consiguió pasar de la fase de planificación (UNSCH 1977, 94-98). La idea era ofrecer a los alumnos, profesores e investigadores experiencias prácticas y de investigación en las tres zonas ecológicas de Ayacucho: la puna, los valles quechuas y el valle selvático. Conceptualmente, este programa complementaba el mandato de la universidad para crear “ingenieros rurales” y otros profesionales que tuvieran los conocimientos necesarios para ayudar a la transición de un remanso rural a una sociedad moderna y progresista.

La investigación agrícola y el programa de extensión fueron ideas del rector Efraín Morote Best, uno de fundadores de la universidad. Él representaba en la universidad y la comunidad a la élite provinciana, cosmopolita y educada, relacionada con los circuitos intelectuales de Lima. Se

encontró enfrentado contra la otra figura principal del campus y la ciudad, Abimael Guzmán, que representaba una línea más política de pensamiento, fuertemente influenciada por el maoísmo en boga en los círculos universitarios de la época. Este duelo determinaría la discusión pública y las alianzas de poder que giraban en torno a la universidad y sus esfuerzos de difusión durante dos décadas. También marcó el nacimiento político del proyecto Allpachaka, que fue producto del bloque anti-Guzmán. Después que Morote Best dejó el rectorado en 1968, el gobierno de la universidad cayó en manos de Guzmán. Entre 1970 y 1975, esta rivalidad, aunque velada detrás de otros temas, llegó a un clímax. La disputa se centraba principalmente en las prácticas de camarilla de Guzmán para controlar la administración de la universidad, pero tenía otras ramificaciones. Mientras los aliados anti-Guzmán criticaron las prácticas de contratación y la asignación de las cuotas de cafetería y vivienda de acuerdo a la adhesión al partido, la facción senderista contraatacó criticando al programa Allpachaka.

Las críticas de la facción de Guzmán fueron: que Allpachaka no funcionaba como un centro educativo, porque los estudiantes visitaban el centro de forma breve y no se involucraban en actividades concretas, que no estaba haciendo esfuerzos serios para difundir el conocimiento y la investigación entre las comunidades vecinas; que los campesinos no aceptaban las propuestas de investigación y técnica en sus prácticas agrícolas. Antonio Díaz Martínez (1985, 37), agrónomo y vocero principal de esta facción, acusó a Allpachaka de estar siguiendo el camino de la clase Junker prusiana hacia el capitalismo, y de ser enclave del imperialismo en los Andes.

Díaz Martínez hizo una contrapropuesta para el desarrollo de Allpachaka. Hizo un llamamiento para la gestión colectiva de las explotaciones por los trabajadores, incluyendo 10 hectáreas de cultivos colectivos, unificar los rebaños comunales y crear una aldea modelo, haciendo hincapié en el ayni y la minka, sistemas andinos de trabajo comunal (Díaz Martínez 1985, 205-8). Aunque la propuesta manifiesta una preocupación por el bienestar de los trabajadores y las comunidades vecinas, no iba más allá del paternalismo y del concepto idealizado de la comunidad campesina de Ayacucho.

En respuesta a algunas de las críticas, la Universidad, bajo un nuevo gobierno sin participación de la facción de Guzmán, creó un Centro de Capacitación Campesina (CCC) en 1975. El programa marcó un nuevo rumbo en las prácticas estándar y una nueva evaluación de la educación popular y los programas de desarrollo rural de la universidad en la región. Entre 1977 y 1982, con la asistencia de dos asesores holandeses para el desarrollo, el CCC trabajó con las comunidades campesinas del valle del río Pampas, y en los pastizales de altura sobre él. Sendero citó la presencia de los dos asesores holandeses como prueba adicional de la penetración capitalista e imperialista oculta en el programa Allpachaka.

El entorno social

La presencia de la estación experimental Allpachaka tuvo consecuencias que iban más allá de su mandato de investigación y extensión agrícola. La universidad compró la hacienda Allpachaka, de la familia Capeletti. Con las tierras, la universidad también adquirió 16 feudatarios y sus familias. Ellos vivían en la hacienda, trabajando la tierra a cambio de pequeñas parcelas individuales. En lugar de expulsar a los siervos de las tierras, la universidad los incluyó en su nómina de trabajadores. Con el tiempo, los antiguos siervos se unieron al sindicato universitario y recibieron otros beneficios, como estabilidad laboral o estudios universitarios para sus hijos.

La universidad proporcionó otras mejoras. Una escuela bilingüe empezó a funcionar en la granja experimental, primero para los grados de primaria y, más tarde, incorporando los grados secundarios. Tenía 4 maestros a tiempo completo, suministrados por la universidad. La universidad también instaló un puesto médico con un promotor de salud, una enfermera y un médico visitante. Estos servicios también estaban disponibles para las comunidades circundantes. En comparación, el personal del CCC encuestó a 16 comunidades campesinas del valle del río Pampas y encontró que habían 14

escuelas primarias, 2 puestos sanitarios, 1 de agua potable y 5 accesos por carretera. Ninguna de las comunidades tenía alcantarillado, electricidad o escuelas secundarias (Gianotten et al 1987, 216).

Los trabajadores mantenían el derecho a cultivar sus parcelas individuales de tierra, con la ventaja de semillas mejoradas, fertilizantes, herbicidas y maquinarias agrícolas facilitadas por la universidad. También pastaban su ganado en los terrenos de la estación. Las comunidades campesinas en torno a Allpachaka se alejaban del tradicional sistema comunal de cultivo y rotación de tierras. Este proceso, llamado parcelación, significaba la repartición de las tierras en propiedades individuales y una dependencia más fuerte respecto de los mercados urbanos. Los trabajadores de Allpachaka comenzaron a comprar tierras alrededor de la estación.

Estas ventajas pronto comenzaron a diferenciar a los antiguos siervos de las comunidades campesinas de los alrededores. En 1970, un mercado dominical empezó a funcionar en Allpachaka. Los trabajadores eran los comerciantes, que compraban productos locales y vendían bienes de consumo urbano a los campesinos, en calidad de intermediarios entre el campo y el mercado de Huamanga. A fines de 1970, los trabajadores de Allpachaka tenían en promedio ingresos 6-7 veces mayores que los campesinos de las comunidades circundantes. Empezaron a comprar tierras fuera de la granja experimental. Solicitaron y recibieron posiciones de prestigio en las procesiones religiosas y otras festividades, que desempeñan un papel importante en la cultura andina. Las mujeres jóvenes de comunidades vecinas aspiraban a casarse con uno de los hijos de Allpachaka.

Por último, los trabajadores de la universidad comenzaron a presionar a la administración para ayudar a ejercer presión para que Allpachaka alcanzara el status de distrito y tuviera un puesto de policía. La promoción de una aldea o pueblo como distrito ha sido un medio tradicional de “declarar la independencia” y fortalecer los vínculos directos con la capital provincial o departamental (Favre 1987, 26-27). Había una fuerte resistencia a la presencia policial en el valle del río Pampas (Degregori, 1986, 42), por lo cual fue un cambio importante de actitud por parte de los trabajadores de Allpachaka el

solicitar un puesto policial. No se pueden atribuir todos estos cambios exclusivamente al programa de la Universidad. Cambios similares ocurrieron en otras zonas de la provincia de Huamanga, pero Allpachaka los aceleró.

Contrariamente a lo que Díaz Martínez criticó a finales de los '60, los ex feudatarios resultaron muy favorecidos por el proyecto. Como empleados-proprietarios-comerciantes, poco a poco se levantaron por encima de la estatura de los campesinos ayacuchanos. Hubo en realidad poco que la universidad pudiera hacer para detener este proceso de diferenciación, una vez que este se inició. Los empleados y el sindicato habrían protestado si la universidad hubiera decidido discriminar a los trabajadores de Allpachaka.

Poco de la investigación agrícola fue aplicado al campo. Los profesores e investigadores tuvieron dificultades para traducir sus estudios en programas eficaces para los campesinos. Allpachaka siempre tuvo una estructura vertical y las comunidades circundantes eran siempre las menos beneficiadas por sus programas. A lo sumo, la universidad contrataba a campesinos de la zona como peones cuando era necesario.

El Centro de Capacitación Campesina (CCC) tuvo un enfoque diferente y comenzó a tener diferencias con la estación experimental en sí. Durante los primeros tres años, el CCC continuó operando una escuela campesina en Allpachaka, donde los dirigentes locales recibían cursos. Las clases eran ejemplos de aprendizaje abstracto en un lenguaje que estaba por encima de las cabezas de los campesinos y los sustraía de sus experiencias en la vida real. El personal del CCC pronto se encontró con que las comunidades no enviaban a sus líderes a los cursos. En cambio, los estudiantes eran personas jóvenes, fácilmente liberadas del trabajo de campo, que no tenían el mandato de transmitir sus experiencias de aprendizaje al resto de la comunidad.

El personal poco a poco hizo más hincapié en los estudios antropológicos y agrarios de los sistemas comunales, para que el trabajo de extensión pudiera comenzar desde el propio nivel de los campesinos. Después de 1979, el centro buscó activamente el contacto directo con las comunidades y ayudó a planificar, financiar y llevar a cabo pequeños proyectos de desarrollo rural en el valle del río Pampas. Después de 1980, Allpachaka ya no sirvió

como escuela campesina y mantuvo un almacén de suministros. Finalmente, el programa del CCC tuvo como objetivo reunir a las comunidades individuales en una federación campesina única, para abordar los problemas sociales y económicos de su región.

Sendero siempre tuvo una posición fuertemente crítica contra los centros y el apoyo financiero internacional en Ayacucho. Los investigadores y el personal de desarrollo extranjeros podían tener buenas intenciones, pero sus informes y artículos terminaban publicados en el exterior, formar un grupo de inteligencia contra el surgimiento de la revolución en el país andino. Una vez iniciadas las actividades de guerrilla, también había una gran preocupación por parte de Sendero Luminoso respecto a que los viajes por el campo y los encuentros con los campesinos darían lugar a fallos de inteligencia ante las fuerzas de seguridad. Las pequeñas obras llevadas a cabo por los centros estaban “desviando a la gente de la revolución y retrasando su estallido”, engañándolos con la idea de que las obras podían contribuir a su bienestar. El director del colegio bilingüe de Allpachaka era agente de Sendero en la zona, e intervino activamente para sabotear los esfuerzos de la CCC en relanzar el trabajo del centro de extensión. Sin embargo, Sendero nunca conoció la propuesta de la CCC de unir a dichas comunidades en una organización intercomunal, dicen los trabajadores. De hecho, nunca la CCC sufrió un ataque de Sendero Luminoso durante sua fase de apertura, sobre todo porque no había nada físico que golpear. Toda la infraestructura de pequeña escala fue absorbida por las comunidades campesinas.

Los ataques

En mayo de 1980, Sendero Luminoso inició su insurrección armada y fue cobrando velocidad. A través de pequeñas acciones cuidadosamente planeadas, Sendero barría el campo y lo libraba de obstáculos (Gorriti 1990).

El 3 de agosto de 1982, una columna senderista apareció en Allpachaka. Reunió a los comuneros y los obligó a saquear y quemar el centro (DESCO, 85-86). En una desviación notable del respeto andino hacia el ganado, los

atacantes sacrificaron 4 toros Brown Swiss de cría y 18 vacas lecheras, hundiéndoles un cuchillo en la base del cráneo y el tórax en repetidas ocasiones. Sin embargo, cuando empezaron a matar a los animales, las mujeres campesinas se abrazaron a las vacas y les preguntó por qué no las mataban también. La guerrilla distribuyó el ganado restante entre los campesinos, quienes los tomaron en custodia para devolverlo a la universidad. Sin embargo, cuando la Policía llegó y comenzó a buscar en las comunidades vecinas, arrestó a los campesinos que tenían ganado en su poder y los llevó a Lima. La Universidad tuvo que interceder para sacarlos de la cárcel.

Los guerrilleros dinamitaron y quemaron las instalaciones, documentos y registros de investigación. Quemaron 2 tractores y destruyeron los bancos de semillas, destruyendo 2.000 muestras acumuladas en más de 16 años de investigación. El ataque también acabó con las instalaciones para elaborar queso y vino. Los daños fueron aproximadamente de US\$ 2,2 millones (Taylor 1983, 21).

La noticia del atentado contra Allpachaka provocó una conmoción en Huamanga. La comunidad universitaria creía que Sendero nunca se atrevería a atacarla, porque el partido había defendido siempre los espacios democráticos dentro de la Universidad. Fue forjadora de revolucionarios. El rumor en la ciudad era que “Sendero realmente ha metido la pata esta vez”. La Universidad organizó una caravana de autobuses, camiones y otros vehículos, llenos de profesores, estudiantes y trabajadores para visitar la granja. El rector de la universidad, ingeniero agrónomo Enrique Moya, que había sido crucial en el inicio del programa CCC, propuso reconstruir Allpachaka, reparar los daños y ponerla en de nuevo en funcionamiento. Por primera vez, Sendero rompió su voto de silencio y detuvo los vehículos para explicar por qué había destruido el centro. Tres cuadros armados detuvieron los buses en el camino a Allpachaka e informaron a los estudiantes que la Universidad de Huamanga podría continuar con su labor en Allpachaka, pero tendría que “cambiar su conducta”. Dieron un plazo de 3 meses para producir resultados.

Sin embargo, pocas semanas después del incidente, la opinión pública de Huamanga pasó de rechazar a justificar el ataque. Sendero y sus

simpatizantes citaron los cambios sociales producidos por la existencia del programa, que la producción de queso y vino terminaba en las mesas de la clase media de la ciudad y que no habían resultados efectivos en la investigación. Sendero también alcanzó su pico de popularidad durante la segunda mitad de 1982, marcada por la masiva concurrencia al funeral de la joven comandante guerrillera Edith Lagos.

Mientras tanto, Sendero Luminoso adoptaba medidas en las provincias del sur de Ayacucho. Poco después del ataque, 2.000 campesinos de las comunidades de todo el valle del río Pampas acudieron a Allpachaka. Con 100 yuntas de bueyes, los campesinos araron y sembraron el campo comunal. El conflicto armado se intensificó con la intervención del Ejército, unos meses más tarde. Las comunidades nunca cosecharon los cultivos. Sendero también trajo 200 cabezas de ovejas liberadas de los vecinos de Huancasancos, y las distribuyó entre las comunidades del río Pampas. El punto culminante fue una fiesta en la que los guerrilleros mataron 6 toros y distribuyeron la carne de manera equitativa a cada hombre, mujer y niño. “Ellos anunciaron que habían establecido el Nuevo Estado del Perú, que se desarrollaría de tal modo que los campesinos serían autosuficientes”, escribió Billie Jean Isbell, antropóloga que reconstruyó los hechos a partir de conversaciones con los campesinos realizadas varios años más tarde. SL también distribuyó vino tinto traído de la costa, o más probablemente, tomado de los almacenes de Allpachaka, ya que los viñedos de la estación experimental Huayapampa usaban Allpachaka para añejar vino (Isbell 1988: 10).

Aunque Sendero condenó la invasión capitalista a través de la estación experimental de Allpachaka y los esfuerzos del CCC, resultó incapaz de desarrollar una alternativa viable para las comunidades locales. Isbell señaló que los cuadros desnaturalizaron completamente el sistema agrario andino, tratando de forzar cultivos colectivos entre los campesinos de Chuschi. “[Los] organizadores de la insurgencia había identificado los conflictos adecuados y estereotiparon a los enemigos a fin de lograr el apoyo de los campesinos. Pero fracasaron cuando trataron de imponer una visión idealizada que no tenía bases en la realidad local. Estaban tan mal informados como los planificadores de la Reforma Agraria de Velasco” (Isbell 1988, 11).

Los trabajadores de promoción en Ayacucho también informan que Sendero participó en experimentos similares en esfuerzos comunales agrícolas de gran escala en la parte norte del Ayacucho, alrededor de Huanta.

El 16 de noviembre, una columna de Sendero Luminoso regresó y destruyó lo que quedaba de las instalaciones, incluyendo la escuela bilingüe que habían perdonado en el primer ataque, debido a los ruegos y llantos de mujeres y niños. Esta segunda vez, las comunidades vecinas se mostraron recelosas y Sendero desconfiaba de las comunidades. La orden fue de destrucción completa y masacre. Para reforzar su presencia, Sendero trajo campesinos desde comunidades tan lejanas como Sarhua y Quispillacta, lo que implicaba caminar durante 2-3 días. Esto era parte de la estrategia de Sendero Luminoso para aislar al campo de las influencias del exterior, aumentar la presión sobre Huamanga y otros reductos urbanos y provocar una reacción más fuerte del gobierno de Lima.

Consecuencias

Una interpretación para el ataque a Allpachaka es que la Universidad la dirigió como un “centro de beneficios” para las finanzas de la universidad y tenía muy pocos efectos benéficos directos para las comunidades vecinas. El administrador de la Unidad fue designado por el Departamento de Contabilidad, ante el cual respondía por todas sus decisiones, y no al Programa de Agronomía. El centro ayudaba a la “investigación pura”, pero no tenía mucha influencia en el Programa Académico o el trabajo de extensión comunitaria. Los campesinos no se beneficiaban del programa de mejoramiento, ya que pocos de ellos podían darse el lujo de comprar una Brown Swiss. Sólo en 1989 el Programa de Agricultura realizó investigaciones para mejorar de la cría del ganado nativo.

Otros piensan que Sendero atacó Allpachaka simplemente porque representaba una alternativa real para el desarrollo regional. Sin embargo, era más bien el símbolo del tipo de desarrollo que los profesores universitarios y la clase media de Huamanga querían para la región, impulsado por la tecnología, por expertos con educación universitaria y financiamiento del gobierno. Un efecto colateral del ataque a Allpachaka fue que todos los pequeños

propietarios abandonaron la región, concentrándose principalmente en la provincia de Andahuaylas (Apurímac). Estos eran los principales beneficiarios del trabajo de extensión, la mejora del rendimiento de la papa y del engorde de ganado.



Al igual que SL no tolera competidores en el campo Ayacucho, que más tarde se meta cooperativas en Puno. TAFOS / Ayaviri, 1991.

Las verdaderas razones del ataque fueron dos. El valor estratégico militar de Allpachaka hizo que Sendero Luminoso quisiera limpiar la zona de las influencias externas. Sendero Luminoso había realizado 10 años de trabajo de base en el campo. Su obsesiva concentración en los aspectos militares hizo que no estuviera dispuesto a permitir otros jugadores en el juego. Sendero también entró en una fase en la que quería escalar el conflicto, basándose en las Fuerzas Armadas (Gorriti 1990, 278-283).

El ataque también emitió un mensaje político a la Universidad de Huamanga, para aquellos que no tenían voluntad o la convicción para figurar en la revolución de Sendero Luminoso. El núcleo de una opción política centrada en Moya como rector y que abarcaba a Izquierda Unida, los independientes y una opción técnica-productiva se vio bloqueado y desmoralizado para desarrollar una respuesta coherente a la insurgencia senderista. A pesar de haber ganado las escaramuzas administrativas por el

control de la universidad, Sendero reclamó el control sobre otras esferas y vetó la presencia de otros.

El incidente de Allpachaka indicativo otros factores. El trabajo de desarrollo, especialmente los enfoques más tradicionales que implican transferencias directas de tecnología e investigación, abría divisiones locales. Con frecuencia, la investigación pura parece ser más valiosa para los intereses internacionales que para los campesinos locales. La investigación tuvo más éxito en establecer el prestigio de la Universidad y sus profesores, tanto a nivel nacional como en el extranjero, que en resultados de rendimiento para las comunidades campesinas. Al mismo tiempo, el flujo de caja resultante de la investigación (mano de obra contratada, servicios y otros pagos) tuvo un impacto en la empobrecida economía local. En 20 años, la universidad fracasó en crear un programa de desarrollo regional. A pesar de los esfuerzos concertados para adecuar la tecnología a las condiciones locales (cría de ganado, pastizales y cultivos nativos), la Universidad tuvo serios problemas para poner estos resultados a disposición de las comunidades. No hubo concordancia entre la propuesta técnica y las comunidades. Ni la CCC, ni la universidad ni los otros centros de Ayacucho (mucho menos el Estado) pudieron encontrar una estrategia de desarrollo para la región.

Una vez bajo el comando militar directo -a partir de enero de 1983- la reacción de las OAB fue de replegar su presencia al interior de la provincia de Huamanga. La mayoría de ellas se replegaron a zonas a las que Sendero no tenía una prioridad de funcionamiento. En segundo lugar, el énfasis pasó a los programas técnicos y se alejó del desarrollo de organizaciones y liderazgos. En comparación con otras regiones, como Cusco, Puno o Piura, las OAB recién llegaban a Ayacucho. Los centros no iniciaron programas hasta fines de los '70, cuando Sendero ya había sentado las bases para la insurrección. Aunque algunos programas gubernamentales y de la Universidad habían traído algunas innovaciones, tenían alcance limitado.

En su nueva y reducida escala, las OAB no parecían tener problemas serios con sus socios locales del campo. De hecho, el repliegue corrigió la dispersión de esfuerzos de varios centros, que trataban de cubrir inmensos

territorios. El problema era cómo llegar y mantener bases de operaciones urbanas, que podían ser objetivos de sabotajes o ataques con bombas. Todos los grandes centros (CEDAP, TADEPA, IER Arguedas) recibieron amenazas, porque representaban una opción de izquierda para el gobierno municipal o regional. Los centros y miembros del personal también tenían un rol en el movimiento popular de Huamanga, en especial la Federación Agraria Departamental de Ayacucho (FADA), afiliada a la Confederación Nacional Agraria.

Una de las consecuencias fatales del repliegue fue el abandono del trabajo de organización y promoción en el valle del Apurímac, donde había el germen de una economía moderna, orientada a la exportación, y de nuevas organizaciones campesinas. Las prioridades de Sendero y, más tarde, de los militares, impidieron cualquier presencia de forasteros.

La única excepción al repliegue fue la CCC. Mantuvo una presencia en la vertiente norte del valle del río Pampas. Escapó a las represalias debido a que la institución recibió la supervisión de la Universidad y porque la mayoría del personal era local. Las otras OAB tienen financiamiento externo y escalas superiores de pago, mientras que el CCC trabajaba con sueldos de nivel universitario. Uno de los inconvenientes de los esfuerzos de la CCC es que su personal no tenía una visión regional o nacional y terminó desconociendo el empeoramiento de las condiciones.

El CCC aceptó el reto “metodológico” de continuar su labor en la cuenca del río Pampas. Ellos estaban atrapados todavía en el problema de cómo mantener presencia en las comunidades, cuando realizar cursos, cuándo y cómo proporcionar insumos y otros recursos a las comunidades. Sin embargo, la conclusión más sorprendente del trabajo de este centro es su capacidad para amoldarse a las posibilidades de sus socios locales, aceptando métodos y procedimientos que expusieran a las comunidades al menor riesgo posible.

Sin embargo, los centros tardaron en darse cuenta de los problemas y del potencial de los campesinos de las comunidades de Ayacucho. Una gran parte de la élite ayacuchana en la Universidad y los centros subestimó la capacidad de las comunidades campesinas para resistir los embates de la

violencia. No fue sino hasta después de 1985 que la mayoría de centros e investigadores despertaron ante la resiliencia de las comunidades campesinas. La mayoría de centros no se dieron cuenta de que había otras necesidades que surgían en estas circunstancias. La guerra estaba dando lugar a una recomposición de las unidades productivas familiares debido a la pérdida de los integrantes masculinos, la descapitalización y pérdida de insumos y herramientas de trabajo, los procesos migratorios y la falta de comunicación con el interior.

Sorprendentemente, las comunidades campesinas estaban dispuestas a aceptar los riesgos de unirse a los programas de desarrollo rural. Durante 1986-1988, una ventana de oportunidades para romper la espiral de violencia, los campesinos hicieron fila para recibir créditos del Banco Agrario y marcharse con tractores. A mediados de 1989, los campesinos se presentaron en las puertas de las OAB con solicitudes colectivas para reiniciar los contactos con los programas de desarrollo.

Sin embargo, puede haber un componente de autoengaño en los esfuerzos de los centros para continuar con su trabajo, a pesar de las probabilidades en su contra. Una manifestación de esto se puede encontrar en un texto de 300 páginas publicado en una conferencia sobre proyectos de desarrollo en Ayacucho, que tuvo lugar en octubre de 1987 (PRATEC, 1988). Es cierto que un evento técnico, fuertemente influenciado por un grupo de expertos que rescatan y sistematizan métodos agrícolas nativos, sólo podía tener una discusión mínima sobre cómo 8 años de violencia han impactado en los socios locales, las instituciones y los métodos de trabajo. La impresión es que la violencia es una batalla entre Sendero y el gobierno, y que tiene poco que ver con quienes no han tomado partido.

En 1988, diez centros de Ayacucho crearon un órgano de coordinación, el Comité Interinstitucional para el Desarrollo Regional de Ayacucho (CIDRA) para tratar de no pisar los pies de los demás y de trabajar con las instituciones gubernamentales. Este intento de centralizar la coordinación y la información llegó sorprendentemente tarde en el proceso de alterar la dinámica de la violencia.

Cuando en 1989 las OAB nacionales finalmente despertaron con el problema de que la violencia iba a ser un ingrediente constante en su trabajo de campo, una primera reacción fue plantear a Ayacucho como un caso que podría mostrar cómo continuar con el desarrollo en circunstancias extremas. Ellas no encontraron el ambiente típico del resto del país. Los 9 años de conflicto en Ayacucho han cerrado los espacios sociales más amplios, en que los centros pueden ejercer influencia, y las reservas civiles se agotaron. La violencia, los asesinatos y las amenazas han anulado los gobiernos municipales y los espacios comunales.

Las OAB de Ayacucho tenían varias ventajas para mantenerse en el campo. Se ha producido una abundancia de oferta de agrónomos, antropólogos y otros profesionales graduados de la Universidad de Huamanga. La Universidad fue la piedra fundacional de la conciencia regional. Los miembros del personal tienen relaciones estrechas con la comunidad, a través de una serie de mecanismos que son extremadamente importantes en la Sierra. Estos incluyen el parentesco, el compadrazgo, los lazos de sangre.

Durante el período iniciado en octubre de 1989 durante las campañas electorales municipales y nacionales, Sendero Luminoso inició una fase de acoso intenso a todos los núcleos de organización posibles. Los militares respondieron, sobre todo después de las elecciones generales. La ciudad perdió un gran bloque de sus clases medias y profesionales, que huyeron masivamente a Lima. El campo se deterioró hasta un estado de agitación y caos, con grupos parapoliciales saqueando comunidades vecinas. Los campesinos desplazados del campo inundaron los ya desbordados servicios urbanos. Las OAB finalmente tuvieron que retirarse del campo, aprovechando la oportunidad para revisar y criticar su trabajo de campo y programas. En septiembre de 1989, un grupo de trabajadores de CEDEP fueron detenidos por una columna senderista, que destruyó su vehículo como advertencia para permanecer fuera del campo durante el período de elecciones municipales.

A pesar de estas adversidades y obstáculos, 17 centros se mantenían en Ayacucho a mediados de 1990 y han ganado un lugar junto a la Universidad como pilares de la sociedad regional. Los centros han mostrado una notable

perseverancia frente a desventajas abrumadoras. Siguen siendo un recurso valioso para la reconstrucción de una comunidad devastada, como conjuntos de personal capacitado y experimentado, y como centros de intercambio de contactos con las comunidades rurales. Esta investigación critica aspectos de sus operaciones y sus métodos, pero no puede minimizar su dedicación y valentía.

Hay problemas estructurales y globales evidentes para hacer frente a los problemas de Ayacucho y del desarrollo rural. La Universidad tuvo que defenderse de la desconfianza y las agresiones del gobierno de Lima. **A pesar de la creciente atención sobre la difícil situación de Ayacucho, no hubo un esfuerzo concertado por parte del gobierno de Lima o de otras instituciones civiles para reforzar los esfuerzos locales.** Cuando los esfuerzos a medias para revertir la situación empezaron a fallar, las fuerzas nacionales intentaron ignorar los signos de fracaso. Una respuesta nacional a un problema regional es la oportunidad para señalar unos cuantos pasos de los problemas y examinarlos más desapasionadamente, recurrir a recursos y perspectivas externas para obtener una comprensión fresca de los factores cruciales.

Por último, la introducción de un Comando Político-Militar en la zona de emergencia de Ayacucho significó que la Universidad y la comunidad tienen que lidiar con una contraparte que desafía los medios tradicionales de negociación. El Comando Político-Militar era un comodín en las intrincadas relaciones de una sociedad provinciana cerrada. Cada año era una ruleta rusa sobre qué tipo de jefe sería nombrado por el gobierno. Para todos los efectos, el Comandante era un príncipe temporal en un reino bajo el asedio de los bárbaros dialécticos. Cada regente era sumamente ignorante respecto de cómo funcionaba la sociedad de Huamanga, y mucho menos de las comunidades rurales de Ayacucho.

PUNO: INSTITUTO DE EDUCACIÓN RURAL WAQRANI

Levantándose de las cenizas

Desde la década de 1980, Sendero Luminoso y los observadores pusieron sus ojos en el departamento de Puno, en la meseta sur cercana al Lago Titicaca, como el escenario probable de un “segundo Ayacucho”. La región es pobre, rural, atrasada y económicamente deprimida. Sequías e inundaciones cíclicas registradas durante décadas y siglos han afectado la posibilidad de una mejora económica. La explotación sobre la base de raza, cultura y clase era parte del sistema de tenencia de la tierra. La Reforma Agraria concentró la tierra en menos manos que el sistema de haciendas. La minería y la colonización de la selva, dos alternativas para el desarrollo regional, no llegaron a materializarse como opciones viables, siendo fuentes de explotación. El potencial de polarización era alto (IDL 1989d).

En Puno, la presencia de más de 100 proyectos de desarrollo y asistencia, incluyendo agencias no gubernamentales, proyectos bilaterales y multilaterales, y programas estatales, ha tenido un impacto especial. Esta financiación alcanzó a todos, desde las clases altas hasta las comunidades campesinas. Sin embargo, la mayoría de recursos, sin embargo, fueron canalizados a cooperativas ineficientes antes que a los campesinos de las tierras pobres. Algunos de estos programas surgieron de labores de socorro, tanto estatales como privadas, debidas a los desastres naturales, que alteraron las relaciones entre los programas y sus beneficiarios. Además, una mayor conciencia de que la violencia subversiva se extendía por los Andes y las consecuencias de la crisis de la deuda de América Latina aumentaron la presencia de programas de desarrollo rural y urbano en la zona.

Para entender mejor la dinámica única de Puno y sus lecciones en la supervivencia bajo duras condiciones, debemos echar un vistazo a la presencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica del sur andino tiene un enfoque regional, que abarca las diócesis de Juli (zona de habla aymara en el Lago

Titicaca), Puno, Ayaviri y Sicuani (Cusco). Originalmente, las diócesis de Cusco y Chuquibambilla (Abancay) pertenecían a la coordinación regional, pero se separaron del cuerpo de coordinación por razones prácticas y eclesiásticas.

La Teología de la Liberación y el grupo de clérigos y laicos reunidos en torno al padre Gustavo Gutiérrez influyeron significativamente en la iglesia regional. Una apertura a nuevas perspectivas teológicas, pastorales y políticas se debió en parte a la presencia de clérigos extranjeros y de peruanos formados en el extranjero. La iglesia del sur andino se convirtió en un laboratorio regional para el ministerio social de la iglesia progresista del Perú.

La aprobación de la jerarquía de la iglesia a una opción preferencial por los pobres dio lugar a un enfoque en favor de los campesinos y tuvo variados efectos sobre el desarrollo político y rural de la región. Significó que uno de los pilares tradicionales del statu quo del Perú dio todo su apoyo a las organizaciones de base, sus políticas y perspectivas. Los obispos y preladados, con toda la parafernalia de la autoridad, cambiaron el equilibrio de poder en el campo. Esta estrategia puso a la Iglesia y sus grupos asociados –la Federación Campesina y aliados políticos- en conflicto directo con sólidos intereses y grupos de poder regionales: cooperativas agrarias, sociedades mercantiles – con intereses en el contrabando e incluso en el narcotráfico- y con fuerzas nacionales: el gobierno de Lima, los partidos gobernantes y las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, este cambio y su implementación no se dieron por decreto eclesiástico. Por más de dos décadas, la Iglesia del sur andino mostró una capacidad de crítica y análisis, tanto de su propio desempeño como del desempeño de otros actores sociales, con fuerte énfasis en los aspectos morales, éticos y culturales. Estos príncipes de la Iglesia y sus agentes laicos poseían más autoridad moral que cualquier gobierno civil de la zona. Crearon un espacio donde los participantes extranjeros y peruanos, laicos y clérigos, con y sin perspectivas políticas, pastorales y temporales podían interactuar. Este “espacio de pensamiento” incluía instituciones permanentes y reuniones periódicas. El enfoque también requería de planes de corto, mediano y largo plazo, con coordinaciones regulares y planificación estratégica. Dio a la región

un lenguaje común, un código para comunicarse entre sí. El método de trabajo de la Iglesia afectó su misión pastoral y sus programas de acción social, que, para todos los efectos, eran indistinguibles de las OAB no eclesíásticas de la región. El enfoque también afectó a estas últimas, porque aprendieron de la experiencia e interacción de la Iglesia.

Otra consecuencia de esta estrategia fue la voluntad de incorporar una dimensión cultural en la reflexión y la praxis. La presencia de tres (o más) culturas –aymara, quechua y criolla-española, más los extranjeros de América del Norte y Europa- coexistiendo en la misma región hizo que los grupos participantes examinaran su participación para encontrar sesgos y prejuicios. La Iglesia del sur andino también trató de incorporar a los campesinos a la estructura de la iglesia, como bautistas, catequistas y animadores pastorales. La Iglesia tomó esta medida para cubrir la escasez de clero para efectuar los ritos, pero también con el objetivo declarado de incorporar a los campesinos como participantes en el diálogo, en pie de igualdad. Tuvo el efecto secundario de desarrollar generaciones de dirigentes locales. Esto se hace evidente al examinar las listas de colaboradores de los centros, de dirigentes de la Federación Campesina y las autoridades electas (municipales y regionales).

La estrategia pastoral dio vitalidad a la Iglesia del sur andino, compromiso y capacidad de recuperación frente a situaciones adversas. Durante la cadena 1983-1986 de desastres naturales (sequía e inundaciones), analizó críticamente la labor de socorro. Mediante el uso de alimentos y otras donaciones para establecer tiendas comunales y bancos de semillas, fortaleció las organizaciones locales, en lugar de crear dependencia de la caridad. En 1986, cuando Puno parecía ser un polvorín, sus obispos y prelados intercedieron directamente ante el presidente García, para convencerlo de que una reestructuración de la distribución de la tierra en Puno era requisito previo para pacificar la zona. Una conferencia, llamada “Puno quiere paz” en agosto de 1986, centró la atención nacional en la región, cuando la amenaza de militarización de la región, el aumento de la actividad paramilitar contra la Iglesia y los centros y la cuestión de la tierra estaban a punto de empujar a Puno al abismo (mediados de 1986).

Hemos descrito en detalle el papel de la Iglesia del sur andino debido a que diferencia Puno de Ayacucho, como manifestación religiosa y como respuesta a las condiciones políticas y sociales de la región. La diócesis de Ayacucho era conservadora, tradicionalista en sus prácticas pastorales y litúrgicas, con pocos programas de acción social (específicamente en el modo de la caridad) y lejana de la mayoría campesina de la región. Hubo excepciones individuales que actuaron en la Iglesia de Ayacucho. Después de 1988, un grupo de jesuitas inició un ministerio más sensible en la región.

Otra cuestión que distingue a Puno de Ayacucho es la tierra. Bajo la Reforma Agraria, que afectó a casi 2 millones de hectáreas en Puno, 53 cooperativas recibieron más del 90% de la tierra, mientras que las comunidades campesinas recibieron el 2,5% y los parceleros individuales el 7,5%. Pese a tener la mayoría de las tierras de cultivo, las cooperativas eran ineficientes y corruptas. En 1983, las federaciones campesinas exigían la reestructuración de las cooperativas, para dar a los campesinos hambrientos de tierra, otra oportunidad para las actividades productivas (Rénique 1987 y López 1988).



Las comunidades de Puno se movilizan para tomar el control de las tierras de las cooperativas de tierras. Melchor Lima/TAFOS, 1991, Ayaviri.

A fines de 1985, la cuestión llegó a un punto crítico. La primera toma de tierras se produjo el 4 de noviembre. Las comunidades de Macari y Santa Rosa tomaron 10.500 hectáreas de la ERPS Kunaruna, en la provincia de Melgar. Durante los siguientes cuatro años, otras comunidades campesinas y

pequeños propietarios incautaron, cerca de 400.000 hectáreas. El gobierno de García impulsó una reestructuración de las tierras pertenecientes a las cooperativas. Alegó que había entregado más de 800.000 hectáreas a los campesinos, pero la Federación Campesina respondió que gran parte de la tierra fue entregada a las empresas asociativas, bajo algún disfraz.

Durante el período más álgido de la crisis, 1986-1989, sólo un campesino, murió en enfrentamientos con la Policía, el Ejército o empleados armados de las cooperativas. Teniendo en cuenta el alcance y las metas del movimiento, esto fue un logro increíble y una indicación de que Sendero no hizo incursiones en el movimiento campesino de Puno. El problema de la tierra siguió siendo propenso a los conflictos durante los años siguientes.

Cabeza de playa de Sendero Luminoso en el sur andino

Puno está muy lejos de la Sierra Central, territorio tradicional de Sendero. Debido a su valor estratégico dentro del esquema andino de Sendero Luminoso, el partido mantuvo presencia en la zona desde mediados de la década de 1970. La región Puno es culturalmente distintos de los Andes al otro lado del paso de La Raya, la frontera con el Cusco. Sendero era extraño, un intruso en la política local. Sin embargo, Puno ofrecía varias ventajas para Sendero. Estaba lo más cercano posible del análisis de Sendero sobre una alianza compradora-burocrática en el Estado (PCP 1988, II, 4-5). La asociación de las administraciones de las cooperativas, los intereses laneros de Arequipa y la burocracia estatal regional, sobre todo el Banco Agrario y el Ministerio de Agricultura, cosechaba los beneficios de la lana y la ganadería, mientras que los miembros de las cooperativas y los campesinos se quedaban con el extremo corto del palito. El campo estaba relativamente vacío, con pocos centros urbanos y comunidades campesinos dispersas, situadas por lo general en las peores tierras. Tenía valor estratégico debido a su proximidad con Bolivia, Cusco y Arequipa.

En 1981, las primeras acciones de Sendero incluyeron el ataque contra el IER "Palermo" pero el énfasis estaba en imponer una cruenta justicia contra

los poderes locales y los abigeos. SL comenzó a trabajar en la universidad de Puno, el Instituto Tecnológico y las Escuelas Normales.

En 1986, SL se trasladó a la región en una gran ofensiva, movilizando 2-3 columnas de hasta 50 combatientes armados y llamando a 200 activistas como vanguardia, apoyo logístico y recolectores de información. El campo principal de operación de las columnas guerrilleras fue la provincia de Azángaro y, más tarde, Melgar. La mayoría (60%) de las empresas asociativas se concentraban en esas dos provincias. Aterrorizaron las tierras pobres de la provincia, viviendo en minas abandonadas o refugios de pastores. Las columnas con frecuencia se internaban en las sierras de Cusco, Arequipa o Bolivia (IPA 1990, 281).

En 1986, Sendero Luminoso trató de adelantarse al problema de la tierra al comenzar una serie de “expropiaciones armadas”, obligando a los campesinos a acompañarlos en sus incursiones y saqueos. Durante el período febrero 1986 – abril 1987, más de 100 personas murieron en batallas y escaramuzas, incluyendo policías, activistas de SL, trabajadores de las cooperativas y campesinos. En Azángaro, Sendero logró eliminar las empresas asociativas incluso antes de que el gobierno redistribuyera sus tierras. Hizo estallar la mayoría del material rodante y robó gran parte de los rebaños, distribuyéndolos entre los campesinos pobres. En otras palabras, habían al mismo tiempo tres propuestas para la reestructuración de la tierra en Puno: la de Sendero apoyada en sus armas de fuego, la del gobierno aprista con el apoyo de las cooperativas y, finalmente, la respaldada por la Iglesia del sur andino, la Federación Campesina e Izquierda Unida.

El objetivo de Sendero era provocar la militarización del departamento, que obligaría al gobierno a enviar a las Fuerzas Armadas y polarizaría la política regional. Esto reduciría las capas medias, en las cuales estaba numéricamente y conceptualmente en desventaja.

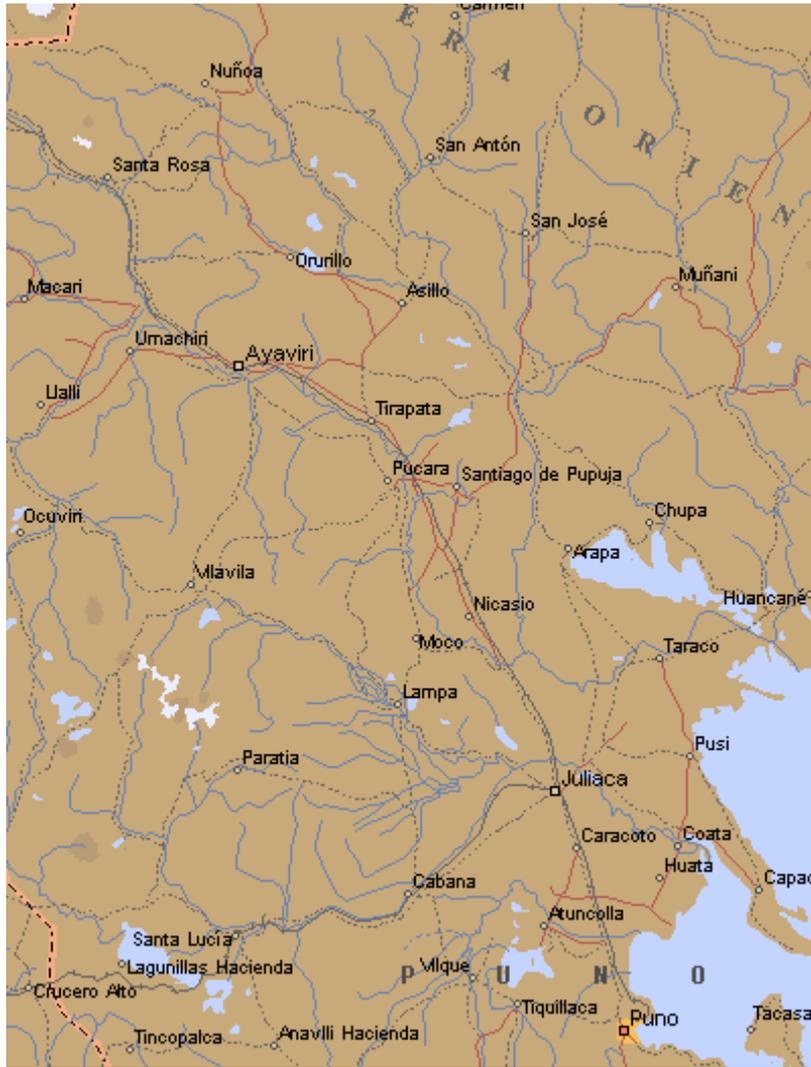
Aunque Sendero sufrió varias derrotas en la región entre 1987 y 1990, se recuperó de las pérdidas y mantuvo la presión sobre la Iglesia del sur andino, la Federación Campesina y los partidos políticos, así como sobre el

gobierno y las cooperativas. Esta era una señal de la importancia estratégica de la región en los planes de Sendero.

El IER Waqrani

Fundado en 1964 como parte de la nueva doctrina social de la Iglesia tras el Concilio Vaticano II, el Instituto de Educación Rural Waqrani era parte del plan pastoral de la Prelatura de Ayaviri. Su sede, ubicada a 11 kilómetros de Ayaviri, tenía 962 hectáreas de tierra, utilizadas para experimentos y demostraciones agrícolas. Tenía viviendas para el personal, oficinas administrativas, aulas, biblioteca y un dormitorio para los campesinos visitantes. En los primeros días, tuvo talleres de carpintería, mecánica y programas de capacitación. Sin embargo, al concentrar sus actividades en los campesinos jóvenes, apartó a éstos de sus comunidades, capacitándolos en destrezas que les permitían migrar más fácilmente.

Entre 1976 y 1979, los hermanos dominicos gestionaron la IER, que se especializó en el trabajo agrícola, y cerraron los talleres vocacionales. Empezaron con un establo de vacas lecheras Brown Swiss, que aún hoy vende leche en Ayaviri, tres veces por semana durante todo el año. Sin embargo, a mediados de la década de los '80 el personal del IER clasificó esta actividad como un mal ejemplo para los campesinos, que probablemente nunca serían capaces de obtener capital o cubrir los costos de operación. El establo necesita atención permanente y fue una de las razones para mantener personal en el sitio.



Mapa de la zona de actividades guerrilleras en Puno, 1984-1990.

En 1979, la IER Waqrani comenzó a salir al campo, siempre considerando a la tierra como el problema central de la agricultura de Puno. Concentró su trabajo en 3 comunidades: Macari, Santa Rosa y Orurillo, en la provincia de Melgar. Brindó apoyo técnico para los cultivos y la ganadería, mejores métodos y asesoramiento en la comercialización, y servicios colaterales. Además, ayudó a analizar la situación política, económica y social, proporcionando información a la que los campesinos no tenían acceso. Paralelamente a la asistencia técnica, los equipos prepararon líderes comunitarios y fortalecieron las organizaciones locales. Sus programas educativos y de capacitación se llevaban a cabo en su sede, o en las escuelas campesinas de las comunidades. El equipo tenía métodos diferenciados para las comunidades-eje y las comunidades-piloto. Las primeras (Macari) tenían su

organización comunal andina tradicional completamente funcional, mientras que las segundas (Orurillo) estaban compuestas principalmente por pequeños propietarios de tierras comunales, con vínculos débiles o inexistentes. Santa Rosa estaba entre las dos.

Esta metodología se conoció en la región como la “estrategia Waqrani”. Puso énfasis en el equipo de trabajo: 6 técnicos, 4 trabajadores sociales, 6 obreros y 5 empleados a tiempo parcial, además del director, administrador y secretario. El IER mantuvo también vínculos con otros 9 centros de investigación y desarrollo en Puno, participando en la elaboración de una propuesta regional de desarrollo.

Sin embargo, en su labor con las comunidades locales, pronto se hizo evidente que ninguna mejora en la agricultura o los métodos de pastoreo podría hacer viables a estas comunidades. El pequeño tamaño de sus tierras les impedía alcanzar niveles razonables de productividad; el volumen y la presión demográfica continuaban afectando los niveles de vida. El equipo del IER comenzó una labor de análisis que demostró que, a pesar de sus limitaciones, las comunidades hacían un mejor uso de la tierra y otros recursos que las empresas asociativas, que monopolizaban las mejores tierras. La única manera de salir de este cuello de botella era una redistribución de tierras en la provincia y el departamento (Vega 1985).

Este análisis tuvo consecuencias enormes para la región, porque las empresas asociativas eran los intereses más poderosamente atrincherados en Puno. El problema de la tierra se convirtió en parte del ministerio social de la Iglesia del sur andino. De hecho, la cuestión de las tierras no hubiera recibido tanta atención política si la Iglesia no la habían apoyado. El equipo del IER también puso la cuestión de la tierra bajo la atención de Izquierda Unida (más precisamente, del Partido Unificado Mariateguista, que es el único partido con una labor eficaz en el campo de Puno). El problema de la tierra también puso al personal del IER en contacto con las Federaciones Campesinas, otras fuerzas políticas y centros. La Federación Unificada de Campesinos del Melgar (FUCAM) solicitó asistencia técnica para la elaboración de una propuesta para redistribuir la tierra en manos de las empresas asociativas. Más tarde, el equipo

del IER Waqrani desarrolló funciones de asesoramiento con la Federación Departamental de Campesinos. Esta era una función de gran visibilidad; el personal estuvo presente en la mayoría de las asambleas y eventos de los siguientes cinco años.

A mediados de 1988, el IER comenzó un programa experimental en 3 distritos de la provincia de Melgar, con 8 comunidades, cada una con un promedio de 100 familias. La idea era levantar la productividad de las empresas comunales, sin asistencialismo. Otras federaciones agrarias zonales, distritales y provinciales utilizarían estos ejemplos para fortalecer sus propias unidades comunales. El equipo quería proporcionar tecnología y capacidad de gestión que permitiera a las empresas comunales usar productivamente las tierras que habían tomado o recibido del gobierno. Este esfuerzo fue un desafío político a la táctica guerrillera de Sendero en la zona, ya que Sendero había reclamado ya participar en las demandas campesinas.

Sin embargo, este compromiso mutuo de redistribución de la tierra tuvo sus problemas. Había una tensión implícita entre la institución patrocinadora (la Prelatura), el personal del IER y las demás organizaciones interesadas, a pesar de que compartían criterios, métodos y objetivos. La Prelatura (y la Iglesia del sur andino) estaba dispuesta a instigar el cambio social, pero no pudo superar su propia misión como organización eclesiástica. Los otros componentes se dirigían en un sentido más político, a veces radicalizando sus demandas por razones extemporáneas. El director de Waqrani, Ricardo Vega, estaba en el consejo pastoral, un cargo electivo, por lo que había un aporte directo de la Prelatura en el diseño de esta estrategia.

Tal vez el aspecto más llamativo de la “estrategia Waqrani” fue su perspectiva regional y de divulgación. En muchos sentidos, era el centro operativo, el buque insignia de la estrategia del sur andino. Tenía la voluntad política y la confianza campesina para abrir el camino.

Este planteamiento, lógicamente, se encontró con la oposición de las cooperativas, el partido de gobierno y las fuerzas de seguridad. Durante el hirviente período anterior y durante el movimiento de apropiación de tierras, la Policía detuvo y registró varias veces los vehículos de Waqrani. Cuando el

personal del IER se estacionaba en la ciudad, les desinflaban los neumáticos. Vega y otros miembros del personal fueron detenidos por breves períodos. El jefe de la policía antiterrorista de Puno lo llamó para discutir sobre sus actividades. Las empresas cooperativas de Puno acusaron a Waqrani, a su personal y al PUM de ser el brazo legal de Sendero.



Huelga regional en protesta por los aumentos de precios y la política agrícola: bloqueo de la vía férrea. Melchor Lima/TAFOS, 1989, Ayaviri, Puno.

El equipo de Waqrani tuvo que tomar medidas de precaución contra las fuerzas de seguridad, los trabajadores de las cooperativas y Sendero. Estas medidas se iniciaron con labores de inteligencia, para averiguar dónde estaban activas las columnas guerrilleras y las unidades de la policía antiterrorista. A principios de 1989, el personal de Waqrani había retirado algunos equipos no esenciales, archivos y otros elementos de la granja experimental. Los funcionarios de alto rango ya no dormían en la granja, sino en la ciudad. Además, los ronderos locales vigilaban los alrededores de la granja experimental para alertar a los trabajadores acerca de la presencia de desconocidos.

El ataque

El 21 de mayo, a las 7:00 pm, un camión se detuvo en la estación experimental Waqrani. Unos 20 guerrilleros saltaron del coche y redujeron a los trabajadores. Los líderes de la columna preguntó por los 3 líderes del personal,

pero ellos ya se habían ido a la ciudad. La guerrilla hizo un trabajo rápido en las instalaciones, destruyendo las instalaciones de enseñanza y instalaciones administrativas y equipos como tractores, vehículos y el generador. Sin embargo, no tocó los establos, el ganado o las viviendas de los trabajadores. Fue un golpe al cerebro y a las fuerzas de movilización del equipo Waqrani.

Los guerrilleros habían comenzado sus incursiones el 13 de mayo en Muñani, en el extremo este de la provincia de Azángaro. El 19 de mayo, asesinaron al alcalde de Azángaro, Marcelino Pachirri. Había surgido como un nuevo tipo de líder popular, jugando un papel destacado en las huelgas agrarias de setiembre de 1988 y marzo de 1989. También extendió los servicios municipales a la población rural. El equipo de Waqrani y la red de inteligencia Iglesia-campesinos pensaron que éste era el objetivo de las actividades de la columna, y bajaron sus defensas. Sendero también llevó a cabo una táctica de distracción enviando un camión a través del Cusco, lo que hizo parecer que la columna había huido de la región.

Después de golpear a la IER Waqrani, la columna se dirigió esa misma noche a la estación experimental de la Universidad Nacional del Altiplano, en San Juan de Chuquibambilla. Hizo estallar 5 tractores y otras instalaciones. A continuación, fue a Macari, buque insignia de la comunidad del programa Waqrani. Asesinó al teniente gobernador y a un juez de paz. Tras bordear el lago Langui-Layo, en la provincia de Canas (Cusco), regresó de nuevo. Atacó dos estaciones experimentales a gran altura en La Raya, el 25 de mayo. La estación dirigida por IVITA, un programa de la Universidad de San Marcos, sufrió graves daños. La granja de la Universidad Nacional de Cusco sufrió daños más ligeros. A continuación, giró hacia la parte oriental de la provincia de Melgar y puso fin a su incursión en Azángaro.

La unidad de la guerrilla cubrió 700 kilómetros en 16 días, lanzó un promedio de un ataque diario y asesinó a 7 personas. Una segunda unidad mantuvo la presión en Azángaro durante ese lapso. "Sendero ha mostrado un apoyo logístico que nunca sospechamos", dijo un veterano director de una OAB. Estaban activos, pero disimulados, construyendo las bases necesarias antes de lanzarse a fases superiores. Durante todo este período, las fuerzas de

seguridad no hicieron un solo intento por interceptar la columna. 8 camiones cargados con tropas del Ejército llegaron a Azángaro y cometieron abusos contra la población local. Otra unidad tomó posición en Ayaviri.

El mensaje de Sendero Luminoso en Waqrani era que la Iglesia no debía meter las narices en la política, el desarrollo y la organización popular o prestar apoyo a otras fuerzas, como el PUM. Waqrani fue atacada debido a su capacidad de educación y reflexión, porque fue capaz de generar respuestas a las cambiantes condiciones de la provincia de Melgar y el departamento de Puno.

Consecuencias

El 25º aniversario de la IER Waqrani tuvo lugar el 15 de junio de 1989. Los planes habían previsto inicialmente una gran celebración, que renovaría el compromiso entre las comunidades campesinas, la Prelatura, la Iglesia del sur andino y los grupos regionales. Después del ataque, hubo serias dudas respecto a realizar esto. La columna guerrillera se encontraba todavía en la zona. Estaba claro que la movilidad de Sendero no debía ser subestimada. La prelatura y el personal del IER decidieron reducir la celebración a un solo día, para que las delegaciones visitantes no tuvieran que viajar de noche.

El primer punto de reunión fue la propia estación de la IER Waqrani, donde los visitantes podrían inspeccionar los daños y perjuicios. Una exposición fotográfica mostró un dramático relato del “antes” y el “después” del ataque y su rol en la creación de un “camino de la comunidad campesina”. La ceremonia fue breve. A pesar de la música y la reunión de los aliados del sur andino, el ambiente era tenso. Una vez que los visitantes subieron a sus bicicletas, motocicletas, automóviles, camiones y autobuses para regresar a Ayaviri –el momento más peligroso para un ataque senderista- el velo del miedo se levantó. El viaje de regreso, envuelto en nubes de polvo del camino levantadas por decenas de vehículos, fue festivo. De vuelta en Ayaviri, los visitantes movilizados se reunieron con los recién llegados y con gente del pueblo para marchar a la plaza principal. En los pasos de la iglesia, monseñor

Francisco d'Alteroche celebró misa, acompañado por sus compañeros obispos y el clero del sur andino. La mayoría de las delegaciones se dirigieron a casa a las 4:00 pm. Los campesinos continuaron celebrando hasta bien entrada la noche.

Hay una obvia comparación con la caravana universitaria tras el ataque a Allpachaka y la sensación de derrota en Ayacucho, pero hay otros puntos dignos de mención. **El ataque a Waqrani generó una respuesta política de masas.** No fue sólo un problema de metodología o de apariencias. El temor de que Sendero Luminoso intentara anular a la oposición jugó un papel importante para vencer al miedo. El ataque generó una respuesta regional que se extendió de Cusco a Juli, con componentes nacionales. Desde Lima llegó la Conferencia Episcopal Peruana y el ala progresista de la Iglesia, Izquierda Unida, legisladores, defensores de derechos humanos, representantes de la ANC y periodistas de medios impresos y electrónicos. La celebración del aniversario fue un gesto simbólico basado en la importancia de la Iglesia y del movimiento popular en la región. El lema que para el evento fue “la IER Waqrani se levantará de las cenizas”.

Sin embargo, el clima de celebración marcó un hito en el período agotador y tenso de 1985-1990, para la Prelatura de Ayaviri, su brazo secular y las otras organizaciones que giraban en torno a ellos. En los días siguientes, la Prelatura informó al personal del IER que el programa iba a ser interrumpido. Estaba librando una batalla de varios frentes, en Lima, en Puno, dentro de la iglesia y entre otros intereses a favor y en contra de la opción elegida por la Iglesia del sur andino. La presión venía desde varias direcciones. La iglesia de Lima y varias órdenes religiosas se comprometieron a trabajar en el Altiplano y las facciones dentro de la Prelatura tuvieron un éxito inicial al forzar la retirada. Por otro lado, el ala progresista de la Iglesia trató de mantener abierta la perspectiva de una campaña activa y plenamente equipada en la Prelatura.

Una primera crítica frente a la “estrategia Waqrani” fue la estrecha asociación del liderazgo del equipo al PUM. Las tácticas desafiantes favorecidas por este partido, al igual que la toma de tierras y las huelgas agrarias, parecían ir contra los intereses de la Iglesia. Esta conexión fue

expuesta en los medios de comunicación de Lima, sobre todo por un programa de noticias de difusión nacional. Monseñor d'Alteroche sintió que estaba siendo arrastrado hacia el juego del PUM. Sin embargo, como varios sacerdotes señalaron, la Iglesia del sur andino planteó primero su opción campesina y luego convocó aliados. IU fue la única fuerza política que respondió.

Una de las principales preocupaciones de la Prelatura y del resto de la Iglesia del sur andino fue que, durante todo el período de conmoción, los representantes locales del gobierno de Lima y las fuerzas de seguridad parecían haber decidido permanecer inertes ante la amenaza senderista. Parecía que el gobierno estaba satisfecho de dejar que el bloque campesinos-Iglesia del sur andino y la máquina de guerra de Sendero lucharan por el control político de la región, para luego pasar a recoger los restos. Había un sentimiento de resignación en las fuerzas enfrentadas contra Sendero, como si fuera inevitable que la lucha degenerase en un enfrentamiento armado entre el Ejército y la guerrilla. La toma de tierras, la represión policial, el acoso senderista y la profundización de la crisis económica se abalanzaron sobre las organizaciones de base, especialmente las campesinas.

Esta incertidumbre se combinó con la falta de un horizonte político que permitiera a los líderes regionales tomar decisiones racionales sobre el futuro. Este ambiente de pesimismo y el cansancio afectaron fuertemente la actitud de la Prelatura. En un momento dado, los sacerdotes hablaban de la necesidad de prepararse para una "Iglesia de las catacumbas", remontándose a la persecución de los primeros cristianos en la época romana. Hubo una fuerte inclinación a jugar "sin riesgos", descartando las iniciativas arriesgadas para consolidar los logros de los últimos 3 años. Las comunidades campesinas necesitaban tiempo y recursos para poner sus nuevas tierras en producción, fortalecer sus organizaciones y hacer un balance de las opciones disponibles en el futuro.

Hubo también una cuestión ética que persiguió a los patrocinadores del programa en la Iglesia. "Yo no voy a ser responsable de la pérdida de siete vidas", dijo monseñor d'Alteroche. "Waqrani pone en riesgo la vida de las personas con las que trabajo. No debemos multiplicar los riesgos en este

momento". Mantener a Waqrani en la zona provocaría que Sendero atacara a otras instituciones y a los propios campesinos.

Monseñor d'Alteroche también mencionó que el IER Waqrani era un programa costoso de mantener, con altos salarios pagados a los técnicos, principalmente los no provenientes de Ayaviri, y con constante necesidad de apoyo administrativo, desde la alimentación de las vacas hasta mantener con vida al personal. La Prelatura podía gastar ese mismo dinero en otras misiones pastorales, con los mineros de la selva, o en los centros urbanos, proporcionando enseñanza a los niños o una mejor atención a los ancianos. Estas críticas de la fórmula Waqrani vinieron después del ataque. Los demás agentes pastorales tenían la sensación de haber sido abandonados por la atención que se concedió al equipo de Waqrani. Monseñor dijo varias veces que Waqrani no era el buque insignia de la iglesia de Ayaviri, no era su expresión exclusiva y más característica. "¿Por qué quemar toda la estructura para preservar el granero?", se preguntó.

Los contraargumentos del personal de Waqrani fueron que reducir o interrumpir la presencia de la Iglesia en el campo significaría enormes pérdidas. En un momento crucial, la Iglesia se retiraba. Los campesinos necesitaban apoyo y refugio. La relación con los campesinos había sido construida a través de contactos cara a cara y años de trabajo. Cuando se presentaron los informes de las organizaciones de "primera línea" respecto a que Sendero exigía la renuncia de los presidentes de las comunidades, empresas comunales y federaciones zonales, la Prelatura de Ayaviri no debía enviar señales de dar marcha atrás.

Las perspectivas para los siguientes 12 meses, no eran buenas. Las elecciones municipales, regionales, generales y presidenciales iban a tener lugar entre noviembre de 1989 y junio de 1990, proporcionando una situación en la que Sendero acosaría activamente a sus adversarios políticos. La Prelatura decidió continuar la IER Waqrani con un programa reducido, y despidió al resto del equipo del IER. A pesar de esta retirada táctica, Sendero Luminoso mantuvo una presión constante sobre el trabajo pastoral. Incluso empezó a cazar a los reclutas potenciales de los trabajos juveniles de la

Iglesia. Los jóvenes líderes laicos fueron capturados y llevados a “escuelas populares” y a reuniones semanales con cuadros.

Una de las reacciones más interesantes provino de los propios campesinos. La FUCAM dio un ultimátum: si la Iglesia decidía no continuar con los esfuerzos en Waqrani, la Federación exigiría que todos los bienes y activos, incluyendo los terrenos y vehículos, les fueran entregados. Los organismos donantes habían asignado los fondos para beneficio de los campesinos, por lo que ellos debían ser los destinatarios finales si el programa no continuaba. El FCDDP también exigió que el compromiso de la Iglesia continuara, aunque sus dirigentes eran conscientes de que debería haber cambios para adaptarse a las nuevas condiciones. La FUCAM también ofreció proporcionar terrenos para la sede de Waqrani dentro de los límites de Ayaviri. Este movimiento habría reducido considerablemente el riesgo de acoso senderista. Los líderes se ofrecieron a proporcionar mano de obra para reconstruir la estación experimental.

Los campesinos hicieron ajustes imaginativos ante la situación. Por ejemplo, los concejos municipales distritales ya no se reunían en los municipios. Las sesiones tenían lugar en los campos, a la hora del almuerzo, donde se mezclaban con las costumbres campesinas. En lugar de individualizar los liderazgos, las organizaciones de base, como las organizaciones comunales o federaciones distritales, asumieron liderazgos colectivos. Cuando en diciembre Sendero ordenó a los campesinos de la provincia de Melgar abandonar sus empresas comunales y distribuir el ganado entre sus miembros, ellos siguieron las instrucciones. Sin embargo, los campesinos mantuvieron una contabilidad paralela, en la que los rebaños y cultivos comunales, supuestamente distribuidos a personas, permanecían como “cooperativas familiares”. Las federaciones distritales, provinciales y departamentales crearon complejos sistemas de inteligencia e intercambio de información, vitales para mantenerse fuera del alcance de los líderes de Sendero Luminoso. Los campesinos llamaban a estos métodos la “táctica del vacío”; Sendero no podía matar o destruir lo que no podía encontrar. Hay otros ejemplos de estas estrategias a lo largo de la Sierra, una expresión andina de resistencia pasiva.

El Instituto de Pastoral Andina organizó una primera “Semana Social” del sur andino, en Puno. El Instituto también publicó los documentos y la discusión posterior (IPA 1990).

Una nueva coalición de fuerzas podría formular un programa más ambicioso para apoyar a las comunidades campesinas, federaciones y otros programas de Puno, basándose en el personal y la experiencia de Waqrani, los esfuerzos pastorales y los activistas de derechos humanos. El personal despedido de Waqrani se unió a otros centros, a la FDCP o a partidos políticos. El núcleo del equipo Waqrani continuó haciendo viajes relámpago al campo de Ayaviri, llevando el mensaje de que no habían abandonado a las organizaciones campesinas. Una propuesta de programa regional debe proporcionar un centro de servicio para las propuestas, proyectos y programas dispersos por todo el departamento. Debe establecer también una base de datos para centralizar la información para el desarrollo regional y la lucha contra Sendero. Una cuestión clave es evitar la fragmentación en la intervención de los centros y otros grupos, sumarlos en lugar de permanecer como unidades separadas y aisladas. La piedra angular del nuevo enfoque es dar un papel de liderazgo a los campesinos, sus organizaciones locales y la FDCP, en un intento de mantener –y en algunos casos, reconstruir- “el camino comunal”.

Conclusiones

Tomando en cuenta que el programa Waqrani se replegó en un momento crucial, el ataque senderista cortó un nudo operativo en los vínculos entre la misión pastoral, las federaciones campesinas y la estrategia política del PUM. Sin embargo, hay indicios de que la Iglesia y las organizaciones sociales y políticas alrededor de la estrategia del sur andino rehicieron su coalición pragmática bajo nuevos términos. La profundidad de las organizaciones de base y la flexibilidad de las instituciones de apoyo dieron a la región del sur andino los medios para continuar en el campo. Además, la creación de un gobierno regional, que abarca los departamentos de Puno, Moquegua y Tacna,

ha abierto un nuevo, aunque riesgoso, escenario para el trabajo y el consenso político.

La pregunta crucial que subyace en esta sección es por qué, a pesar de los factores que lo inclinan hacia la polarización, Puno ha sido capaz de resistir la dinámica de la violencia, mientras que otras regiones no han sido capaces. En otras palabras, ¿qué ha permitido al desarrollo rural ser más que un simple eslogan, sino una fuerza motivadora en la región?

En 1988, un antropólogo dijo: “El desarrollo rural es un muro de contención contra Sendero”. Con el beneficio de la retrospectiva, debe quedar claro que el elemento crucial no era el desarrollo rural público o no gubernamental, sino cómo estos programas se insertaban en el contexto regional. La existencia de fuertes y resistentes organizaciones de base hizo la tarea más fácil para las OAB.

El contexto regional de Puno, hizo fundamental y factible resistir las demandas de militarizar el conflicto. Se recurrió a los recursos nacionales e internacionales para frenar una escalada del conflicto. El éxito de los esfuerzos de desarrollo regional dependerá de la lectura de los factores y de su uso en beneficio del desarrollo.

Debido a la insistencia de la Iglesia del sur andino sobre la cultura, la organización y el desarrollo de liderazgos, la meta de la educación popular nunca se perdió. La esfera política nunca estuvo distante del debate, dando lugar a la preeminencia del problema de la tierra en el establecimiento de objetivos concretos. Este énfasis también encontró una expresión inmediata en las estructuras políticas, como Izquierda Unida. Las OAB aprovecharon las oportunidades, como la sequía y las inundaciones, para perseguir objetivos de corto y medio plazo en forma creativa. La lucha apuntaba hacia la iniciativa política, no sólo a propuestas técnico-productivas. La “estrategia Waqrani” no era un enclave, tuvo un impacto regional.

Un riesgo de la experiencia de Puno es extraer lecciones a ser aplicadas a escala nacional. Por ejemplo, el PUM y varios centros trataron de aplicar la cuestión de la reestructuración de la tierra en Junín, sin hacer antes una

evaluación exhaustiva de las condiciones locales para sostener el esfuerzo y la oposición a SL. Si el equipo de Waqrani y la estrategia del sur andino fallaron, fue en poner demasiado énfasis en el aspecto político de la fórmula, y no dar más valor a la paciencia y la resistencia cultural a largo plazo de las comunidades campesinas.

SECCIÓN 4: EL EJE DE LA GUERRA

Experiencias regionales y locales

Las organizaciones de apoyo a bases son un fenómeno nuevo en el paisaje andino y en el Perú. El paralelo más cercano es la presencia, igualmente reciente, del Estado en una función de promoción. Frente a estos proveedores de servicios de desarrollo, hay cientos y miles de peruanos desfavorecidos y sin educación, exigiendo asistencia para mejorar su situación.

El sociólogo rural Telmo Rojas (1986, 385-393) ofrece un resumen útil de la estructura social en medios rurales, elaborada al trabajar con organismos de desarrollo microregionales en el sur del Perú y Cajamarca. Hay estratos sociales paralelos en los sectores urbanos y rurales, diferenciados entre los grupos dominantes y subordinados. Los campesinos están en el peldaño más bajo de esta estructura de poder. Las redes de poder que conectan el sector urbano con el campo atraviesan los sistemas de tenencia de la tierra, el comercio y el aparato estatal. Estas redes también están teñidas con discriminación de campo a la ciudad, discriminación racial y étnica. En aras de la simplificación, llamaremos a esta zona de conflicto y tensión “interfaz urbano-rural”.

El ingreso de una OAB provoca un reajuste del equilibrio de poder local.

Los programas, proyectos y relaciones de las OAB con sus socios locales no se adaptan a la estructura local. Su mandato y alianzas se encuentran fuera del contexto local, con los organismos donantes, sus oficinas centrales, la intelectualidad nacional y otras instituciones. Los centros ofrecen nuevos puntos de contacto en la interfaz urbano-rural. Las OAB son proveedoras de servicios y bienes escasos en ambientes de pobreza y escasez crónica. Como forasteros alineados con las organizaciones de base, amenazan las propias redes de poder local. Algunos centros incluso declaran explícitamente que uno de los objetivos de su programa es romper el dominio que los grupos locales mantienen sobre sus zonas.

Los programas de los centros actúan sobre puntos clave de presión, especialmente los servicios del mercado y del Estado, para reforzar la influencia de sus socios locales. Por ejemplo, los planes de comercialización para productos reducen los márgenes de beneficio de los comerciantes, o los eliminan por completo. Los esfuerzos por organizar tiendas comunales afectan a los comerciantes locales. Los programas para fortalecer las organizaciones de base y mejorar los estándares de educación aumentan la presión sobre el gobierno y otros grupos para tomar en cuenta las demandas campesinas.

A pesar de que las OAB acuden en ayuda de los pobres en general, los objetivos de sus programas son comunidades y grupos específicos, que son, por tanto, más favorecidos que otras comunidades y grupos. Por lo tanto, la oposición, resistencia o resentimiento no sólo puede provenir de los sólidos intereses locales, sino también de las comunidades o grupos desfavorecidos que no tienen acceso a sus servicios.

Los grupos locales de interés acusan regularmente a las OAB de ser “agentes del comunismo”. También pueden inventar ataques senderistas para que las autoridades tomen medidas enérgicas contra los grupos campesinos. Hay una predisposición de los medios de comunicación provinciales para denunciar los actos de violencia como resultados de una acción senderista. Durante la última década, la mayoría de centros han aprendido que existe una ventaja en trabajar con mayor transparencia, explicando sus objetivos y métodos a las autoridades locales y fuerzas de seguridad. Esto ha reducido parcialmente algunas de las sospechas y conflictos inherentes.

Las comunidades campesinas gastan una enorme cantidad de recursos y tiempo tratando de conseguir trabajo y programas del gobierno. Si se suman todos los gastos: viajes a la capital provincial o departamental –e incluso a Lima- peticiones ante las autoridades, fiestas y honores, sacrificio de ganado para las fiestas, etc., las comunidades podrían fácilmente financiar la mayor parte de obras públicas por sí mismas. Un cálculo para la comunidad campesina del Cusco, cifra el tiempo dedicado a obtener créditos agrarios y otros tipos de asistencia del Estado en 8.000 días-hombre al año (Paz-Tarea de Todos, N° 7, 45-47).

Los centros pueden tratar de ayudar a las comunidades para mantener un equilibrio dinámico entre el Estado, la dependencia, la lucha y la organización, que son medios y mecanismos para conseguir lo que la comunidad necesita. Tal vez esta es una de las razones por las que un rápido crecimiento colateral de las OAB es el trabajo en derechos humanos. Proporcionar asesoramiento, abogados y otras ayudas a las organizaciones de base mejora la posición de éstas para negociar en la interfaz urbano-rural. La presencia de un profesional capacitado junto a un dirigente campesino durante el diálogo con funcionarios del Estado puede modificar los términos de interacción.

Esto también puede conducir a una dependencia respecto de los centros como intermediarios, al igual que los campesinos solían depender de sus padrinos urbanos para interceder ante los jueces y funcionarios. “Parecería que los centros organizan a la población para aceptar el proyecto y participar de manera más eficiente en su ejecución” (Gianotten y De Wit 1990, 249). **Sólo concentrándose en la organización y desarrollo de liderazgos se puede esperar que los centros vayan más allá de estas relaciones paternalistas.**

Los campesinos rara vez diferencian los centros de las agencias estatales. Ellos hacen el mismo tipo de peticiones a ambos, en un intento de sacar algo de estos nuevos intermediarios. La tendencia hacia proyectos de desarrollo integral, que combinan promoción agrícola, sistemas de comercialización, organización, servicios de salud y educación y otros aspectos, muestran que los centros son conscientes de que sus socios locales tienen una amplia gama de necesidades, demandas y expectativas. “Todos usamos la máscara de funcionarios públicos”, dice un asesor internacional para el desarrollo.

Los centros podrían distinguirse con un trato más horizontal e igualitario a los campesinos y otros “beneficiarios”. Pueden reducir el papeleo y reverencias para obtener beneficios. Los centros, sin embargo, siguen firmemente anclados en la interfaz urbano-rural. Vienen con menús ya confeccionados de programas, líneas de acción y paquetes tecnológicos, así como una agenda oculta. Un dirigente de base una vez dijo a Ton de Wit que el

gobierno, los partidos, los centros y Sendero eran la misma cosa: querían imponer sus prioridades a las organizaciones de base.

Sendero se ha posicionado estratégicamente en el centro de las líneas sísmicas de la sociedad peruana. Juega con la fallida retroalimentación entre el centro y la periferia, las complejidades de la política local, las experiencias y expectativas de los segmentos de la población. Cada uno tiene su propio conjunto de tradiciones, códigos y dinámicas, que también interactúan con las tendencias y factores nacionales.

Al igual que un tiburón oliendo la sangre, Sendero Luminoso es casi instintivamente atraído por los conflictos. “Sendero Luminoso ha tenido éxito en insertarse en los conflictos existentes”, dice el historiador andino Nelson Manrique. En una sociedad como la peruana, fragmentada étnica, social y económicamente, estos conflictos abundan, a pesar de que parecen venganzas personales o familiares. Las controversias que involucran derechos al agua o a las escasas tierras de pastoreo pueden convertirse en la lucha de una comunidad campesina contra otra.

Sendero se concentra en un territorio para imponer un “eje de la guerra” sobre las comunidades locales, el Estado, las fuerzas de seguridad y otros agentes en la zona. Las áreas prioritarias son aquellas que tienen el impacto más dinámico en la configuración local: educación, problemas de tierras, mercado y Estado. Aunque Sendero alimenta y trabaja las disputas locales, su marco y estrategias generales implican una evaluación global de las tendencias nacionales y regionales. Esto le da a Sendero ventajas estratégicas e iniciativa táctica sobre sus adversarios civiles, e incluso sobre las Fuerzas Armadas.

Esta estrategia subversiva contrasta con la labor de las OAB. “El impacto de los programas es limitado, ya que funciona en un mundo aislado y la interpretación es bastante localista... La crítica y el análisis se plantan en un plano regional y nacional, pero la revisión de las propuestas revela una falta de instrumentos operativos para relacionar las acciones locales con esferas mayores” (Gianotten y De Wit 1990, 244, 247).

Una de las quejas de los centros, una vez que despiertan, es que pueden comprender los temas de violencia y sus repercusiones, pero es imposible hacer que sus socios locales –asociados o beneficiarios– los entiendan de la misma manera. Los campesinos han convivido con la violencia y SL desde hace una década, y han desarrollado sus propias defensas y respuestas al problema. Por ejemplo, algunas comunidades nativas de la Amazonia prefieren enfrentar a los grupos insurgentes solas, porque la presencia de forasteros sólo complica la situación. En casos extremos, tenemos a los asháninkas del departamento de Junín, que prácticamente han declarado la guerra al MRTA y Sendero en la zona, pero también han barrido a las comunidades nativas vecinas durante los disturbios.

“Cada comunidad tiene un diferente comportamiento frente a la violencia”, dice el director de un centro de Ayacucho. “Actúa para proteger a sus miembros. A veces, simplemente desaparece cuando aparecen desconocidos”. Durante los años ‘70 y ‘80, los centros daban un premio a quienes trabajaban con comunidades campesinas que mantenían sus estructuras tradicionales, especialmente en el sur del Perú. Debido a la espiral de violencia en los Andes del centro y del sur y a la mayor conciencia de la importancia de las rondas campesinas, ha habido un marcado aumento en el interés por trabajar en el norte de los Andes. Hoy en día hay cerca de 40 centros trabajando en Cajamarca, en comparación con menos de una docena hace dos años.

Las rondas campesinas de Cajamarca y Piura no son una garantía de que Sendero retrocederá en el norte de la sierra. A pesar de ser uno de los grupos sociales más impresionantes que han surgido en este siglo, tienen sus debilidades. Las rondas son un medio para mantener la viabilidad de los pequeños propietarios en las zonas rurales. Mediante la organización sobre la base de los caseríos y uniendo a las rondas en organizaciones más amplias, de valle, distrito o provincia, pueden combatir el robo de ganado y otras amenazas más eficazmente, sin protección policial. Rápidamente se convirtieron en un sistema de justicia paralelo y en gobiernos comunales. Su mandato más amplio es mantener el equilibrio comunal a través de acuerdos de consenso dentro de las rondas y con las rondas vecinas del distrito y la

provincia. Sin embargo, la justicia campesina, que tiene lugar en las asambleas comunales, también trabaja para mantener el equilibrio interno. Los analistas han citado con frecuencia a las rondas como un contrafuerte contra la invasión senderista, lo que implica que sus funciones de hacer cumplir la ley implican luchar contra la guerrilla. Mis hallazgos, sin embargo, apuntan en otra dirección.

La ronda mantiene la cohesión interna evitando que los disidentes internos recurran a árbitros externos para lograr beneficios. Sendero no encuentra el descontento y las brechas locales para hacer sus incursiones iniciales. Sin embargo, en las áreas donde el gobierno interfiere con las rondas y les quita su legitimidad como organizaciones autónomas (como la provincia de Cajabamba en Cajamarca), Sendero tiene la oportunidad de aprovechar las diferencias entre facciones. Este análisis también es importante para comparar el rendimiento del uso de “comités de defensa civil” por parte de las fuerzas armadas, al estilo de los de Guatemala.

Un ejemplo de ello es la experiencia de una OAB en la zona de Cajamarca. Elaboró un programa para distribuir animales de corral, semillas y otros bienes entre los campesinos y aumentar las opciones de renta de sus hogares. El centro dejó al criterio de cada ronda local el decidir qué familia recibiría cada elemento. Las rondas incorporaron un criterio no-técnico: mantener el equilibrio comunal.

Un centro que opera en el campo de Ayacucho encontró una situación similar. “Podríamos tener mejores canales de riego y más rápidamente si tuviéramos una mezcladora de cemento, pero la máquina es un símbolo de poder en Ayacucho”, dijo el director del programa. Las mezcladoras de cemento están asociadas a los proyectos del gobierno. “Con la más alta tecnología en fertilizantes, herbicidas e insecticidas, probablemente podríamos obtener rendimientos de 18-20 toneladas de papa por hectárea, en lugar del promedio de 2-2,5 toneladas en Ayacucho. Sin embargo, usando niveles tecnológicos más modestos, obtenemos 8-10 toneladas”. Los campesinos están satisfechos con los mayores rendimientos y el programa no creará un

problema cuando el centro se vaya y los fertilizantes subvencionados ya no estén disponibles.

Podemos obtener la conclusión de que los programas de desarrollo rural deben prestar atención a las dinámicas locales de conflicto y tensión, y ceder más iniciativa a las organizaciones locales en la asignación de recursos.

Además, los centros deben encontrar medios para que las organizaciones de amplia base intervengan en el establecimiento de objetivos y métodos, evitando conflictos con las comunidades que no reciban beneficios inmediatos. Por ejemplo, si una federación campesina del distrito es copatrocinadora de un plan de comercialización o producción para un proyecto específico, puede explicar a otras comunidades que el proyecto finalmente les dará grandes beneficios, aunque no sean participantes. Las redes de comercialización podrían ampliarse, o un proyecto piloto de técnicas agrícolas innovadoras podría ser probado y puesto a disposición.

“Sendero es el auditor externo de los programas de los centros”, dice el economista Javier Igúñiz. “Sólo aquellos con alta calidad se mantendrán, y no importará si usted lleva un par de pistolas”. Los supervisores de los programas para el desarrollo se preguntan cuánto de los fondos de las OAB realmente llegan a las bases. Apenas el 20% de los fondos se destinan a los socios locales, dicen las críticas más severas. Aunque los programas por lo general comienzan con presupuestos modestos, los costos de mantener un equipo en el campo y hacerlo funcional se encarecen con el paso del tiempo. Esto se explica por el hecho de que los objetivos del programa se elevan, pero no tan rápido como los costos.

Este es un punto que ha sido duramente criticado por Sendero durante la última década. Afirma que los centros, su personal y otros explotan la situación de los pobres para su beneficio personal o institucional. El personal de los centros alquila las mejores casas en los centros urbanos, monta vehículos 4x4, gana un sueldo (a veces, vinculado al dólar U.S. o indexado a la inflación) por encima del promedio de la región. En realidad, las condiciones de trabajo y los sueldos pueden ser mejores que la mayoría de los niveles universitarios de Lima. Son mucho mejores que los de los socios locales. En

condiciones normales, estas disparidades se racionalizan por la retórica del centro de servir a las organizaciones de base y los beneficios de los programas. En las condiciones actuales del Perú, los centros parecen enclaves privilegiados.

Por el contrario, los directores de centros dicen que hay una distinción entre los programas de las zonas rurales y urbanas. Los programas rurales tienden a encajar en los métodos más austeros requeridos por el trabajo con comunidades y organizaciones campesinas. También los centros con sus raíces de funcionamiento en Lima o en las capitales de provincia están naturalmente atraídos hacia la investigación, la investigación y la consolidación institucional.

En la manifestación más extrema de este enfoque elitista, algunos líderes de centro llegan tan lejos como para decir, en privado, aunque no públicamente, que los centros son un fin en sí mismos; los donantes deben continuar para apoyarlos porque ellos están apoyando a la intelectualidad nacional. Las organizaciones de base no son más que apoyos para un desarrollo institucional de mayor importancia. Esta actitud contiene un alto grado de soberbia y arrogancia.

Relaciones con el gobierno y los partidos políticos

Cuando las OAB aparecieron por primera vez en las zonas rurales, en los años '60 y '70, el panorama político era claro. Los campesinos, los partidos de izquierda y las OAB por un lado, y el gobierno, los partidos gobernantes y los intereses creados por el otro. Con el retorno a la democracia, esta situación se ha vuelto más confusa. **Con la diversificación del gobierno a través de municipios, regiones e instituciones paraestatales, las OAB y organizaciones de base encuentran que sus colegas y asociados han ganado posiciones de poder administrativo y político.**

Desde mediados de la década de los '80, también ha habido un esfuerzo por hacer un uso más eficiente de los escasos recursos mediante la coordinación de la labor de desarrollo entre las OAB y los gobiernos u

organismos internacionales. Esta orientación fue importante en el enfoque microrregional, entre 1984-86. Después del shock de Fujimori en agosto de 1990, el gobierno, los organismos donantes y la Iglesia Católica pidieron a los centros ayudar al programa de emergencia social, para proporcionar ayuda humanitaria a los más desfavorecidos.

Sin embargo, al cooperar muy de cerca con el gobierno, los centros pueden llegar a ser considerados como extensiones de los servicios estatales, o como sus reemplazos. Ellos también pueden perder su independencia y capacidad crítica. Los centros más conectados con el Estado están más expuestos a ataques. Precisamente, los programas bilaterales y multilaterales han sido blancos de alto riesgo de la guerrilla, por sus contactos institucionales con el gobierno y por el alto perfil de los proyectos a gran escala.

En el ámbito regional y local, el molino de los rumores esparce la reputación de uso de recursos para fines electorales, en vez de gastar hasta el último centavo en ayudar a los campesinos. En comparación con las campañas bien engrasadas de los grandes partidos, este uso político de los recursos puede ser insignificante. Las máquinas de escribir y mimeógrafos pueden ser utilizados para hacer propaganda electoral y comunicados. Los vehículos y la gasolina pueden apoyar las campañas electorales. Los programas del centro se utilizan para el clientelismo del partido: el nombramiento de líderes de base como personal de la OAB para asegurarlo en sus organizaciones, condicionar la participación a la lealtad al partido, etc. También se cita el uso del prestigio de dirigir un centro como un trampolín a cargos de elección popular. Los directores de las OAB pueden llegar a ser lumbreras locales, ya que pueden formar parte del sistema local, lo que requiere frecuentes reuniones de coordinación con prefectos, subprefectos y otros funcionarios estatales. Esta clase de prestigio puede traducirse fácilmente en un trampolín para cargos de elección política.

En el Perú, con cientos de programas en las últimas tres décadas, ha habido incidentes de esta naturaleza. Por otra parte, muchos de estos cargos son infundados y forman parte de las sospechas sobre las verdaderas razones para trabajar en las zonas rurales. Es natural que el personal de la OAB apunte

a funciones políticas en la situación actual. El trabajo en el Perú rural requiere un alto grado de motivación y dedicación. La unidad del personal puede provenir de convicciones religiosas, políticas o de conciencia social. Con frecuencia, esta motivación política puede llevar a buscar puestos de elección popular.

Un veterano director de una OAB afirma que los centros disponen de tres tipos de trabajadores: los “vírgenes políticos” que no quieren aceptar el precio de trabajar en el gobierno y comprometen el trabajo con los campesinos, los “activistas de partido” que usan el financiamiento para apoyar sus actividades de promoción, y aquellos que aceptan los objetivos explícitos de la OAB (campesinos, desarrollo rural, organizaciones de base). “Los rendimientos del tercer grupo son mayores que los costos de los dos primeros”, añade.

Durante la última década, la mayoría de centros han hecho un esfuerzo concertado por despolitizarse y liberarse de la influencia de los partidos, como se indica en la Sección 1. Sin embargo, muchos se han ido hacia el otro extremo, convirtiéndose en islas técnicas preocupadas por detalles y medios de desarrollo, perdiendo de vista los temas políticos más amplios y la necesidad de forjar una organización política –no necesariamente células partidarias- para lograr metas a largo plazo.

Los centros también deben tener cuidado de contar con directrices claras sobre cómo y cuando el personal puede participar en política. Durante la temporada electoral de 1989-1990, muchos miembros de centros postularon a cargos electivos, pero por lo general renunciaron o solicitaron licencia.

Financiando programas a través de esquemas de creación de beneficios

Una preocupación de muchas OAB y economistas es la dependencia de los centros respecto del financiamiento extranjero. Ningún proyecto, salvo unos pocos vinculados a la comercialización de lana de alpaca para las comunidades, podría sostenerse con sus propios recursos. La mayoría estará eternamente mendigando recursos. La eliminación de la financiación internacional deja dos opciones: la obtención de recursos de los gobiernos

locales, regionales y nacionales, o la autofinanciación a través de esquemas de creación de beneficios.

La primera opción implica la construcción de alianzas políticas, en el más amplio sentido de la palabra, para presionar por la continuidad de los programas. Esto significa politizar los proyectos, a fin de que amplios sectores de la población vean su valor. Deberían tener lugar algunas reformas en los gobiernos municipales y regionales. También se plantea la posibilidad de que estos programas sean vistos como otro programa estatal.

La autosuficiencia requiere una mayor participación en la creación de beneficios y también puede tener peligros. Una de las frases hechas de la década pasada ha sido la ayuda a las organizaciones de base para insertarse en el mercado de manera ventajosa. Sendero ha dejado claro que no tolerará la acumulación de capital en las comunidades campesinas. En Puno y Junín, se ha opuesto a las empresas comunales, un intento de utilizar los recursos de las comunidades campesinas y aumentar su viabilidad económica. Otro problema es que la política económica del Perú ha sido tan inestable que una planificación eficaz es imposible. Embarcar a campesinos en esquemas de producción de beneficios puede ser una experiencia frustrante.

Trabajar con esquemas de producción de beneficios implica cuidadosos sistemas de controles y contrapesos, más una transparencia cristalina; y debe ir de la mano con la construcción de organización. Los responsables de la gestión de los fondos deben ser plenamente responsables ante los socios locales y estar preparados para pasar largas horas sofocando los abusos más flagrantes de los molinos de rumores locales.

Enfrentando nuevos retos

A finales de 1988, la mayoría de las OAB en zonas rurales había puesto en práctica una serie de medidas de precaución. Los centros deberían concentrar su personal, oficinas y viviendas en las capitales de provincia o departamento. El personal no debía pasar la noche en el campo o viajar solo. Los centros deberían comunicar previamente a los socios locales antes de

entrar al campo a reuniones, sesiones de capacitación u otros eventos, para asegurarse de que no hubiera actividades inusuales en la zona.

La mayoría de centros también ha bajado su perfil institucional. Las OAB tienen que reducir los desfiles de vehículos 4x4, el superávit de ingenieros y agrónomos y la ostentación de proyectos bien financiados. Los OAB están ahora pensando en términos de programas culturales y de rescate/recuperación de tecnologías andinas, en lugar de vender paquetes tecnológicos importados del extranjero. Todavía hay una tendencia de las organizaciones al asistencialismo paternalista, pero esto también se utiliza para acercar las demandas a los corazones de los campesinos.

Otras medidas incluyen la prohibición del licor en los viajes de campo y montar guardia por las noches. Todos los centros han descartado la posibilidad de contar con escolta policial (el gobierno ofreció esta opción a varios programas bilaterales). Las reuniones con socios locales son más restringidas. Los promotores se aseguran de tener información detallada sobre los participantes. La vieja idea “cuánto más, mejor” ha terminado.

Además, los centros también adquirir nuevas frases hechas para orientar sus políticas. Piden la transferencia de recursos y programas a los socios locales, y la gestión indirecta. Esto se desprende, naturalmente, de la reducción de la presencia de los centros en el campo. Sin embargo, el personal de centro admite que los esfuerzos han sido demasiado breves y aislados para realizar una evaluación más sistemática de los progresos en esta dirección.

¿Por qué Sendero ataca los centros? Ellos constituyen plataformas para el desarrollo y la organización. Son vulnerables, no tienen armas y con frecuencia no están preparados para los ataques. Pueden servir, en la mente de Sendero, como posibles fuentes de inteligencia de las fuerzas de seguridad. Las OAB frecuentemente ocupan zonas estratégicas por las que pasan las columnas senderistas, o en las cuales están estableciendo bases de apoyo. Las OAB normalmente no forman parte de las comunidades locales y son blancos más tolerables que los residentes. También son botines potenciales a ser intercambiados con los residentes locales, a través del saqueo organizado. El personal de las OAB con frecuencia está afiliado en partidos políticos, y por

lo tanto forma parte del sistema. Las OAB y Sendero compiten por el mismo terreno: el frágil terreno medio de las instituciones y organizaciones que han surgido en las últimas tres décadas o más. Estas organizaciones son posibles puntos de convergencia para la oposición a Sendero, y catalizadores de los nuevos medios de inserción de los colectivos desfavorecidos en la sociedad peruana moderna.

Los centros han de diferenciar entre las áreas de riesgo y los tipos de programas y políticas que se pueden llevar a cabo en cada una de ellas.

Vicente Otta (1989, 29-32) hace tres distinciones regionales:

Zonas de emergencia: Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, Cerro de Pasco y Huánuco. Las fuerzas beligerantes marcan el ritmo y la dinámica. El principal objetivo debe ser mantener los limitados espacios existentes y evitar que las organizaciones sean demolidas por el miedo y las represalias. Otta dice que los centros deben incrementar los programas técnico-agrarios y ampliar los programas de supervivencia. Incluso lo que ha sido visto como mero “asistencialismo” tiene valor para mantener con vida los contactos y las redes. Los centros deben incrementar los contactos con otras instituciones, como la Iglesia, las universidades y asociaciones profesionales. Muchas de estas regiones necesitan una presencia independiente, pero los centros deben evaluar seriamente sus programas antes de ingresar a ellas.

Zonas de violencia activa: Puno, Cusco, Lima provincias (Huacho, Paramonga, Cañete, Pisco, Chincha y la sierra de Lima). Los centros deberían mantener una presencia plena aprovechando el fracaso de Sendero en tener una presencia permanente en estas zonas. Los centros deberían participar en un esfuerzo por diferenciar ideológica y políticamente a Sendero y otros grupos propensos a la violencia de otras opciones, dice Otta. Deben ayudar a otros grupos a asumir una posición clara de rechazo a Sendero.

Zonas de retaguardia: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Tacna, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios, Cajamarca y Amazonas. Otta sugiere que los centros deben contribuir a ampliar los espacios democráticos y fomentar la reproducción normal de la sociedad civil. Por ejemplo, hay un incremento de los organismos donantes y centros, que sienten la posibilidad de

trabajar en Cajamarca, bajo el manto de las rondas campesinas. Este apuntalamiento estratégico de la retaguardia, sin embargo, será vano si los centros repiten los mismos errores que en otros lugares.

Más allá de estas zonas de riesgo definidas de manera amplia, hay espacio para más distinciones. La presencia de las fuerzas beligerantes puede variar de una provincia a otra dentro de un departamento, y de un distrito a otro en una provincia. Algunas áreas antes activas pueden estar tranquilas por períodos prolongados, en efecto, convirtiéndose en las zonas de ensayos o reservas, donde los subversivos pueden descansar y reponer fuerzas. El factor principal es la importancia de un distrito o provincia dentro de la estrategia militar de los subversivos, que tiene una manifestación peculiar en los Andes. Con frecuencia, elementos como la concentración de la población tienen un rol secundario respecto de otros puntos como la ubicación geográfica para enlazar comunicaciones. En el caso de Sendero, sus tácticas parecen apuntar a una estrategia similar a la de “isla en isla” de las fuerzas armadas norteamericanas en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

Cuando un grupo guerrillero decide actualizar su presencia en una zona, decide quién es su enemigo principal. El MRTA rara vez toma a las OAB como enemigas. Sendero puede ignorarlas (como en la provincia de Huamanga, Ayacucho) o convertirlas en objetivos primarios, como en Puno o Junín.

Esta evaluación de la región puede cambiar de un día para otro. Durante las elecciones municipales y generales, la presencia de guerrilleros y de las fuerzas de seguridad aumenta, lo mismo que el potencial de violencia. Sendero tiene su propio “calendario revolucionario”, con campañas cíclicas por aniversarios. También ha llegado a ser casi un ritual para Sendero el lanzar una ola de ataques cada vez que un ministro de Interior o Defensa declara ante los medios de comunicación que las fuerzas de seguridad han puesto en fuga a las guerrillas. Los guerrilleros también aprovechan los períodos de inestabilidad del gobierno, como el lanzamiento del paquete económico a fines de setiembre de 1988. Cuando las guerrillas están inaugurando un nuevo teatro de operaciones, también tienden a ser más despiadadas. Las fuerzas de

seguridad también tienden a ser más agresivas cuando develan una “nueva estrategia de contrainsurgencia”.

Obviamente, el período 1990-1991 es muy preocupante, porque un nuevo gobierno significa una prueba total para la resistencia peruana. Algunos centros han sido capaces de mantener programas en áreas plagadas de conflictos. Se ha requerido un ajuste mental y metodológico. Esto significa tomar una posición que no antagonice a ambos lados. Debido a que es una guerra total, la única manera de intervenir es tomando las armas contra Sendero o contra las fuerzas de seguridad, porque es una cuestión de quién es el más fuerte. La experiencia de un centro de desarrollo rural en una vieja zona de emergencia es ilustrativa de los márgenes de las acciones disponibles en el trabajo de desarrollo.

“Si las órdenes de Sendero Luminoso no van contra su conciencia, los reglamentos de la institución o la ley, entonces, puede cumplir con ellas”, dice un director del centro. Sendero ha impuesto normas a todos los forasteros que trabajan en la región.

1. *Ningún equipo de comunicación por radio.*
2. *Ninguna mejora en los caminos.*
3. *Ningún apoyo a los partidos políticos.*
4. *Ningún proyecto específicamente dirigido a la inserción en el mercado. Los programas han de ser destinadas al autoconsumo.*
5. *Los programas deben tener como objetivo a los campesinos más pobres.*

Las reglas de los militares son las siguientes:

1. *Informar cada dos meses sobre lo que están haciendo. Los oficiales irán a los sitios a medir cuántos metros de canales de riego se han excavado y equipado en realidad.*
2. *Informar diariamente sobre los viajes al campo desde la base de operaciones (por lo general, este requisito pasa por un período de*

relajación. Los informes diarios de "ir a plantar papas" en una comunidad se vuelven monótonos).

- 3. El centro debe informar al personal cuando cure una herida de bala o se cruce con una guerrilla (como el personal nunca había tenido que atender a un guerrillero, nunca ha habido un informe de esta naturaleza).*

El propio centro dispone de normas internas para trabajar en la zona de emergencia.

- 1. Nadie puede militar públicamente en un partido político. Si lo hace, debe renunciar, por el bien de sus colegas.*
- 2. El centro cumple con los paros armados de Sendero Luminoso.*
- 3. Ningún miembro extranjero del personal trabaja en el proyecto.*
- 4. Las visitas del exterior se limitan a dos días,*
- 5. Ninguna reunión del centro tendrá más de tres personas. Las puertas y ventanas se mantendrán abiertas en todo momento para evitar la apariencia de secreto.*
- 6. Contratar a personas de la región para llevar a cabo el proyecto.*
- 7. El financiamiento viene del interior de la esfera católica. Pueden haber excepciones a esta regla, pero la orientación general del programa permite que el centro explique y justifique su trabajo ante los socios locales. El centro ha rechazado financiamientos del gobierno o colaborar con programas gubernamentales, como créditos agrícolas o trabajos de extensión.*

En otros ámbitos, las medidas no tienen por qué ser tan extremas. De hecho, la idea es tomar medidas que eviten las situaciones generadas en el pantano de la zona de emergencia de Ayacucho. Sin embargo, debe ser obvio que no importa qué medidas de precaución tomen las OAB (o los centros u otras instituciones civiles), Sendero o las fuerzas de seguridad pueden barrerlas.

SECCIÓN 5: CONCLUSIONES

Esta década de violencia creciente ha llevado la dirección del país a girar en torno a un “eje de la guerra”. A fin de invertir esta tendencia, las instituciones e individuos deben comprender las nuevas dinámicas y urgencias. Tratar de realizar actividades de desarrollo rural con una actitud empresarial siempre terminará en una frustración. Este trabajo trata de reunir algunas conclusiones que podrían ayudar a los peruanos en esta tarea.

- Los 400 centros de Perú no son diferentes del resto del país, y sus homólogos extranjeros desempeñan un papel en el país. El estallido de violencia desde 1980 ha desconcertado y sorprendido a las elites nacionales. Ha desangrado a aquellos desafortunados que quedaron atrapados en el fuego cruzado y paralizado a las instituciones que debían encontrar la manera de salir de la desazón.
- Los centros no son tropas de choque a ser arrojadas en medio de la refriega. Tampoco pueden seguir siendo simplemente observadores pasivos del conflicto. No debemos sobreestimar su capacidad de influir en los acontecimientos y resultados.
- Basándonos en la experiencia del sur andino en los últimos dos decenios y en elementos de otras partes del Perú, hay varios puntos clave que debemos fomentar en la elaboración de una estrategia de esfuerzos de desarrollo rural en el frente de la violencia política.

Primero, los participantes en el desarrollo rural deben tener como objetivo desarrollar un enfoque regional, sin perder de vista los horizontes nacionales e internacionales. Este enfoque regional también debe tener la capacidad de llegar hasta abajo en el microcosmos individual, en toda su variedad y matices, en las comunidades andinas de base. Debería conducir a construir niveles superiores de organización, ayudando a elaborar experiencias y expectativas y

hacerlas comprensibles ante grupos e instituciones externos. Las organizaciones de base aisladas no serán capaces de resistir la embestida de la violencia.

En segundo lugar, una consecuencia lógica de una estrategia regional es la necesidad de coordinar, comunicar e intercambiar información y experiencias. Esto también significa ser capaz de bloquear los proyectos y programas en los que haya poca retroalimentación o se dupliquen esfuerzos. La coordinación puede ser institucionalizada o informal.

En tercer lugar, es imprescindible mantener una reserva para la crítica moral, ética e intelectual, y para la autocrítica. Esto implica también la capacidad de dar sanciones morales y políticas. Este espacio de reserva garantiza previsión, reacción y flexibilidad para responder a las nuevas condiciones. También significa un constante cuestionamiento de por qué las instituciones y organizaciones están ahí, qué tienen que ofrecer y qué piensan lograr.

En cuarto lugar, la voluntad de moverse y trabajar en terrenos diferentes da a los centros la oportunidad de “refugiarse” en otras líneas de actividad, cuando la violencia política limite la acción directa. Los centros y sus socios locales deben trabajar en los niveles teóricos y prácticos, en los aspectos técnicos, espirituales, políticos y culturales. Esto significa que los centros y sus socios locales deben aprender de la participación en el diálogo y del trabajo constructivo con los gobiernos locales, regionales y nacionales, con los partidos políticos y grupos de interés. Sin embargo, este esfuerzo no debe comprometer su independencia operativa e institucional, o el compromiso de dar voz y poder cada vez mayores a las organizaciones de base. Varias experiencias han demostrado que es precisamente en las áreas “no prioritarias” donde se pueden extraer nuevas lecciones acerca de las prácticas populares de resistencia. Estas cuestiones colaterales también dan legitimidad de base a los programas de desarrollo, ya que abordan muchos de los problemas más sensibles en relación con las organizaciones de base. Un punto de presión crucial es la relación entre

las organizaciones de base y las organizaciones de apoyo, por un lado, y el gobierno por el otro. ¿Debe el programa de emergencia social comprometer la independencia de las OAB, debido a la necesidad de poner la ayuda de emergencia a disposición de las organizaciones populares? ¿Debe el entusiasmo de las OAB con los gobiernos regionales (a menudo en manos de Izquierda Unida) poner en peligro la independencia de los roles futuros?

En quinto lugar, la organización debe tener prioridad sobre otros objetivos más cuantificables. Las propuestas para utilizar las organizaciones populares como “carne de cañón” contra la subversión (comités de defensa civil) u otras aventuras políticas deben ser vistas con escepticismo. El gobierno puede reemplazar un poste de electricidad derribado o un tractor quemado. Las organizaciones de base crecen y maduran durante décadas de sacrificio y esfuerzo, constituyendo reservas de experiencia y liderazgo. Esto no excluye la posibilidad de que las organizaciones de base decidan oponerse a la dinámica de la violencia. Esto significa ceder un papel de liderazgo más grande a las organizaciones de base.

No todos estos elementos pueden estar presentes en cada zona o región, dada la diversidad y complejidad de la realidad peruana. Sin embargo, cada una tiene sus características peculiares, que pueden estar vinculadas a una estrategia local. Cada una tiene una llave que puede hacer confluir organizaciones, como lo hicieron el problema de la tierra en Puno o las rondas campesinas en Cajamarca.

- Los centros, los grupos de coordinación y la representación nacional deben seguir luchando contra la tentación de militarizar el país. Esto sólo puede lograrse ampliando el alcance de las actividades que los centros por lo general consideran como suyas. Debe evitarse que la coordinación se convierta en un asunto que consuma tiempo, burocrático. Con frecuencia, la coordinación subregional, si hay suficientes centros que operen en la zona, puede ser más útil.

Este minucioso trabajo de coordinación requiere tiempo, energía y recursos. La mayoría de las instituciones no tienen el personal o la capacidad para hacer frente a este esfuerzo. Desviar empleados a la coordinación de tareas debilita los programas. Los centros regionales de investigación pueden ser más apropiados para esta tarea.

Los organismos donantes deberían proporcionar fondos para abrir estos espacios. Deben salir de su aislamiento institucional y avanzar hacia la puesta común de financiamientos, recursos y enfoques regionales para maximizar su uso. En tiempos de escasez, estos recursos deben considerarse como capital inicial para empresas de alto riesgo en la supervivencia social.

Aunque Gianotten y De Wit (1990, 249) se refieren al desarrollo rural en sí, sus observaciones son pertinentes a la violencia: "Si las acciones del centro no están vinculadas a tareas de investigación, y viceversa, el centro se convierte en una instancia asistencial, a pesar del discurso... Toda innovación tiene un coste. La tarea de los centros está disminuyendo el costo de las innovaciones para el sector popular". En este caso, el ahorro será de vidas y de viabilidad de las instituciones democráticas.

- La búsqueda de zonas libres de conflicto, donde las OAB puedan operar sin el espantajo de la violencia, es vana. Las OAB y otros organismos de desarrollo debe partir del supuesto de que la guerrilla u otros componentes de la fórmula de la violencia también buscarán territorios vírgenes. El cambio de los programas a las áreas donde la violencia no ha echado raíces profundas puede ser una trampa sencilla para continuar con rutinas, repertorios de metodología y paquetes tecnológicos. Las OAB pueden terminar repitiendo los mismos errores de los últimos dos decenios. Un examen autocrítico de los programas y líneas de acción debe conducir a una reorganización de las prácticas de las OAB. Ellas y otros miembros de la sociedad civil deben tratar de construir baluartes contra la violencia a partir de sus propias prácticas.

Hay más posibilidades de consenso a nivel regional que en el escenario nacional. Esto significa la creación de canales para el diálogo y la comprensión, la participación de interlocutores locales y grupos externos en el debate y la búsqueda continua de acercamientos en períodos de crisis. El trabajo de desarrollo debe ser una profilaxis frente a la dinámica de la violencia.

- Las OAB que no estén directamente en la línea de fuego deben realizar una evaluación exhaustiva de sus programas, proyectos, métodos de trabajo con socios locales y objetivos. Hay un periodo de latencia de 2-5 años hasta que Sendero haga estallar su fase virulenta. Los observadores no pueden detectar la presencia de Sendero Luminoso, ya que éste no hace más que sondear el territorio, tanteando el terreno, los conflictos y reclutas potenciales. Es muy fácil descartar los primeros signos (bombardeos, visitas clandestinas a las escuelas) como columnas erráticas, disidentes imitadores o interferencias externas.
- Los programas que tienen altas necesidades de inversión de capital, altos costos de operación y largos períodos de maduración deben ser examinados con cuidado. Sus costos y la infraestructura visible significa que se convierten en símbolos de poder y objetivos políticos para la envidia y el sabotaje.

Los programas técnicos asépticos serán vulnerables, porque tienen raíces superficiales y dispersas entre las comunidades y beneficiarios. Rara vez tienen apoyo político para manejarse a través de situaciones problemáticas. En la sección sobre la estación experimental de Allpachaka y su extensión hacia otros centros de investigación abstracta, debe quedar claro que los programas que no pueden mostrar relevancia práctica e inmediata pueden quedar bajo ataque, incluso en las condiciones más seguras de Lima. La inversión necesaria para acondicionar instalaciones de investigación y viviendas para el personal calificado los hace parecer enclaves de prosperidad.

- Una de las claves para enfrentar el reto de la violencia política es la promoción del “beneficiarios” locales (receptores pasivos de programas y

servicios) al status completo de socios en el desarrollo rural. Esto puede implicar un reajuste de los métodos y objetivos de los programas, borrando la pureza técnica y los enfoques orientados a un solo objetivo. Esto implica dedicar más esfuerzos y energía hacia la lenta y dolorosa tarea de generar organizaciones duraderas y liderazgos profundos.

“Los proyectos con contrapartes consolidadas tienen más oportunidad de continuar, porque las comunidades locales pueden asumir la dirección de los proyectos”, dice un experto en desarrollo.

- En situaciones de agitación, emergen nuevas prioridades para la ayuda y la organización social. Los 10 años de expansión de la violencia han desatado un proceso de migración que tendrá efectos traumáticos, como los mitimaes de los Incas, las reducciones del virrey Francisco de Toledo y la migración urbana de 1960-1980. Este desplazamiento de comunidades enteras se lleva a cabo en condiciones adversas de crisis económica, desempleo crónico y represión política. De hecho, parece que éste es un objetivo deliberado de la estrategia empleada por Sendero Luminoso. Su objetivo es aumentar la carga sobre una estructura social anticuada y romper la red de seguridad provisional de los desfavorecidos.

El programa de ajuste económico del gobierno de Fujimori ya está estirando al máximo los recursos de socorro y apoyo a las organizaciones de base. Estos nuevos cambios en la población implican que los flujos de nuevos necesitados demandarán servicios de emergencia.

- Debe darse una mirada fresca a los folletos y trabajos de caridad, a pesar de las críticas serias dirigidas al asistencialismo en los últimos tres decenios. Con frecuencia, las donaciones de medicinas, alimentos e insumos o herramientas agrícolas son una de las pocas formas de mantener contactos con los ex participantes de las redes en zonas de emergencia. Las donaciones son medios para demostrar que alguien todavía se preocupa de mantener las organizaciones y todo lo existente en el lugar. Se mantiene el compromiso personal y la confianza que se

encuentra en el corazón del trabajo eficaz de desarrollo. Debemos encontrar nuevas formas creativas de utilizar estas donaciones como palancas para revertir la ola de violencia, y no sólo como las condiciones previas para la sumisión.

Un director de Ayacucho dice, “la ayuda directa es complicada. Tienes que ensuciarte las manos, dar comodidad e involucrarte, haciendo participar a la población local. No queremos hacer mendigos profesionales”. Hay varias clases de fórmulas no convencionales que deben buscarse en situaciones de riesgo político. Estos grupos no ofrecen toda la parafernalia de las OAB, pero ofrecen un acceso único a los grupos marginados. Estos grupos poseen un alto rendimiento respecto de los fondos asignados y la participación de las organizaciones locales. Estos son los grupos que no van a llamar a las puertas de los organismos donantes por financiamiento. Tanto los centros como los organismos donantes serán bien atendidos cuando los busquen. Los organismos donantes deben buscarlos activamente a través de un profundo conocimiento de las redes provinciales.

- Es necesario el estudio continuo de la violencia política, su contexto histórico, su dinámica social y política y otras facetas. Por ejemplo, los militares tienen puntos ciegos en su perspectiva, incluyendo el mal uso y distribución de la inteligencia. La cuestión de la violencia es demasiado importante para dejarla en manos de los militares.

Hay varios grupos que ahora estudian la violencia y coordinan su trabajo: grupos de derechos humanos y centros de investigación como el Instituto de Defensa Legal, Democracia y Socialismo-Instituto de Política Popular, DESCO, Instituto Bartolomé de las Casas (Lima) y CEAPAZ. La ANC ha creado una Comisión Permanente de Violencia política y Desarrollo. InterCentros tiene un grupo de tareas.

El estudio de la violencia durante la última década se ha basado en unos pocos especialistas: “senderólogos” y “violentólogos” que han desbrozado el terreno. Periodistas, antropólogos e historiadores, junto con defensores de derechos humanos han seguido el problema. Carlos

Iván Degregori, Raúl González, Nelson Manrique y Gustavo Gorriti, han hecho contribuciones. Estos investigadores lo hacen a riesgo personal, porque la publicación de sus resultados puede provocar represalias. El hecho ha evitado también que muchas personas en las provincias y pueblos jóvenes contribuyan públicamente, ya que también podrían ser blancos de represalias y pondrían en peligro su capacidad para seguir trabajando.

La fase de estudios individualistas ha terminado. El problema es demasiado complejo y entrelazado para que los individuos tengan un impacto eficaz. Así como la contrainsurgencia es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de los militares, la cuestión de la violencia política es demasiado vital para el país para dejar en manos de los “senderólogos” y “violentólogos”. Estos estudios deben mezclarse con esfuerzos en equipo, coordinados entre organizaciones para no duplicar esfuerzos. También proveería instancias en que los participantes de primera línea podrían añadir su experiencia sin riesgos.

Sin embargo, existe el grave peligro de intelectualizar el problema, tomando una perspectiva distante y fría que haga difícil convertir las conclusiones y recomendaciones en acciones concretas. Aquí es donde los centros de desarrollo rural y otros pueden hacer una importante contribución, sobre la base de su experiencia de primera mano con organizaciones de base, para plasmar la defensa de los campesinos y sus experiencias de resistencia a través de asociaciones establecidas y de confianza, a fin de reducir la discusión a un nivel más pragmático.

Existe un enorme vacío en la respuesta a la situación que las organizaciones de base están atravesando. La mayoría de las propuestas para la pacificación, la política de contrainsurgencia y otros puntos tienden a perderse en los temas nacionales y las reformas legales. No proporcionan orientaciones y explicaciones para quienes están más cerca de los combates.

- Las OAB y otros esfuerzos de desarrollo no avanzarán hacia el logro de sus objetivos a menos que exista un horizonte de mediano plazo de

estabilidad y gobernabilidad. La situación actual, de extrema agitación económica e inestabilidad del gobierno, impone nuevas prioridades. El personal de las OAB tiene que luchar a ciegas con el problema de la correspondiente financiación, más el aumento de los gastos. Deben ajustar sus programas a las realidades cambiantes. Ellos tienen que lidiar con su propio rol y con las relaciones institucionales. La crisis pone en el bote de basura las estrategias de supervivencia cuidadosamente trazadas de las organizaciones de base.

Las variables clave de esta situación son los mercados y el Estado peruano. (Gianotten y De Wit 1990, 250). La asistencia internacional a través de gobiernos, organismos donantes y las organizaciones multinacionales puede desempeñar un papel en ayudar al Perú a encontrar un ancla.

Un problema grave es cómo el Perú puede responder a las exigencias macroeconómicas de la crisis y a la vez hacer frente a los problemas del desarrollo andino. Si una línea de tensión en la que se basa la violencia ha sido la interfaz urbano-rural, un intento de obligar a una lógica urbana-externa en todo el país podría tener un efecto deteriorante sobre los Andes.

Esta cuestión de política macro también afecta a otros componentes de la ecuación de la violencia, como la Policía, las Fuerzas Armadas y el sistema de aplicación de la ley. Sólo un esfuerzo a mediano plazo para unir a las instituciones civiles y las fuerzas de seguridad en el establecimiento de políticas mutuamente aceptables de pacificación proporcionará un marco más viable para la labor de desarrollo. Esto no quiere decir que las OAB no tienen un rol en esta coyuntura. De hecho, hay muchos nuevos desafíos a enfrentar, ayudando a sus socios locales.

- Corresponde a los organismos donantes el mantener viables estos nichos de la sociedad civil. Puede ser una tentación cerrar la tienda por un tiempo hasta que el panorama político y económico se aclare (menos molestias en las sedes centrales para justificar gastos en proyectos atrasados, y menos escrúpulos morales por colocar al personal y a

socios locales en situaciones de riesgo). Por desgracia, cuando estas agencias donantes regresen en el Perú, pueden encontrar que los enclaves (centros y organizaciones de base) ya no son viables. Sin embargo, ello no debe significar un cheque en blanco para centros de desarrollo perennes en las zonas rurales, o el prerequisite de rendición de cuentas para los proyectos y programas. Los proyectos mal concebidos y ejecutados deberán ser sancionados con su modificación o suspensión. Queda el problema de establecer un marco claro, mutuamente aceptable, criterios amplios de eficiencia y rentabilidad para juzgar los rendimientos y méritos de la promoción del desarrollo en estas difíciles circunstancias.

- Los centros del Perú representan uno de los espacios independientes generados dentro de la sociedad peruana en las últimas tres décadas. Ellos tienen un grado de responsabilidad ante sus organismos donantes y sus socios de base. Ellos tienen la oportunidad de vincular la teoría y la praxis en situaciones concretas. Su experiencia práctica con las organizaciones de base es un activo inestimable para el futuro.

REFERENCIAS

ANC

1988 *Directorio de Organismos No Gubernamentales de Promoción Social, Investigación y Desarrollo del Perú* (Lima: Asociación Nacional de Centros).

Boutrou, Jean-Jacques

1989 “*La Cooperación Internacional al Desarrollo y Organizaciones de Base*”, en *Ruralter* N° 5 (Lima), Julio 1989, 13-31.

Caroll, Thomas, Denis Humphreys y Martin J. Scurrah

1990 “*Organizaciones de apoyo a grupos de base en el Perú: Una radiografía*”, en *Socialismo y Participación* N° 50 (Junio 1990).

CEPES

1988 *El Perú en una encrucijada: Centros de Promoción -- Retos y Alternativas* (Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales)

Chirif, Alberto, Nelson Manrique y Benjamín Quijandría (editores)

1990 *Perú: El problema agrario en debate* (Lima: Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas y Seminario Permanente de Investigación Agraria –SEPIA)

Degregori, Carlos Iván

1986 *Sendero Luminoso: Los hondos y mortales desencuentros. Lucha armada y utopía autoritaria* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos)

1989 *Que difícil es ser dios: Ideología y violencia política en Sendero Luminoso* (Lima: El Zorro de Abajo Ediciones)

1990 *El surgimiento de Sendero Luminoso: Del movimiento por la gratuidad de la enseñanza al inicio de la lucha armada, Ayacucho 1969-1979* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos)

Democracia y Socialismo – Instituto de Política Popular

1989 *Perú: La violencia política vista desde las experiencias del pueblo* (Lima, Democracia y Socialismo – Instituto de Política Popular)

De Rementería, Iván

1989 “*La sustitución de cultivos como perspectiva*”, en García Sayán, editor (1989): 361-388.

DESCO

1990 *Violencia Política en el Perú: 1980-1988* (Lima: DESCO)

Díaz Martínez, Antonio

1985 *Ayacucho: Hambre y esperanza* (Lima: Mosca Azul Editores)

Favre, Henri

1987 *Perú: Sendero Luminoso y horizontes ocultos* (México: Universidad Nacional Autónoma de México), Separata, *Cuadernos Americanos*, N° 4, Julio-Agosto 1987.

Figueroa, Adolfo

1982 *Reestructuración agraria en la Sierra peruana* (Lima: Confederación de Campesinos del Perú).

Fraslin, Jean-Hervé

1988 “*Concepción ‘sistémica’ y primeros resultados de un diagnóstico previo a un proyecto de desarrollo*”, en *Ruralter* (Junio): 69-87.

García Sayán, Diego (editor)

1989 *Coca, cocaína y narcotráfico: Laberinto en los Andes* (Lima: Comisión Andina de Juristas)

García Sayán, Diego

1987 *“Perú: Estados de excepción y régimen jurídico”*, en Diego García Sayán (editor), *Estados de emergencia en la región andina* (Lima: Comisión Andina de Juristas): 95-125

Gianotten, Vera, Ton de Wit y Hans de Wit

1985 *“The impact of Sendero Luminoso on regional and national politics in Peru”*, en *New social movements and the State in Latin America*, D. Slater (editor), Amsterdam: Centre for Latin American Research and Documentation–CEDLA: 171-202

Gianotten, Vera y Ton de Wit

1987 *Organización campesina: El objetivo político de la educación popular y la investigación participativa* (Lima: Tarea)

1990 *“Reflexiones sobre las prácticas de los Centros de Promoción”*, en Chirif et al (1990): 243-251.

Gonzales, José

1989 *“Perú: Sendero Luminoso en el Valle de la Coca”*, en García Sayán, editor (1989): 207-222.

González, Raúl

1986 *“¿Qué pasa en Puno?”*, en *Quehacer* 43, (Octubre 1986): 31-52.

1988 *“MRTA: La historia desconocida”*, en *Quehacer* 51 (Marzo-Abril, 1988): 32-44.

Gorriti, Gustavo

1990 *Sendero: Historia de la guerra milenaria en el Perú* (Lima: Apoyo S.A.).

Harding, Colin

1988 “Antonio Díaz Martínez and the ideology of Sendero Luminoso”, en *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 7, N° 1: 65-73.

Huadry de Soucy, Roberto

1990 “Proyectos de inversión en la sierra y políticas de desarrollo rural”, en Chirif et al (1990): 253-272.

IDL - Instituto de Defensa Legal

1989a *Los grupos paramilitares* (Lima, IDL)

1989b *El papel de la organización social campesina en la estrategia antisubversiva. La propuesta de Expreso* (Lima: IDL).

1989c *A la guerra no se juega: Una aproximación al pensamiento militar en el Perú* (Lima: IDL).

1989d *Puno hoy: Tierra y violencia* (Lima: IDL).

1990 *Perú 1989: En la espiral de violencia* (Lima: IDL).

IGP

1989 *Atlas del Perú*, Lima, Instituto Geográfico del Perú.

IPA

1990 *Sur andino: Problemática y alternativas* (Cusco: Instituto de Pastoral Andina).

Isbell, Billie Jean

1988 “The emerging patterns of peasants' responses to Sendero Luminoso”, ponencia presentada en *Patterns of social change in the Andes research*, conferencia auspiciada por la New York University y el Columbia University LAS Consortium, New York, 9 de Diciembre de 1988.

Judd, Steven

1987 *The emergent Andean Church: Inculturation and liberation in southern Peru, 1968-1986*, tesis.

Lopes Aheado, Carlos A.

1988 *Apuntes para una historia de la lucha por la tierra en Puno durante el siglo XX: La tierra, la violencia y la paz* (Lima: Instituto de Apoyo Agrario).

Manrique, Nelson

1989 “*Sierra central: La batalla decisiva*”, en *Quehacer* 60 (Agosto): 63-71.

Mauceri, Philip

1989 *Militares: Insurgencia y democratización en el Perú, 1980-1988* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1989)

McClintock, Cynthia

1983 “*Sendero Luminoso: Peru's maoist guerrillas*”, en *Problems of Communism* (Setiembre-October): 19-34.

1889 “*Peru's Sendero Luminoso rebellion: Origins and trajectory*”, en Susan Eckstein, (editora), *Protest and popular protest: Latin American social movements* (Berkeley, University of California Press): 61-101.

McCormick, Gordon H.

1990 *The Shining Path and the future of Peru* (Washington, D.C.: The Rand Corporation)

Monge, Carlos

1989 “*Los gremios campesinos y la promoción del desarrollo*”, en *Ruralter* N° 5 (Julio): 33-47.

Otta, Vicente

1989 *Violencia política y promoción social* (Lima: EDAPROSPO).

Padrón, Mario (editor)

1988 *Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo en el Perú* (Lima: DESCO).

Palao Berastáin, Juan

1988 *Programas, proyectos, micro-regiones y desarrollo rural: El caso de Puno, 1947-1987* (Lima: Fundación Friedrich Ebert).

Partido Comunista del Perú

1988 *Bases de Discusión del PCP*, publicado en *El Diario*, en cinco suplementos especiales, 3-8 Enero de 1988. Las referencias usan números romanos para el suplemento, y números arábigos para las páginas de cada suplemento.

PRATEC

1988 *Manchay Tiempo: Proyectos de desarrollo en tiempos de temor en Ayacucho* (Lima: Proyecto de Tecnologías Campesinas)

Reid, Michael

1989 “*Una región amenazada por el narcotráfico*”, en García Sayán, editor (1989): 133-169.

Rénique, Luis

1987 “*Estado, partidos políticos y lucha por la tierra en Puno*”, en *Debate Agrario* N° 1 (Octubre-Diciembre, 1987): 55-76.

Rojas, Telmo

1988 “*Límites y posibilidades del desarrollo microregional*”, en Fernando Eguren et al, (editores), *Perú: El problema agrario en debate*, Lima, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y Seminario Permanente de Investigación Agraria, 386-391.

Sánchez Enríquez, Rodrigo

1989 “*Las SAIS de Junín y la alternativa comunal*”, Debate Agrario N° 7 (Julio-Diciembre, 1989): 85-101.

Comisión del Senado sobre las causas de la violencia y alternativas de pacificación en el Perú

1989 *Violencia y Pacificación* (Lima: DESCO y Comisión Andina de Juristas)

Smith, Michael L.

1991 “*Taking the high ground: Peru's Sendero Luminoso guerrillas and the Andes*”, en David Scott Palmer (editor), *The Shining Path of Peru* (New York: St. Martin Press)

Taylor, Lewis

1983 *Maoism in the Andes: Sendero Luminoso and the contemporary guerrilla movement in Peru* (Liverpool: Center For Latin American Studies, Liverpool University)

UNSCH

1977 *Libro Jubilar en homenaje al tricentenario de su fundación, Ayacucho*, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

Vega, Ricardo

1985 *La reestructuración democrática de las empresas asociativas en Puno*, (manuscrito, 21 de Octubre de 1985).

Velarde, Federico

1988 “*Las ONG en el Peru: Algunas notas*”, en CEPES (1988): 185-195.